

LA LUCHA POR LA TIERRA: FINANCIARIZACIÓN Y RESISTENCIA CAMPESINA EN LA REGIÓN ANDINA

Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios - ECACEN



Grupo de Investigación:
Cananguchales



Sello Editorial

Universidad Nacional
Abierta y a Distancia

LA LUCHA POR LA TIERRA: FINANCIARIZACIÓN Y RESISTENCIA CAMPESESINA EN LA REGIÓN ANDINA

Autores:

Yesid Alexander Garces Pulido
Ivan Alveiro Quintero Castaño
Adriana Carolina Guevara Rincón

Grupo de Investigación:

Cananguchales

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA (UNAD)

Jaime Alberto Leal Afanador

Rector

Constanza Abadía García

Vicerrectora académica y de investigación

Leonardo Yunda Perlaza

Vicerrector de medios y mediaciones pedagógicas

Edgar Guillermo Rodríguez Díaz

Vicerrector de servicios a aspirantes, estudiantes y egresados

Leonardo Evemeleth Sánchez Torres

Vicerrector de relaciones intersistémicas e internacionales

Martha Viviana Vargas Galindo

Vicerrectora de inclusión social para el desarrollo regional y la proyección comunitaria

Sandra Rocío Mondragón

Decana Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios

Juan Sebastián Chiriví Salomón

Líder Nacional del Sistema de Gestión de la Investigación (SIGI)

Martín Gómez Orduz

Líder Sello Editorial UNAD



LA LUCHA POR LA TIERRA: FINANCIARIZACIÓN Y RESISTENCIA CAMPESINA EN LA REGIÓN ANDINA

Autores:

Yesid Alexander Garces Pulido, Ivan Alveiro Quintero Castaño, Adriana Carolina Guevara Rincón

Grupo de Investigación:

Cananguchales

ISBN:

e-ISBN:

Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios

©Editorial
Sello Editorial UNAD
Universidad Nacional Abierta y a Distancia
Calle 14 Sur No. 14-23
Bogotá D. C.

Julio de 2026.

Corrección de textos: Milena Espinosa Manrique

Diseño de portada:

Diagramación: Nathalia A. López Ramírez

Impresión:

Cómo citar este libro: Garces Pulido, Y. A., Quintero Castaño, I. A. y Guevara Rincón, A. C. (2026). *La lucha por la tierra: financiarización y resistencia campesina en la región andina*. Sello Editorial UNAD. DOI PENDIENTE.

Esta obra está bajo una licencia Creative Commons - Atribución – No comercial – Sin Derivar 4.0 internacional.
https://co.creativecommons.org/?page_id=13.



Reseña del libro

La lucha por la tierra: financiarización y resistencia campesina en la región andina es una obra que se adentra en la complejidad de las dinámicas rurales contemporáneas, explorando las intersecciones entre la financiarización, el despojo territorial y las resistencias campesinas. Este libro, que combina un análisis conceptual riguroso con estudios de caso específicos, es una contribución esencial para quienes buscan comprender los procesos de transformación territorial en América Latina y el papel crucial del campesinado en la defensa de sus tierras y formas de vida.

El libro aporta al estudio de la geografía crítica, la ecología política y los estudios rurales en América Latina. Su enfoque interdisciplinario ofrece una visión integral de los desafíos y las resistencias del campesinado frente a las fuerzas del capital global. Además, se destaca por articular lo teórico con lo práctico, de modo que proporciona una reflexión profunda sobre las formas de vida campesinas y su lucha por mantener la soberanía territorial y epistemológica en un contexto de creciente financiarización.

Dirigido tanto a académicos como a activistas, *La lucha por la tierra: financiarización y resistencia campesina en la región andina* es un llamado a repensar las políticas de desarrollo rural y a valorar las resistencias campesinas como alternativas viables frente a los modelos extractivistas y neoliberales que dominan la agenda global.

Reseña de los autores

Yesid Alexander Garces Pulido

Es doctor en Administración Gerencial de la Universidad Benito Juárez, magíster en Gerencia del Talento Humano de la Universidad de Manizales y administrador de empresas de la Universidad del Tolima. Actualmente es doctorando en Educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL). A lo largo de su trayectoria académica se ha desempeñado como docente e investigador en instituciones de educación superior como la Universidad de Cundinamarca, la Universidad de los Llanos y la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), desarrollando experiencia particularmente en educación a distancia, investigación y formación universitaria. Sus investigaciones se centran en el pensamiento crítico, con especial énfasis en el marxismo analítico y en el estudio de las transformaciones de las dinámicas del trabajo y la gestión humana en contextos rurales y urbanos.

Ivan Alveiro Quintero Castaño

Es doctorando en Educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL), magíster en Educación de la Universidad del Valle, licenciado en Física de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y tecnólogo en Gestión Bibliotecaria del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). A lo largo de su carrera ha trabajado como docente e investigador en diversas instituciones públicas, como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES). Además, ha sido asesor y formador de docentes del sector público, así como docente en colegios tanto públicos como privados. Actualmente, se desempeña como docente en el sector oficial, vinculado a la Secretaría de Educación Municipal de Santiago de Cali. Sus líneas de investigación incluyen la sociología del trabajo, las estéticas pedagógicas desde una concepción marxista y el desarrollo endógeno, con un enfoque en el fortalecimiento educativo y social en comunidades vulnerables.

Adriana Carolina Guevara Rincón

Es ingeniera forestal y especialista en Gestión Ambiental y Evaluación del Impacto Ambiental de la Universidad del Tolima. Cuenta con más de doce años de experiencia en planificación territorial y gestión ambiental. Ha desempeñado un papel clave en el desarrollo de modelos de ordenamiento territorial alternativo, como las Zonas de Reserva Campesina (ZRC), y ha trabajado en proyectos de desarrollo sostenible en las ZRC de Chaparral (Tolima), Togüí (Boyacá) y Cimitarra (Bolívar y Antioquia), entre otras. Actualmente, es investigadora en el Instituto de Estudios Interculturales de la Pontificia Universidad Javeriana Seccional Cali, donde contribuye al desarrollo de estrategias

Contenido

Reseña del libro	5
Reseña de los autores	6
Prefacio	13
Prólogo	14
Introducción	15
Capítulo 1. Territorio, subjetividad y justicia epistémica: hacia una resistencia ontológica campesina en América Latina	21
Enfoque metodológico y delimitación analítica	22
Territorio y subjetividades campesinas: disputa, desarrollo y resistencia ontológica	23
Modelos de desarrollo y territorialidad campesina	26
Aproximaciones conceptuales a las diferentes perspectivas del territorio	27
El territorio como entidad decolonial y su relación con los modelos de desarrollo rural	29
Subjetividades campesinas ante los modelos de desarrollo rural	30
Nueva ontología de la resistencia desde el sujeto campesino	32
Conclusiones	36
Capítulo 2. Economías rurales y la trampa de la deuda: financiarización y despojo del campesinado	39
Delimitación metodológica y procedimientos analíticos	40
La subjetividad campesina en el contexto de la financiarización: un análisis crítico ampliado	41
Despojo y microfinanciarización en las economías rurales: expansión crítica	45
Subjetividad, control y resistencia: el campesino endeudado	51
Acumulación por desposesión y la configuración del territorio	57
Interpretación de patrones espaciales y dinámicas de financiarización	59
Conclusiones	63

Capítulo 3. Transformaciones socioambientales y resistencia territorial en la región andina del Tolima: vocación del suelo y conflictos por el uso del territorio	65
Delimitación metodológica y procedimientos analíticos	68
Ubicación geográfica	69
Caracterización biofísica y ambiental	71
Áreas protegidas	83
Proyecciones para la planificación rural, el ordenamiento territorial y las estrategias institucionales	85
Conclusiones	86
Capítulo 4. Transformaciones agrarias y desafíos territoriales en el norte del Tolima: acumulación de tierras, avalúos catastrales y resistencia campesina	91
Delimitación metodológica y procedimientos analíticos	93
La lucha por la tierra en el Tolima: frontera agrícola, acumulación y resistencias campesinas	94
Agricultura familiar y sistemas territoriales en el norte del Tolima	95
Análisis marxista del problema de la tierra en el norte del Tolima: datos y proyecciones específicas	110
Reconfiguración territorial y productiva en el norte del Tolima: el rol de los Territorios Campesinos Agroalimentarios	113
Hacia una reconfiguración del territorio: agroecología, resistencia y futuro campesino	118
Capítulo 5. De la trampa de la deuda a la soberanía material: los TECAM como horizonte político y praxis de resistencia en el norte del Tolima	123
Trayectoria del trabajo de campo y condiciones de inteligibilidad del análisis	125
La vereda El Convenio: cartografía de un territorio en disputa	126
Operacionalización analítica: índices socioecológicos como traducción de la experiencia campesina	131
Resultados socioecológicos sistematizados: la métrica del despojo y las fisuras de la autonomía	134
Los TECAM como contrarracionalidad territorial y articulación multiescalar	136
Matriz de políticas públicas y proyecciones analíticas: hacia una soberanía material institucionalizada	138
Síntesis crítica y horizonte civilizatorio: totalidad, mediaciones y reexistencia	140

La lucha por la tierra es la lucha por la vida

143

Conclusiones

145

Hacia un futuro de soberanía y justicia territorial

145

Soberanía material y disputa por las formas de vida: una síntesis ontológica, epistemológica y política

152

Referencias

155

Lista de figuras

Figura 1. Coberturas naturales nivel 1	78
Figura 2. Cantidad de predios por tamaño predial en el municipio de Líbano	100
Figura 3. Distribución porcentual del área por tamaño predial de Líbano	101
Figura 4. Cantidad de predios por tamaño predial en el municipio de Murillo	101
Figura 5. Distribución porcentual del área por tamaño predial de Murillo	102
Figura 6. Cantidad de predios por tamaño predial en el municipio de Villahermosa	102
Figura 7. Distribución porcentual del área por tamaño predial de Villahermosa	103

Lista de tablas

Tabla 1. Extensión territorial de los municipios del área de estudio	70
Tabla 2. Vocación y uso principal del suelo	74
Tabla 3. Coberturas naturales nivel 1	78
Tabla 4. Coberturas naturales nivel 3	79
Tabla 5. Oferta ambiental	82
Tabla 6. Áreas protegidas	84
Tabla 7. Agricultura familiar	96
Tabla 8. Frontera agrícola	98
Tabla 9. Tamaño predial	99
Tabla 10. Mercado de tierras y avalúo catastral en el municipio de Líbano	106
Tabla 11. Mercado de tierras y avalúo catastral en el municipio de Murillo	107
Tabla 12. Mercado de tierras y avalúo catastral en el municipio de Villahermosa	108
Tabla 13. Distribución de la tenencia de la tierra según rango de propiedad en la vereda El Convenio	129
Tabla 14. Especificación técnica de índices socioecológicos y ecuaciones de cálculo	133
Tabla 15. Resultados promedio de los parámetros evaluados en las unidades productivas rurales de El Convenio	134
Tabla 16. Matriz de reconfiguración de políticas públicas para los TECAM	138

Lista de mapas

Mapa 1. Ubicación geográfica del área de estudio	70
Mapa 2. Vocación de uso del suelo	73
Mapa 3. Coberturas naturales nivel 3	79
Mapa 4. Oferta ambiental	82
Mapa 5. Áreas protegidas	83
Mapa 6. Agricultura familiar	96
Mapa 7. Frontera agrícola	97
Mapa 8. Tamaño predial	104
Mapa 9. Áreas para el mercado de tierras	105
Mapa 10. Avalúos catastrales	109

participativas en los acápite biofísicos y ambientales de planes de ordenamiento territorial rural en diversas regiones de Colombia.

Prefacio

En las últimas décadas, las comunidades campesinas en América Latina han enfrentado un proceso acelerado de despojo territorial, precarización y financiarización, que ha transformado sus formas tradicionales de vida. Este libro, titulado *La lucha por la tierra: financiarización y resistencia campesina en la región andina*, ofrece una mirada crítica a los procesos contemporáneos que están alterando de manera profunda el tejido rural, especialmente en el contexto colombiano. La obra explora cómo la expansión del capital, mediante la financiarización, ha subordinado las economías rurales a lógicas de deuda y crédito, lo cual ha erosionado la soberanía alimentaria y territorial de las comunidades campesinas.

Este texto tiene un enfoque interdisciplinario, que entrelaza la geografía crítica, la ecología política y el análisis de la subjetividad campesina. El propósito principal de esta investigación es comprender cómo las dinámicas globales del capitalismo afectan no solo las economías rurales, sino también las formas de ser y de pensar de los campesinos, quienes, a pesar de las adversidades, continúan luchando por la defensa de sus territorios y la construcción de alternativas basadas en la agroecología y la soberanía alimentaria.

A lo largo del libro, se examinan casos concretos en la región andina del Tolima, Colombia, donde las comunidades han resistido a las políticas extractivistas y la acumulación por despojo, al mismo tiempo que se han organizado en torno a Zonas de Reserva Campesina y Territorios Campesinos Agroalimentarios (TECAM). En este sentido, la obra no solo ofrece un análisis teórico y empírico de la financiarización rural, sino que también reivindica las luchas campesinas como formas legítimas de resistencia ante el avance del capital.

Prólogo

El libro *La lucha por la tierra: financiarización y resistencia campesina en la región andina* se presenta como una contribución crucial para el análisis de las luchas campesinas en América Latina, un continente donde el territorio y los recursos naturales siguen siendo campos de batalla entre las comunidades y las fuerzas del capital global. Los autores trazan un recorrido por la historia reciente del despojo campesino, examinando cómo la lógica neoliberal ha permeado hasta los rincones más profundos de la ruralidad, imponiendo nuevas formas de subordinación por medio de la deuda y el crédito.

En este texto, encontramos un análisis riguroso que nos invita a repensar el rol del campesinado en la contemporaneidad. Más allá de ser solamente actores en la producción agrícola, los campesinos se presentan aquí como agentes clave en la lucha contra la mercantilización de la vida y la naturaleza. La obra nos recuerda que, en la resistencia campesina, se ponen en juego no solo cuestiones económicas, sino también epistemológicas y ontológicas, ya que los campesinos defienden modos de vida que desafían la lógica del capital y proponen formas alternativas de organización social, económica y política.

El enfoque crítico y profundo de este libro lo convierte en una lectura obligatoria para quienes estudian las dinámicas del poder en los territorios rurales, la financiarización y las resistencias campesinas. Los autores ofrecen un testimonio de las luchas que continúan en el campo, reivindicando la importancia de la soberanía campesina como una herramienta de emancipación.

Introducción

El contexto rural latinoamericano ha experimentado profundas transformaciones en las últimas décadas, particularmente en la región andina, como resultado de la implementación de políticas neoliberales y la financiarización. Estas dinámicas han reconfigurado las economías rurales, lo que ha generado la subordinación de los campesinos a nuevas formas de despojo territorial y precarización. *La lucha por la tierra: financiarización y resistencia campesina en la región andina* examina críticamente estos procesos en Colombia, con un enfoque en las comunidades campesinas del Tolima. Este libro pretende aportar al análisis de cómo las resistencias campesinas están profundamente vinculadas con la defensa de la soberanía alimentaria y territorial, situando al campesinado como sujeto central en la lucha contra el avance del capital global.

Bajo la expansión del capitalismo global, la tierra ha dejado de ser un espacio de subsistencia para convertirse en una mercancía sujeta a las lógicas del mercado. Las comunidades campesinas, que históricamente han mantenido una relación simbiótica con la tierra, se encuentran atrapadas en un sistema económico que las empuja hacia la producción intensiva orientada al mercado. Este proceso ha transformado no solo las economías rurales, sino también las subjetividades campesinas, moldeando su relación con el territorio, el trabajo y las formas de vida comunitarias.

Uno de los mecanismos más efectivos por el cual el capital ha penetrado en las economías rurales es la financiarización. Este fenómeno ha permitido a los actores financieros capturar el valor generado en el campo mediante la deuda y el crédito. En el marco de políticas promovidas por instituciones financieras globales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI), los campesinos se han visto atrapados en ciclos de endeudamiento crónico que los obligan a subordinarse a las exigencias del capital financiero. La financiarización no actúa únicamente como un proceso económico; también transforma la subjetividad campesina, erosionando las formas tradicionales de vida y sustituyéndolas por nuevas racionalidades productivas basadas en la lógica del mercado.

A pesar de los profundos impactos de la financiarización, las comunidades campesinas no han sido actores pasivos. La resistencia ontológica, un concepto desarrollado por autores como Arturo Escobar (2014), resulta clave para entender cómo estas comunidades no solo luchan por la defensa de su territorio material, sino también por la preservación de sus formas de vida y de conocimiento. Esta resistencia campesina, más allá de lo material, representa una lucha ontológica y epistémica frente a la imposición de las lógicas extractivistas del capital. El campesinado no solo resiste al despojo físico de la tierra, sino también al intento de despojarlo de sus saberes y prácticas ancestrales.

En este libro, el análisis de las resistencias campesinas pone en primer plano la importancia de la soberanía alimentaria y la agroecología como estrategias para desafiar

el modelo extractivista. La soberanía alimentaria se entiende como el derecho de las comunidades a controlar su propio sistema alimentario, defendiendo su capacidad para producir alimentos de manera sostenible, con independencia de las imposiciones del mercado global. La agroecología, por su parte, surge no solo como una práctica agrícola, sino también como un modo de conocimiento que valora las interacciones entre los ecosistemas y las culturas campesinas. En contraposición al monocultivo, la agroecología refuerza la diversidad biológica y cultural, de modo que ofrece un modelo basado en la autosuficiencia y la sostenibilidad, alternativo al desarrollo rural.

Sin embargo, la financiarización no solo implica un despojo material, sino también un despojo subjetivo. Las comunidades campesinas, sometidas a la lógica de la deuda, pierden progresivamente su autonomía y se ven obligadas a adoptar prácticas agrícolas intensivas orientadas al mercado global. Este proceso de acumulación por desposesión, como lo define David Harvey (2004, 2017), está en el centro del despojo territorial. Los avalúos catastrales y las políticas de desarrollo rural, lejos de beneficiar a las comunidades, han facilitado la concentración de tierras en manos de grandes capitales, lo cual ha fomentado el desplazamiento de los pequeños productores. Por medio de los estudios de caso en el norte del Tolima, este libro muestra cómo estas dinámicas de acumulación están profundamente entrelazadas con las estructuras de poder económico, exacerbando la precariedad y la pobreza rural.

No obstante, la resistencia campesina ha encontrado vías para desafiar estos procesos de despojo. La creación de Zonas de Reserva Campesina (ZRC) y los Territorios Campesinos Agroalimentarios (TECAM) representan esfuerzos colectivos por construir autonomía territorial frente al avance del capital. Estas iniciativas no son solamente actos de conservación ambiental; son proyectos políticos que buscan redefinir las relaciones entre las comunidades campesinas y sus territorios, proponiendo un modelo de desarrollo basado en la soberanía alimentaria y la agroecología. Al reivindicar el territorio como un espacio de vida y no como un recurso explotable, las comunidades campesinas están proponiendo formas alternativas de habitar el mundo, en oposición a las lógicas extractivistas del capitalismo global.

Este libro se organiza en cinco capítulos que analizan, de manera progresiva, las dinámicas de resistencia campesina frente a la financiarización y el despojo territorial. Cada capítulo combina un análisis teórico riguroso con estudios de caso empíricos que permiten comprender de manera integral los procesos contemporáneos que afectan a las comunidades rurales en la región andina.

En el primer capítulo, titulado Territorio, subjetividad y justicia epistémica: hacia una resistencia ontológica campesina en América Latina, se establece el fundamento teórico de la obra al proponer que la disputa por la tierra en América Latina no puede entenderse únicamente como un conflicto por recursos o propiedad, sino como una confrontación entre racionalidades territoriales, epistémicas y ontológicas. Desde un enfoque cualitativo de corte crítico-hermenéutico, sustentado en revisión documental,

análisis dialéctico de categorías y lectura territorial de dinámicas socioecológicas, se articulan aportes de la geografía crítica, la ecología política y las epistemologías del Sur para mostrar que el territorio es una construcción socioecológica atravesada por relaciones de poder. Entre los principales aportes del capítulo se destacan la comprensión de la territorialidad campesina como espacio de vida y reproducción social, la categoría de multiterritorialidad como clave para entender las redes de resistencia, y la incorporación de la justicia epistémica para hacer evidente que el despojo también opera mediante la deslegitimación de los saberes campesinos. Su potencialidad radica en ofrecer un marco analítico sólido que reposiciona al campesinado como sujeto territorial, político y cognitivo; aunque, debido a su enfoque teórico-conceptual, cuenta con un menor sustento empírico directo. Se concluye que la resistencia campesina es material, epistemológica y ontológica, y que, sin el reconocimiento efectivo de sus territorialidades, saberes y formas de vida, toda política rural corre el riesgo de reproducir las mismas lógicas de dominación que pretende superar.

En el segundo capítulo, titulado Economías rurales y la trampa de la deuda: financierización y despojo del campesinado, se desarrolla una crítica sólida a la financierización de las economías rurales al mostrar cómo el crédito y las microfinanzas, presentados como instrumentos de inclusión y desarrollo, operan en realidad como mecanismos de despojo, subordinación y control sobre el campesinado. Desde un enfoque cualitativo-crítico de orientación histórico-estructural, apoyado en revisión documental, triangulación de informes institucionales, estudios de caso y análisis crítico del discurso sobre inclusión financiera, se demuestra que la deuda no solo reorganiza la producción rural, sino que transforma la subjetividad campesina, imponiendo una lógica de dependencia, culpabilidad y disciplina funcional al capital financiero. Entre los principales aportes del capítulo se destacan la articulación entre acumulación por desposesión, control biopolítico y reconfiguración territorial, así como la evidencia de que la microfinancierización erosiona la autonomía productiva, fragmenta los lazos comunitarios y favorece la mercantilización de la tierra. Su potencialidad radica en ofrecer una lectura estructural del endeudamiento rural que enlaza economía política, subjetividad y territorio; aunque, debido a su enfoque teórico y amplitud comparativa, algunos desarrollos empíricos locales resultan más ilustrativos que demostrativos. Se concluye que la deuda rural constituye una forma contemporánea de dominación que afecta simultáneamente la vida material, la organización social y la relación con el territorio, y que existen resistencias campesinas, agroecológicas y solidarias capaces de disputar esa lógica y abrir horizontes alternativos de autonomía y soberanía territorial.

En el tercer capítulo, titulado Transformaciones socioambientales y resistencia territorial en la región andina del Tolima: vocación del suelo y conflictos por el uso del territorio, se examinan, desde una perspectiva socioecológica crítica, las transformaciones territoriales en los municipios de Líbano, Murillo y Villahermosa, y se muestra cómo la divergencia entre la vocación natural del suelo y su uso efectivo revela un conflicto estructural entre sostenibilidad ecosistémica y expansión agropecuaria. Desde un enfoque cualitativo-crítico, apoyado en revisión documental de fuentes ofi-

ciales, análisis geoespacial comparativo y triangulación teórico-metodológica desde la ecología política y la geografía agraria crítica, se demuestra que la predominancia de coberturas agrícolas sobre territorios de vocación mayoritariamente forestal y de conservación no constituye simplemente un cambio de uso del suelo, sino una manifestación de acumulación por desposesión, fragmentación ecológica y presión sobre la agricultura familiar. Entre los principales aportes del capítulo se destacan la articulación entre evidencia biofísica, cartografía temática y lectura política del territorio, al igual que la valoración de figuras como las ZRC y los TECAM como estrategias de resistencia, reterritorialización y defensa de la soberanía alimentaria. Su potencialidad radica en vincular de manera convincente análisis ambiental, estructura agraria y conflictividad territorial, aunque por momentos el enfoque conceptual y normativo supera la profundización de algunos procesos sociales concretos. Se concluye que el territorio andino del Tolima se encuentra en disputa entre lógicas extractivistas y proyectos campesinos de sostenibilidad, y que cualquier política de ordenamiento rural rigurosa debe partir del reconocimiento de la vocación ecológica del suelo, la autonomía comunitaria y la necesidad de restaurar la relación entre producción, conservación y vida campesina.

En el cuarto capítulo, titulado Transformaciones agrarias y desafíos territoriales en el norte del Tolima: acumulación de tierras, avalúos catastrales y resistencia campesina, se analizan críticamente las transformaciones agrarias del norte del Tolima a partir de la expansión de la frontera agrícola, la fragmentación predial, los avalúos catastrales y la concentración de la tierra, y se muestra cómo estos procesos operan como mecanismos de acumulación por desposesión y presión estructural sobre el campesinado. Desde un enfoque cualitativo-crítico de orientación socioecológica, apoyado en triangulación de bases oficiales, análisis geoespacial y revisión de instrumentos de política agraria y planificación rural, se demuestra que la revalorización catastral y la mercantilización del suelo no son fenómenos neutros, sino dispositivos que favorecen la especulación, incrementan la presión fiscal sobre el minifundio y profundizan la subordinación territorial de los pequeños productores. Entre los principales aportes del capítulo se destacan la articulación entre estructura agraria, mercado de tierras y resistencia campesina, así como la lectura de las ZRC y los TECAM como estrategias de reterritorialización, soberanía material y alternativa frente al avance agroindustrial. Su potencialidad radica en vincular de manera sólida cartografía, datos prediales y economía política del territorio, aunque por momentos el enfoque argumentativo y programático supera la profundización de algunos desarrollos empíricos específicos. Se concluye que la disputa por la tierra en el norte del Tolima expresa una contradicción estructural entre valorización capitalista y reproducción de la vida campesina, y que cualquier salida territorialmente justa exige fortalecer la agroecología, la autonomía comunitaria y formas de ordenamiento rural que frenen la concentración y restituyan la capacidad de decisión a las comunidades.

En el quinto capítulo, titulado De la trampa de la deuda a la soberanía material: los TECAM como horizonte político y praxis de resistencia en el norte del Tolima, se ofrece el cierre empírico de la obra mediante el estudio de caso de la vereda El Convenio, en

el norte del Tolima, y se muestra de manera concreta cómo las microfinanzas inciden en la vida rural más allá de su aparente función de apoyo productivo. A partir de un análisis situado, se pone en evidencia que el microcrédito ha profundizado dinámicas de endeudamiento, dependencia y erosión de la autosuficiencia campesina, lo que ha afectado no solo la economía familiar, sino también las relaciones con la tierra, la organización comunitaria y las expectativas de futuro. El principal aporte del capítulo consiste en traducir al plano territorial y cotidiano las tesis desarrolladas en los capítulos anteriores sobre financiarización, despojo y subordinación, demostrando que la deuda opera como un dispositivo material y subjetivo de control. Al mismo tiempo, se destaca que las comunidades no permanecen inmóviles frente a este proceso, sino que activan formas de organización solidaria, prácticas agroecológicas y horizontes de soberanía territorial que convierten la resistencia en una alternativa real de reconfiguración rural. Su potencialidad radica en articular la escala micro del caso con la interpretación estructural del libro, aunque reconoce también tensiones y límites en la consolidación de estas respuestas comunitarias. Se concluye que la salida al sobreendeudamiento rural no depende de una simple corrección financiera, sino del fortalecimiento de formas colectivas de autonomía productiva, justicia territorial y soberanía campesina capaces de disputar el sentido mismo del desarrollo rural.

Finalmente, el libro sintetiza las ideas presentadas en los capítulos previos, subrayando que la resistencia campesina no solo es una reacción ante el despojo material, sino una lucha integral que involucra dimensiones epistemológicas, territoriales y económicas. Las comunidades campesinas continúan defendiendo su derecho a la tierra y a formas de vida basadas en la agroecología y la soberanía alimentaria, desafiando las lógicas capitalistas que buscan mercantilizar sus territorios y conocimientos. De manera que el futuro del campesinado depende de su capacidad para construir y fortalecer redes de solidaridad y resistencia que trasciendan las fronteras geográficas y políticas.



Capítulo 1.

Territorio, subjetividad y justicia epistémica: hacia una resistencia ontológica campesina en América Latina

El territorio ha sido históricamente un espacio de disputa en América Latina, donde las tensiones entre las fuerzas del capital global y las comunidades campesinas se manifiestan no solo en la lucha por la tierra, sino también en las subjetividades y formas de vida que surgen de este conflicto¹. En este contexto, el territorio no debe ser reducido a una delimitación geográfica o física; por el contrario, se entiende como una construcción socioecológica donde confluyen dimensiones económicas, culturales, políticas y ontológicas. Las luchas por el territorio implican un enfrentamiento entre los modelos de desarrollo capitalista, basados en la extracción y el control, y las formas de vida campesinas, que se enfocan en la autonomía, la sustentabilidad y la soberanía alimentaria.

En este capítulo se explora cómo las comunidades campesinas han resistido las embestidas del capital global y sus proyectos de desarrollo. Estas resistencias se articulan no solo a nivel material, en la defensa de la tierra y los recursos, sino también a nivel epistemológico y ontológico, en la protección de modos de vida que son profundamente incompatibles con las lógicas de explotación impuestas por el capitalismo². La construcción de territorialidades campesinas y la reterritorialización son procesos clave para entender cómo los campesinos resisten y crean alternativas de desarrollo basadas en la reciprocidad, la agroecología y la gestión colectiva del territorio.

Además, se analiza la multiterritorialidad campesina como una herramienta conceptual que permite comprender cómo los campesinos habitan múltiples espacios de resistencia, más allá de las fronteras físicas impuestas por el Estado o el capital. Asimismo, se examina cómo las subjetividades campesinas se configuran en resistencia a los modelos hegemónicos de desarrollo, proponiendo alternativas que desafían las lógicas coloniales y extractivistas del poder.

Enfoque metodológico y delimitación analítica

Para garantizar la transparencia y la replicabilidad de los argumentos que se desarrollan en este capítulo, se adopta un enfoque metodológico cualitativo de corte crítico-hermenéutico, sustentado en la revisión documental, el análisis dialéctico de categorías teóricas y la lectura territorial de dinámicas socioecológicas. El tipo de investigación es teórico-conceptual con proyección analítica, diseñada para articular marcos epistemi-

¹ La idea de territorio como espacio de disputa tiene una larga tradición en el pensamiento crítico latinoamericano. Autores como Santos (2000, 2002) señalan que el territorio no es únicamente un lugar físico, sino una construcción socioespacial que incorpora dimensiones políticas, culturales y económicas en constante conflicto.

² Boaventura de Sousa Santos (2009) desarrolla el concepto de epistemologías del Sur para explicar cómo las luchas territoriales están ligadas a la reivindicación de saberes locales frente a las epistemologías hegemónicas del norte global.

cos (ecología política, geografía crítica, marxismo ecológico y epistemologías del Sur) con la realidad territorial andina colombiana. Los procedimientos analíticos integran la triangulación teórica —cruce de categorías de Harvey (1975, 2004), Escobar (2014, 2025), Santos (2000), Quijano (2000) y Lefebvre (1991)—, la interpretación crítico-dialéctica de las transformaciones territoriales y la proyección de patrones espaciales hacia la formulación de recomendaciones institucionales. Esta delimitación metodológica permite sostener la coherencia epistemológica del libro y garantizar que las categorías teóricas se anclen en procedimientos verificables y replicables.

Territorio y subjetividades campesinas: disputa, desarrollo y resistencia ontológica

El territorio como espacio de disputa

El territorio no es simplemente un espacio físico delimitado. Como plantea Haesbaert (2004, 2020, 2022), el territorio es una construcción simbólica y material que está profundamente imbricada en las relaciones de poder. Las comunidades campesinas que han habitado sus territorios durante generaciones se enfrentan a una lógica de desterritorialización impulsada por el avance del capital y los proyectos extractivistas. Según Vergara-Camus (2014), el control territorial es una manifestación directa de la expansión capitalista en América Latina, donde las tierras que históricamente han sido gestionadas colectivamente son transformadas en mercancía mediante la privatización y la expansión de los monocultivos.

La noción de territorialidad campesina es crucial para entender estas disputas³. Para los campesinos, el territorio no es solo un recurso económico, sino un espacio de vida y de reproducción social, donde se construyen identidades colectivas y se tejen redes de solidaridad. Esta disputa por el territorio implica tanto la defensa de los recursos naturales como la protección de los modos de vida campesinos, en contraposición a las formas hegemónicas de desarrollo impuestas por el capital global.

Colonialidad del poder y control territorial

La colonialidad del poder, como señala Aníbal Quijano (2000), sigue siendo una estructura de dominación vigente en el siglo XXI. Las formas contemporáneas de control

³ La territorialidad campesina no solo define la relación física con el territorio, sino que también construye un marco simbólico y cultural que desafía las lógicas extractivistas. Según Leff (2019), el territorio campesino es una entidad ecosocial en la que los principios de reciprocidad y autogestión se oponen radicalmente al enfoque capitalista de mercantilización de la naturaleza.

territorial en América Latina reproducen lógicas coloniales de explotación, en las que las tierras de las comunidades campesinas son despojadas para dar paso a proyectos de monocultivos o minería, beneficiando a élites transnacionales. Esta colonialidad se materializa en políticas de desarrollo que subordinan a las comunidades rurales a las lógicas extractivistas, profundizando las desigualdades y perpetuando la dependencia del mercado global (Harvey, 2014).

En Colombia, los megaproyectos extractivos han sido ampliamente documentados como formas contemporáneas de despojo territorial, en las que convergen intereses económicos, transformaciones institucionales y disputas por el control del territorio (Cely Muñoz, 2018; Grajales, 2017; Velásquez, 2021). Distintos informes han señalado que estas dinámicas no solo afectan la posesión de la tierra, sino que reconfiguran las relaciones de poder y limitan la capacidad de las comunidades para gestionar sus territorios de manera autónoma (Cáceres Gaitán et al., 2023; Oidhaco, 2013). En este contexto, el extractivismo se articula con procesos históricos de despojo y violencia, lo que genera profundas rupturas en las formas de vida campesina (Comisión de la Verdad, 2022). La imposición de estos modelos de desarrollo produce rupturas ontológicas, destruyendo los lazos tradicionales que los campesinos tienen con sus territorios⁴.

Como señala Leff (2019), la defensa de los territorios campesinos implica una lucha por el reconocimiento de modos de vida alternativos, basados en el cuidado y la reciprocidad con la naturaleza. En este sentido, las comunidades campesinas no solo enfrentan procesos de despojo material, sino también dinámicas de subordinación epistemológica y ontológica propias de la expansión del capitalismo global.

Multiterritorialidad y redes de resistencia

El concepto de multiterritorialidad es central para entender cómo las comunidades campesinas construyen formas de resistencia que trascienden las fronteras impuestas por el Estado y el capital⁵. Haesbaert (2004, 2022) plantea que la multiterritorialidad refleja la capacidad de las comunidades para habitar y resistir en múltiples espacios, utilizando redes de solidaridad y cooperación que atraviesan límites geográficos y políticos⁶. Esta perspectiva dialoga con enfoques que conciben el territorio como

⁴ Este concepto de *rupturas ontológicas* puede vincularse con la noción de desterritorialización ontológica introducida por Escobar (2014), quien argumenta que las políticas extractivistas no solo desplazan físicamente a los campesinos, sino que también fracturan su relación espiritual, cultural y ecológica con el territorio, desarraigando prácticas ancestrales y saberes colectivos.

⁵ Haesbaert (2004) introduce la multiterritorialidad como un concepto que desafía la noción tradicional de territorio, señalando cómo los actores campesinos se organizan en múltiples espacios, incluso transnacionales, para resistir las imposiciones del capital global.

⁶ Haesbaert (2004) sostiene que la multiterritorialidad permite a las comunidades campesinas no solo resistir el desplazamiento, sino también generar nuevas territorialidades que integran redes de solidaridad local y transnacional. Este enfoque multidimensional del territorio redefine el espacio como un campo de resistencia que se extiende más allá de las fronteras físicas impuestas por el Estado o el capital.

una construcción relacional y en disputa (Lefebvre, 1991; Massey, 2005), así como con lecturas latinoamericanas que destacan el papel de las redes comunitarias y los movimientos sociales en la producción de territorialidades alternativas (Escobar, 2018; Porto-Gonçalves, 2001; Zibechi, 2008).

Las redes de resistencia campesina se articulan no solo en torno a la defensa de la tierra, sino también en torno a la protección de sus modos de vida, conocimientos y subjetividades⁷. Como señala De la Cadena (2020), estas redes permiten a las comunidades campesinas mantener su arraigo territorial, incluso cuando enfrentan procesos de desplazamiento forzado o fragmentación territorial. En este sentido, la multiterritorialidad no solo es una respuesta a la violencia del despojo, sino también una estrategia para fortalecer la soberanía alimentaria y la gestión colectiva del territorio.

Redes de solidaridad y cooperación

Las redes de solidaridad son un mecanismo fundamental de resistencia ante el despojo territorial⁸. Estas redes, formadas tanto por actores locales como por organizaciones transnacionales, han sido documentadas en estudios recientes como los de Martínez-Torres y Rosset (2010), quienes analizan el papel de los movimientos campesinos en la defensa de la tierra frente al avance de los monocultivos y el extractivismo. En Colombia, el movimiento campesino se ha articulado en torno a la defensa de la soberanía alimentaria y la territorialidad campesina como un medio para contrarrestar las políticas neoliberales que favorecen a las empresas transnacionales.

Estas redes no solo facilitan la resistencia, sino que también promueven la construcción de alternativas de desarrollo basadas en la agroecología y la producción colectiva. Según un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (Food and Agriculture Organization of the United Nations [FAO], 2022), las redes campesinas que promueven la soberanía alimentaria y la agroecología han demostrado ser más resilientes frente a las crisis económicas y ambientales, y representan una respuesta efectiva a la precarización de los territorios rurales.

La configuración espacial de estas redes no es aleatoria, sino que responde directamente a la fragmentación territorial generada por la intensificación agroindustrial y la financiarización del suelo. Los patrones espaciales de parcelación, aislamiento productivo y concentración catastral evidencian cómo el capital financiero reconfigura el mapa

⁷ Según Altieri y Toledo (2011), las redes de resistencia campesina basadas en la agroecología representan una forma de lucha contra los modelos de producción capitalistas que amenazan la sostenibilidad y la soberanía alimentaria.

⁸ Las redes de solidaridad campesina no solo operan como mecanismos de resistencia al extractivismo, sino que también funcionan como espacios de construcción de alternativas epistémicas. De Sousa Santos (2018) introduce el concepto de *epistemologías del Sur* para describir cómo estas redes rescaten saberes locales y construyen un conocimiento alternativo que desafía las jerarquías del saber impuestas por el capitalismo.

rural, aislando a los pequeños productores y debilitando la contigüidad ecológica. Esta fragmentación espacial no es un subproducto técnico, sino colorario, un dispositivo deliberado de despojo que facilita la captación de plusvalía territorial y la subordinación de las economías locales a los flujos de crédito globalizados. Por tanto, la resistencia multiterritorial opera como una reconfiguración espacial contrahegemónica que restaura la continuidad socioecológica del campesinado.

Modelos de desarrollo y territorialidad campesina

Los modelos de desarrollo rural basados en el extractivismo y la agroindustria han intentado transformar las subjetividades campesinas para alinearlas con las necesidades del capital global. Sin embargo, las comunidades rurales han resistido estos intentos de homogenización, proponiendo modelos alternativos de desarrollo que reivindican la territorialidad campesina como un espacio de autonomía y soberanía.

La agroecología, como modelo de desarrollo alternativo, ha ganado relevancia en los últimos años. Altieri y Toledo (2011) proponen la agroecología como una respuesta integral a las crisis que enfrenta el campo latinoamericano, ya que promueve la sustentabilidad ecológica y el respeto por los conocimientos tradicionales. Este enfoque no solo rechaza la lógica extractivista, sino que también propone una reconfiguración de la relación entre el ser humano y la naturaleza, fundamentada en principios de reciprocidad y equilibrio.

Subjetividades en resistencia

La resistencia campesina, como señalan Escobar (2014, 2025) y Leff (2019), trasciende la defensa material de la tierra. Las comunidades rurales también resisten en el plano ontológico, defendiendo formas de vida y subjetividades que son incompatibles con las lógicas del desarrollo capitalista. Estas resistencias ontológicas rechazan la colonización del ser, promoviendo nuevas formas de relación con la naturaleza, basadas en la regeneración y el cuidado.

La resistencia ontológica implica la creación de nuevas subjetividades que desafían las narrativas hegemónicas de progreso⁹. Como señala Santos (2000), las luchas por el

⁹ La resistencia ontológica, como describe Escobar (2014, 2025), no se limita a una oposición a las formas materiales de despojo, sino que implica una reconfiguración profunda de la relación entre los seres humanos y la naturaleza. Esta resistencia no solo cuestiona el progreso capitalista, sino que también promueve formas de vida que buscan la regeneración ecológica y la justicia social como principios fundamentales de coexistencia.

territorio están profundamente conectadas con las luchas por la epistemología del Sur, en la que los conocimientos campesinos y las prácticas agroecológicas son valorados como formas legítimas de producción y resistencia.

En este sentido, el territorio y las subjetividades campesinas en América Latina están en el centro de una lucha constante contra las fuerzas del capital global. Por medio de la multiterritorialidad y las redes de resistencia, las comunidades campesinas han desarrollado estrategias que no solo defienden la tierra, sino que también promueven modelos alternativos de desarrollo, basados en la soberanía alimentaria, la agroecología y la gestión colectiva del territorio. La disputa por el territorio es, en última instancia, una disputa ontológica, en la que las comunidades campesinas se enfrentan a la imposición de formas de vida ajenas, mientras promueven nuevas subjetividades y territorialidades que desafían las lógicas del capital.

Aproximaciones conceptuales a las diferentes perspectivas del territorio

El territorio, en su definición más amplia, ha sido abordado desde múltiples perspectivas teóricas, cada una de las cuales refleja la complejidad intrínseca de este concepto. En la actualidad, el territorio no puede ser concebido solo como una delimitación geográfica, sino como una construcción socioespacial que incluye dimensiones políticas, económicas y culturales. Esta visión multidimensional del territorio ha sido fundamental para entender las disputas contemporáneas sobre la tierra y los recursos naturales, especialmente en regiones como América Latina, donde las comunidades rurales y campesinas continúan enfrentando los efectos de las políticas extractivistas y capitalistas.

Dimensiones del territorio desde la geografía crítica

La geografía crítica, representada por autores como David Harvey (2014) y Henri Lefebvre (1991), ha sido clave para la comprensión del territorio como un espacio socialmente construido. Lefebvre (1991) sugiere que el espacio no es un contenedor neutro, sino un producto de las relaciones sociales que lo atraviesan. En América Latina, este enfoque ha sido crucial para analizar cómo las políticas neoliberales y los megaproyectos extractivistas impactan los territorios rurales y las subjetividades campesinas (Harvey, 2014, 2026).

Desde esta perspectiva, el territorio es también un espacio de resistencia. Las comunidades campesinas, al ser despojadas de sus tierras, reconfiguran sus territorialidades mediante redes de solidaridad y resistencia, creando lo que algunos autores han denominado multiterritorialidad (Haesbaert, 2004). Este concepto es central para entender

cómo estas comunidades, aunque desplazadas físicamente, mantienen una conexión simbólica y cultural con sus tierras. La resistencia campesina no solo se manifiesta en el plano material, sino también en el epistemológico y ontológico, defendiendo formas de vida incompatibles con las lógicas del desarrollo capitalista (Escobar, 2014).

Territorialidad y poder

Un enfoque clave para comprender el territorio es la relación entre territorialidad y poder. Aníbal Quijano (2000) introduce el concepto de *colonialidad del poder* para describir cómo las estructuras coloniales continúan moldeando las relaciones de poder en América Latina. En el contexto de la gestión territorial, esto se traduce en la imposición de modelos de desarrollo que subordinan a las comunidades rurales y campesinas a las necesidades del capital global. Proyectos extractivos como la minería y los monocultivos, que son presentados como motores de desarrollo, se implementan sin tener en cuenta las necesidades ni los derechos de las comunidades locales, exacerbando las desigualdades y despojando a los campesinos de sus tierras (Leff, 2019).

En contraposición, la territorialidad campesina se basa en una relación de reciprocidad con la tierra y los recursos naturales. Esta visión del territorio como un espacio de vida, y no solo como un recurso económico, desafía las lógicas capitalistas que buscan mercantilizar la naturaleza. El control territorial, en este contexto, se convierte en un acto de resistencia frente a la desterritorialización impuesta por el capital.

La multiterritorialidad como estrategia de resistencia

El concepto de *multiterritorialidad*, desarrollado por Haesbaert (2004), es esencial para entender cómo las comunidades campesinas construyen formas de resistencia que trascienden las fronteras impuestas por el Estado y el capital. Estas formas de resistencia no solo se manifiestan en la defensa de la tierra, sino también en la creación de redes de solidaridad que conectan a las comunidades rurales con actores nacionales e internacionales comprometidos con la defensa de los derechos territoriales. Estas redes permiten a las comunidades resistir el despojo territorial incluso cuando son desplazadas físicamente, manteniendo vivas sus prácticas culturales y económicas.

La subjetividad campesina y la multiterritorialidad

La subjetividad campesina, entendida como el conjunto de valores, creencias y prácticas que configuran la identidad de las comunidades rurales, es otro elemento crucial en el análisis del territorio. Según Quintero Castaño y Garcés Pulido (2023), la subjetividad campesina se encuentra en constante disputa debido a las presiones del mercado

global y las políticas de desarrollo neoliberales¹⁰. Estos autores analizan cómo las comunidades rurales, como consecuencia de la acumulación por desposesión, han sido progresivamente marginadas de los procesos de desarrollo económico, lo que ha generado nuevas formas de subalternidad y resistencia.

Al resistir las imposiciones del capital, las comunidades campesinas no solo defienden sus tierras, sino también sus formas de vida, que están profundamente arraigadas en relaciones de reciprocidad con la naturaleza. Esta resistencia ontológica, como la define Escobar (2014), es fundamental para entender la lucha por el territorio en América Latina.

La colonialidad del poder en la gestión territorial

La colonialidad del poder sigue siendo una estructura dominante en la forma en que se gestionan los territorios rurales en América Latina. Proyectos como las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) en Colombia han sido creados como mecanismos de resistencia frente a los proyectos extractivistas y agroindustriales que continúan subordinando a las comunidades rurales a las lógicas del mercado global (Barreto García, 2023).

La implementación de modelos alternativos de desarrollo, como la agroecología, ha sido una respuesta a esta colonialidad del poder. Según Altieri y Toledo (2011), la agroecología no solo ofrece un modelo de producción más sostenible, sino que también refuerza las identidades campesinas y su conexión con el territorio. Este enfoque propone una reconfiguración de las relaciones entre las comunidades rurales y la naturaleza, basada en principios de reciprocidad y sostenibilidad.

El territorio como entidad decolonial y su relación con los modelos de desarrollo rural

El territorio en América Latina no puede entenderse sin abordar su relación con los modelos de desarrollo que han sido impuestos desde la época colonial. La colonialidad del poder sigue presente en las formas contemporáneas de gestión territorial, en las que los proyectos de desarrollo rural buscan subordinar a las comunidades campesinas a las lógicas del mercado global (Barreto García, 2023). Sin embargo, estas comunidades

¹⁰ Quintero Castaño y Garcés Pulido (2023) argumentan que la subjetividad campesina, en el contexto de la financiarización, no solo es afectada por el despojo territorial, sino también por el crédito como un mecanismo de control y subordinación. En este marco, el crédito refuerza una nueva subalternidad campesina, en la que el campesinado es subordinado por medio de deudas que perpetúan su dependencia del capital global.

han desarrollado formas de resistencia que no solo desafían los modelos extractivistas, sino que también proponen alternativas basadas en la sostenibilidad y la justicia social (Composto y Navarro, 2014).

Duarte y Castaño (2020) analizan cómo los derechos de propiedad colectivos pueden ser un medio para proteger los territorios campesinos frente al avance del capital. En Colombia, la implementación de estos derechos ha permitido a las comunidades rurales gestionar sus tierras de manera autónoma, resistiendo las presiones del mercado y los proyectos extractivistas. En este sentido, la propiedad colectiva no solo es un mecanismo jurídico, sino también una herramienta de resistencia territorial que refuerza las subjetividades campesinas y su conexión con la tierra.

El modelo agroecológico propuesto por Altieri y Toledo (2011) se presenta como una alternativa viable al modelo hegemónico de desarrollo rural. Este enfoque pone en el centro la relación sostenible entre el campesinado y la tierra, promoviendo prácticas agrícolas que respetan los ciclos naturales y permiten a las comunidades campesinas mantener su autonomía territorial. Toledo (2013) profundiza en esta idea con su teoría del metabolismo social, que propone una nueva forma de entender las relaciones entre las comunidades humanas y la naturaleza, basada en la reciprocidad y la interdependencia.

Subjetividades campesinas ante los modelos de desarrollo rural

El desarrollo rural capitalista ha intentado transformar las subjetividades campesinas, imponiendo nuevas formas de trabajo y producción que están alineadas con las lógicas del mercado global. No obstante, las subjetividades campesinas no son solo productos de estas imposiciones, sino que también son espacios de resistencia, en los que las comunidades reconfiguran sus relaciones con el territorio y el trabajo agrícola (Escobar, 2014).

Composto y Navarro (2014) advierten que el campesinado ha sido históricamente marginado en los discursos de desarrollo; sin embargo, las nuevas estrategias de comercialización y producción agroecológica están demostrando que las comunidades rurales pueden ser actores clave en la creación de modelos de desarrollo alternativos. Estas subjetividades resistentes están vinculadas a la defensa del territorio y la soberanía alimentaria, que son fundamentales para la reconfiguración de la territorialidad campesina (Rodríguez Pinzón y Aranda Camacho, 2024).

La obra de Gramsci (1971) ofrece una clave para entender cómo las subjetividades campesinas se configuran en el marco de la hegemonía capitalista. El campesinado, lejos de ser un actor pasivo, es capaz de desarrollar formas de resistencia que desafían

las estructuras de poder existentes. En América Latina, estas formas de resistencia se materializan en la construcción de territorios autónomos, donde las comunidades campesinas gestionan sus recursos de manera colectiva y sostenible (Gliessman, 2014).

Alternativas de desarrollo rural y su nueva configuración con la territorialidad

Las alternativas de desarrollo rural en América Latina están estrechamente vinculadas a la reconfiguración de la territorialidad campesina. La agroecología, como argumentan Altieri y Toledo (2011), es una de las principales alternativas al modelo agroindustrial, ya que promueve una gestión sostenible del territorio, basada en los conocimientos tradicionales y locales. Estas alternativas no solo desafían el modelo extractivista, sino que también proponen una nueva forma de entender la relación entre el campesinado y la tierra.

Territorios Campesinos Agroalimentarios

Los Territorios Campesinos Agroalimentarios (TECAM) son un ejemplo de cómo las comunidades rurales están construyendo modelos de producción alternativos que desafían las lógicas del mercado global. Cely Muñoz (2018) destaca el caso del territorio campesino agroalimentario en el norte de Nariño y el sur del Cauca, donde los campesinos han implementado prácticas agroecológicas para garantizar su soberanía alimentaria y proteger su territorio.

Zonas de Reserva Campesina

Las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) en Colombia representan una estrategia de resistencia territorial frente a los proyectos extractivistas y agroindustriales¹¹. Barreto García (2023) señala que estas zonas permiten a las comunidades campesinas gestionar sus territorios de manera autónoma, implementando modelos de desarrollo rural que priorizan la sostenibilidad y la justicia social.

Territorios entrevereda

El concepto de *territorios entrevereda* hace referencia a la articulación relacional entre distintas formas de organización territorial en espacios rurales, configuradas a partir

¹¹ Las ZRC han sido vistas como un mecanismo de protección de los derechos territoriales campesinos frente al avance del capital global. Barreto García (2023) argumenta que estas zonas no solo buscan garantizar la tenencia de la tierra, sino también la supervivencia de modos de vida campesinos que promueven la agroecología y la gestión colectiva del territorio, en contraste con las formas de desarrollo neoliberales.

de redes de cooperación, intercambio y disputa que trascienden las delimitaciones administrativas. En este sentido, el territorio no se presenta como una unidad homogénea, sino como una construcción dinámica y multiescalar, atravesada por relaciones sociales, económicas y políticas (Haesbaert, 2004; Massey, 2005). Estas configuraciones territoriales se sostienen en prácticas colectivas y formas de organización que permiten a las comunidades campesinas articular estrategias de resistencia y reproducción social, tanto a nivel local como en redes más amplias (Escobar, 2018; Mançano Fernandes, 2023; Martínez-Torres y Rosset, 2010).

Nueva ontología de la resistencia desde el sujeto campesino

La resistencia campesina no se limita a la defensa del territorio físico, sino que también implica una resistencia ontológica, en la que las comunidades campesinas rechazan las lógicas capitalistas que buscan transformar sus formas de vida. Como sugiere Escobar (2025), estas resistencias están creando nuevas ontologías que desafían las narrativas hegemónicas de progreso y desarrollo.

En este sentido, el campesinado no solo lucha por la tierra, sino también por la preservación de sus formas de vida y sus relaciones con el territorio. Leys y Raftopoulos (2025) señalan que estas luchas territoriales están profundamente enraizadas en la construcción de subjetividades resistentes, que no solo se oponen al despojo, sino que también proponen nuevas formas de habitar el mundo.

Por consiguiente, la comprensión de la resistencia ontológica y la multiterritorialidad debe traducirse en instrumentos concretos de planificación rural y ordenamiento territorial. Las ZRC y los TECAM no pueden operar como figuras aisladas de la gestión institucional; requieren marcos normativos que integren la gestión del riesgo climático, la protección de corredores bioculturales y la asignación prioritaria de presupuesto para la transición agroecológica. Las instituciones públicas deben adoptar modelos de gobernanza territorial participativa que reconozcan la agencia campesina como sujeto planificador, superando la lógica asistencialista y fortaleciendo mecanismos de cogestión del riesgo, ordenamiento productivo y financiamiento no extractivo. Solo así la planificación rural dejará de ser un instrumento de racionalización capitalista para convertirse en una herramienta de emancipación territorial.



Territorio, subjetividad y justicia epistémica

La disputa por el territorio en América Latina ha sido tradicionalmente conceptualizada como una lucha por la tierra y los recursos naturales. Sin embargo, en las últimas décadas, ha surgido una comprensión más amplia que resalta la dimensión epistémica de estas luchas. Las comunidades campesinas no solo resisten al despojo territorial y a los modelos hegemónicos de desarrollo, sino que también buscan reivindicar y defender sus saberes y formas de vida, que han sido sistemáticamente marginados por las epistemologías dominantes. Esta dimensión del conflicto puede ser entendida desde el marco de la justicia epistémica, un concepto clave que expone la relación entre la legitimación de los saberes y las dinámicas de poder.

Justicia epistémica y las luchas por el territorio

El concepto de *justicia epistémica*, desarrollado por Fricker (2007), permite comprender las desigualdades en el poder de legitimar qué saberes son reconocidos como válidos. La autora distingue entre la injusticia testimonial, que devalúa la credibilidad de ciertos sujetos en función de prejuicios estructurales, y la injusticia hermenéutica, que limita la capacidad de ciertos grupos para interpretar y comunicar sus experiencias dentro del espacio público. En contextos rurales, estas formas de injusticia se entrelazan con procesos históricos de subordinación del conocimiento campesino, en los que saberes locales son sistemáticamente invisibilizados o deslegitimados frente a marcos técnicos e institucionales dominantes.

En el contexto de las luchas por el territorio, las comunidades campesinas han sido históricamente víctimas de estas formas de injusticia. Sus saberes sobre la gestión de la tierra, los recursos naturales y la agricultura sostenible han sido devaluados frente a los conocimientos científicos y técnicos promovidos por el desarrollo capitalista. Los proyectos extractivistas y agroindustriales, basados en epistemologías tecnocráticas y neoliberales, niegan la validez de los saberes locales, lo que constituye una forma de colonialidad del saber y del poder (Quijano, 2000; Rawicz Morales, 2025). Esta marginalización epistémica contribuye no solo a la explotación económica, sino también a la alienación ontológica de los campesinos.

Autores como Boaventura de Sousa Santos (2021) han argumentado que las luchas territoriales en América Latina no pueden desvincularse de las luchas por la justicia epistémica. De Sousa Santos introduce el concepto de *epistemologías del Sur*, que busca rescatar y validar los saberes de aquellos grupos históricamente excluidos por la modernidad occidental. Desde esta perspectiva, las luchas campesinas no solo son luchas por la tierra, sino también luchas por el reconocimiento y la validación de saberes alternativos que se resisten a ser subsumidos bajo las epistemologías hegemónicas del norte global.

La colonialidad del saber y la epistemología del Sur

La colonialidad del saber, un concepto central en el pensamiento decolonial, describe cómo el sistema moderno/colonial no solo se ha impuesto a partir de la explotación económica y política, sino también mediante la imposición de una jerarquía de saberes. Walter Mignolo (2020) y otros teóricos de la colonialidad han señalado que el conocimiento eurocéntrico ha sido presentado como universal, mientras que los saberes indígenas y campesinos han sido relegados al ámbito de lo local y lo particular.

La epistemología del Sur, tal como la define De Sousa Santos (2014), es una respuesta a esta jerarquía. De Sousa Santos argumenta que las epistemologías del norte han silenciado y deslegitimado los saberes de las comunidades rurales, afrodescendientes e indígenas en América Latina, impidiendo la pluralidad de saberes y perpetuando la colonialidad del poder. En este sentido, la defensa del territorio campesino también implica la defensa de los saberes agroecológicos, las prácticas de gestión comunitaria del territorio y las cosmovisiones que sostienen una relación no extractivista con la naturaleza.

El trabajo de Marisol de la Cadena (2020) es clave para entender cómo las epistemologías indígenas y campesinas se posicionan como alternativas a las epistemologías hegemónicas. De la Cadena explora cómo las luchas por el territorio en los Andes no solo son luchas por los recursos, sino también luchas por la existencia misma de mundos ontológicamente distintos, que incluyen a las montañas, los ríos y los bosques como seres vivos con agencia propia. Esta visión contrasta con la concepción moderna del territorio como un recurso explotable y resalta la importancia de la pluralidad ontológica en la disputa territorial.

Subjetividad campesina y justicia cognitiva

La subjetividad campesina se configura en resistencia a las epistemologías hegemónicas que intentan homogeneizar sus modos de vida y sus conocimientos. Arturo Escobar (2014) ha argumentado que la subjetividad campesina no es simplemente el resultado de una resistencia pasiva, sino una resistencia ontológica activa, en la que los campesinos defienden no solo sus tierras, sino también sus formas de vida, basadas en la reciprocidad, la agroecología y la interdependencia con la naturaleza.

Este proceso de resistencia ontológica está íntimamente ligado a lo que Boaventura de Sousa Santos (2009, 2021) denomina justicia cognitiva: el reconocimiento de la diversidad de saberes y formas de vida como elementos esenciales para la construcción de un mundo más equitativo y sostenible. La justicia cognitiva implica no solo el reconocimiento formal de los saberes campesinos, sino también su incorporación en la toma de decisiones políticas y en la creación de políticas públicas que respeten las lógicas agroecológicas y territoriales de las comunidades rurales.

La agroecología, como práctica y epistemología, ofrece un espacio para la reivindicación de la justicia cognitiva. Altieri y Toledo (2011) han señalado que la agroecología se basa en los saberes locales y en la gestión comunitaria del territorio, proponiendo una alternativa tanto al modelo extractivista como a la epistemología tecnocrática del desarrollo. En este sentido, la agroecología no solo es una respuesta económica a la crisis rural, sino también un espacio de resistencia epistemológica que reivindica los saberes campesinos como conocimientos legítimos y necesarios para la sostenibilidad del planeta.

Reconocimiento de los saberes campesinos en la agroecología

En América Latina, la agroecología no puede entenderse únicamente como un conjunto de técnicas productivas alternativas. Esta constituye, más bien, un campo de disputa política y epistémica en el que los saberes campesinos ocupan un lugar central. Estudios recientes sobre procesos de transición agroecológica en la región muestran que estos no descansan solo en innovaciones técnicas, sino también en pedagogías decoloniales, aprendizajes colectivos y formas de producción de conocimiento arraigadas en el territorio (Bonatti et al., 2025). Desde esta perspectiva, el saber campesino no es un complemento secundario del conocimiento experto, sino una base fundamental para reorganizar la producción, defender la vida rural y reconfigurar la relación sociedad-naturaleza.

En esa misma línea, Toledo y Argueta (2024) muestran que la trayectoria de la agroecología en México solo puede comprenderse si se asume simultáneamente como campo de conocimiento, práctica productiva y movimiento social. Esta lectura permite afirmar que las prácticas agroecológicas no pueden separarse de las epistemologías que las sostienen, pues su potencia no radica únicamente en su eficiencia técnica, sino también en su capacidad para producir autonomía, memoria histórica y organización colectiva frente al orden agroindustrial dominante.

Por tanto, el reconocimiento de los saberes campesinos no debería reducirse a una inclusión meramente formal dentro de políticas o programas diseñados desde arriba. Lo que está en disputa es, en un nivel más profundo, quién produce conocimiento legítimo, desde qué lugar social y al servicio de qué proyecto histórico. En este punto, Adriaenssens et al. (2025) advierten que la agroecología sigue siendo un territorio en disputa, atravesado por relaciones de poder que subordinan o absorben de manera desigual las epistemologías no occidentales. En consecuencia, la justicia epistémica no consiste solo en reconocer discursivamente los saberes campesinos, sino en crear condiciones concretas para que estos orienten la formación, la gestión territorial y la construcción de alternativas al régimen agroalimentario hegemónico.

De manera que la agroecología no es simplemente un modelo alternativo de producción, sino una apuesta de transformación social que cuestiona la jerarquía colonial del saber y la subordinación capitalista de la naturaleza. La articulación entre justicia epistémica, multiterritorialidad y resistencia ontológica permite leer la lucha campesina no como un residuo del pasado, sino como la afirmación de un horizonte civilizatorio alternativo.

Este capítulo demuestra que la financiarización y el despojo territorial operan simultáneamente como mecanismos de extracción material y de colonización subjetiva. Frente a ello, la resistencia campesina surge como una praxis desalienante que recompone la relación dialéctica entre sujeto, trabajo y naturaleza. Desde esta base teórica se abordarán, en los capítulos siguientes, los conflictos por el uso del suelo, la dinámica de los avalúos catastrales y la trampa de la deuda en el norte del Tolima. En este sentido, sin justicia cognitiva ni reconocimiento ontológico, toda política rural corre el riesgo de reproducir, bajo nuevos lenguajes, las mismas lógicas de despojo que pretende superar (Adriaenssens et al., 2025; Bonatti et al., 2025; Toledo y Argueta, 2024).

Conclusiones

El análisis desarrollado en este capítulo permite afirmar que la disputa por el territorio en América Latina, y de manera particular en la región andina, no puede ser comprendida exclusivamente como un conflicto por el acceso a la tierra o el control de los recursos naturales. Se trata, en un sentido más profundo, de una confrontación estructural entre racionalidades civilizatorias en tensión: por un lado, la lógica del capital global, que reduce el territorio a un espacio de valorización y extracción, y, por otro, las territorialidades campesinas, que lo constituyen como espacio de vida, reproducción social y sentido ontológico. Esta distinción no es meramente conceptual, sino que define el carácter del conflicto contemporáneo y las posibilidades mismas de la transformación rural.

En este marco, el territorio surge como una construcción socioecológica compleja, atravesada por relaciones de poder, procesos históricos de despojo y disputas epistémicas que exceden la dimensión material. La expansión del capital, particularmente bajo formas contemporáneas como la financiarización del suelo y la intensificación agroindustrial, no solo reorganiza el espacio rural, sino que produce una reconfiguración profunda de las relaciones sociales, debilitando las tramas comunitarias y fragmentando la continuidad ecológica. Este proceso, lejos de ser neutral o técnico, constituye un dispositivo activo de acumulación por desposesión que reproduce la colonialidad del poder en nuevas escalas y modalidades.

Sin embargo, el capítulo demuestra que las comunidades campesinas no se limitan a una posición pasiva frente a estas dinámicas. Por el contrario, despliegan formas complejas de resistencia que operan simultáneamente en los planos material, epistemológico y ontológico. La noción de multiterritorialidad resulta clave en este sentido,

ya que permite comprender cómo los campesinos no solo defienden territorios físicos, sino que articulan redes de resistencia que trascienden escalas locales, configurando espacios relacionales donde se sostienen prácticas productivas, saberes y formas de organización alternativas. Estas redes no solo contrarrestan la fragmentación territorial impuesta por el capital, sino que reconstituyen continuidades socioecológicas desde una lógica contrahegemónica.

De manera complementaria, el capítulo evidencia que la resistencia campesina no puede reducirse a la defensa de la tierra en términos económicos o jurídicos. Existe una dimensión ontológica de la resistencia que se expresa en la defensa de modos de vida, cosmovisiones y relaciones con la naturaleza que son incompatibles con la racionalidad instrumental del desarrollo capitalista. Esta resistencia ontológica implica una disputa por el sentido mismo del habitar, en la que el territorio deja de ser concebido como un recurso para ser afirmado como un espacio de interdependencia entre seres humanos y naturaleza. En este punto, la contribución del enfoque decolonial y de las epistemologías del Sur resulta fundamental para comprender que lo que está en juego no es únicamente la distribución de la tierra, sino la legitimidad de formas diversas de conocimiento y existencia.

La incorporación del concepto de justicia epistémica permite profundizar esta lectura al mostrar que la marginalización de los saberes campesinos no es un fenómeno secundario, sino un componente estructural del modelo de desarrollo dominante. La desvalorización sistemática de los conocimientos locales, frente a epistemologías tecnocráticas y eurocéntricas, constituye una forma de violencia cognitiva que acompaña y legitima el despojo material. En consecuencia, la lucha por el territorio es inseparable de la lucha por el reconocimiento de estos saberes como fundamentos válidos para la organización de la vida social y productiva. En este contexto, la agroecología aparece no solo como una alternativa técnica, sino como un campo de disputa epistémica en el que se articulan prácticas, conocimientos y proyectos políticos orientados a la autonomía territorial.

Asimismo, el capítulo pone en evidencia que las alternativas de desarrollo rural no pueden ser concebidas como simples ajustes dentro del paradigma dominante. Experiencias como las Zonas de Reserva Campesina, los Territorios Campesinos Agroalimentarios y las formas de propiedad colectiva muestran que es posible construir modelos territoriales basados en la gestión comunitaria, la sostenibilidad ecológica y la soberanía alimentaria. No obstante, estas experiencias enfrentan límites estructurales cuando no se articulan con transformaciones institucionales más amplias que reconozcan al campesinado como sujeto político y epistémico. De lo contrario, corren el riesgo de ser cooptadas o subordinadas a las mismas lógicas que buscan transformar.

En este sentido, uno de los aportes centrales del capítulo radica en señalar que la planificación rural y el ordenamiento territorial deben ser repensados desde una perspectiva que supere la racionalidad instrumental del desarrollo. La incorporación de

enfoques participativos, la integración de la gestión del riesgo climático, la protección de corredores bioculturales y el fortalecimiento de esquemas de financiamiento no extractivo son condiciones necesarias para avanzar hacia una gobernanza territorial que no reproduzca la subordinación del campo a los intereses del capital. La agencia campesina debe ser reconocida no como objeto de política pública, sino como sujeto activo en la definición de los horizontes de desarrollo.

Este capítulo establece una base teórica sólida para comprender los procesos que serán abordados en los capítulos siguientes del libro. Al hacer evidente que la financiarización y el despojo territorial operan de manera simultánea como mecanismos de extracción material y de colonización subjetiva, se abre un campo analítico que permite examinar fenómenos concretos como los conflictos por el uso del suelo, la dinámica catastral y la trampa de la deuda rural. En este marco, la resistencia campesina no aparece como un residuo del pasado, sino como una práctica contemporánea que contiene en sí misma la posibilidad de imaginar y construir alternativas civilizatorias.

En tal sentido, la lucha por la tierra en la región andina expresa una disputa profunda entre formas divergentes de concebir y habitar el territorio. Más que un conflicto sectorial, se trata de una confrontación entre proyectos históricos que definen qué tipo de mundo rural es posible. De ahí que cualquier intervención sobre estos espacios deba partir del reconocimiento efectivo de las territorialidades y los saberes campesinos, si no quiere reproducir, bajo nuevas formas, las lógicas de dominación que han configurado el campo latinoamericano.



Capítulo 2.

Economías rurales y la trampa de la deuda: financiarización y despojo del campesinado

La transformación de las dinámicas rurales bajo el modelo neoliberal ha intensificado los procesos de despojo, consolidando nuevas formas de dominación basadas en la financiarización. Este capítulo profundiza en el impacto del crédito y la microfinanciación en la subjetividad campesina, considerando cómo estas herramientas se configuran como dispositivos de control y subordinación económica y social. Desde una perspectiva crítica, el análisis parte de la financiarización como un mecanismo de acumulación por desposesión, extendiendo los conceptos desarrollados en el capítulo anterior sobre las dinámicas territoriales y la resistencia comunitaria. El crédito y la deuda no solo actúan como factores económicos, sino que transforman profundamente la subjetividad de los actores rurales, alineándolos con la lógica del capital financiero.

Delimitación metodológica y procedimientos analíticos

Para garantizar la transparencia epistemológica y la replicabilidad analítica, este capítulo se sustenta en un diseño cualitativo-crítico de orientación histórico-estructural, enmarcado en la economía política agraria y la sociología de la deuda rural (Lazzarato, 2013; Quintero Castaño y Garcés Pulido, 2023). La investigación adopta un enfoque comparativo instrumental con proyección analítica, concebido para articular categorías teóricas (acumulación por desposesión, control biopolítico y subjetividad endeudada) con evidencia empírica documentada en la literatura especializada.

Las técnicas de recolección comprenden: (a) sistematización crítica y triangulación cruzada de informes de organismos internacionales (el Banco Mundial, el FMI y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL]) y estudios de caso rurales validados académicamente; (b) reconstrucción analítica de trayectorias de endeudamiento campesino mediante fuentes secundarias indexadas, y (c) análisis crítico del discurso sobre la inclusión financiera y las políticas de microcrédito en contextos de pequeña agricultura (Flick, 2018; Stake, 2008). El criterio de selección de los casos analizados obedece a tres variables validadas en la literatura agraria comparada: (a) representatividad de la penetración del microcrédito en economías campesinas de subsistencia; (b) documentación empírica de crisis de sobreendeudamiento y transformación subjetiva, y (c) evidencia de reconfiguración territorial y productiva vinculada a lógicas crediticias (Borras y Franco, 2012; Kay, 1989).

Los procedimientos analíticos siguen una ruta dialéctica de tres fases: en la primera fase, se deconstruye el discurso hegemónico de la inclusión financiera como mecanismo de desarrollo; en la segunda fase, se cartografía la articulación entre deuda, fragmentación de la unidad productiva y subordinación a cadenas globales, y, en la tercera fase, se interpretan los patrones de disciplinamiento financiero como dispositivos de extracción de plusvalía y erosión de la autonomía campesina. Esta delimitación asegura que

los hallazgos trasciendan la descripción fenomenológica y se anclen en un proceso verificable de interpretación crítico-estructural (Lazzarato, 2013; Soederberg, 2014).

La subjetividad campesina en el contexto de la financiarización: un análisis crítico ampliado

La subjetividad campesina en el contexto de la financiarización se ha convertido en un eje central en los estudios críticos sobre el capitalismo contemporáneo. Este enfoque examina cómo el capital no solo se reproduce mediante la explotación directa del trabajo, sino también mediante mecanismos más sutiles como el crédito y el endeudamiento. La financiarización no debe entenderse simplemente como una expansión del capital hacia las economías rurales, sino como un proceso que transforma profundamente las subjetividades campesinas, moldeando la percepción de los individuos respecto a su relación con la tierra, el trabajo y el futuro.

Desde una perspectiva crítica, la financiarización en economías rurales como la de Colombia actúa como un mecanismo de despojo que subordina a los campesinos a una lógica de deuda estructural. Este fenómeno no solo transforma sus prácticas productivas, sino que también afecta su identidad, ya que los campesinos se ven atrapados en ciclos de endeudamiento que moldean su percepción de éxito y fracaso.

El campesinado y la lógica de la deuda

La expansión del crédito rural y el microcrédito ha sido presentada como una solución a la pobreza rural. Instituciones financieras como el Banco Mundial y el FMI han promovido estos mecanismos con la promesa de impulsar el desarrollo rural. Sin embargo, Harvey (2004)¹² argumenta que estos procesos se enmarcan en la acumulación por desposesión, en la que los campesinos, al no poder pagar sus deudas, se ven despojados de sus tierras y recursos. Esta lógica no solo tiene consecuencias materiales, sino también subjetivas, ya que el campesino se convierte en un sujeto subordinado a las lógicas del capital financiero global.

¹² Según Harvey (2004), la acumulación por desposesión es un proceso continuo en el capitalismo contemporáneo, en el que el capital se expande mediante la expropiación de tierras y recursos, transformando profundamente las economías rurales. Este concepto permite entender cómo la financiarización opera como una forma de despojo que no solo afecta los bienes materiales, sino también las relaciones de poder que configuran el territorio. La crítica de Harvey se puede complementar con la de Arrighi (1994), quien analiza cómo el capital financiero ha dominado las fases tardías del capitalismo, concentrando riqueza mediante la especulación, a expensas de las economías productivas rurales.

Lazzarato (2013) desarrolla la noción de la *economía de la deuda*, en la que los individuos endeudados no solo están atrapados en una relación económica, sino que también deben cumplir con las expectativas morales impuestas por el capital. En el caso de las economías rurales, esto se traduce en una imposición de nuevas formas de control que transforman a los campesinos en agentes subordinados. De modo que deben ajustar sus prácticas productivas para satisfacer las demandas del mercado global, en lugar de enfocarse en la autosuficiencia o la sostenibilidad.

En India, por ejemplo, el fenómeno del endeudamiento masivo ha generado una crisis rural sin precedentes. Según Kumar y Prasanna (2025)¹³, muchos pequeños agricultores han sido empujados al suicidio debido a la imposibilidad de escapar de los ciclos de deuda impagable. Estos suicidios, documentados ampliamente por la literatura crítica, reflejan cómo la lógica del microcrédito ha subordinado a los campesinos a una dependencia estructural de las instituciones financieras.

En Colombia, el caso de Sonsón (Antioquia), documentado por Morales Zapata (2021)¹⁴, muestra cómo los campesinos, atraídos por los créditos como herramientas de desarrollo, han terminado profundamente endeudados, por lo que se han visto obligados a reorganizar su producción para cumplir con las exigencias del mercado global. Este endeudamiento no solo transforma la economía local, sino también la subjetividad de los campesinos, que ahora se definen en función de su capacidad para cumplir con sus compromisos financieros.

La subjetividad impuesta y el homo endeudado

El concepto de *homo endeudado*, desarrollado por Lazzarato (2013)¹⁵, es clave para comprender cómo la financiarización moldea la subjetividad de los campesinos. Los

¹³ En el caso de India, Kumar y Prasanna (2025) documentan cómo la expansión del microcrédito, promovida como una solución para la pobreza rural, ha llevado a una crisis de suicidios entre pequeños agricultores. Este fenómeno revela la fragilidad de los mecanismos financieros en contextos rurales, donde la imposibilidad de escapar del ciclo de deuda ha generado una forma extrema de resistencia: el suicidio. Breman (2016) sugiere que esta crisis debe analizarse en el contexto más amplio de la precarización del trabajo rural y la subordinación de los campesinos a las demandas del capital global.

¹⁴ En el contexto colombiano, Morales Zapata (2021) muestra cómo la financiarización ha transformado las prácticas productivas en Sonsón (Antioquia), donde los campesinos dependen cada vez más del crédito para mantener sus actividades. Esta dependencia no solo afecta su economía, sino que reconfigura su identidad como sujetos subordinados al mercado global. Este análisis puede enriquecerse con el trabajo de Gudynas (2011, 2012) sobre el extractivismo, que demuestra cómo la financiarización es parte de una estrategia más amplia de despojo y explotación de los recursos naturales, facilitada por las políticas neoliberales que promueven el acceso al crédito como un mecanismo de desarrollo.

¹⁵ Lazzarato (2013) desarrolla el concepto de *homo endeudado* para analizar cómo la deuda se convierte en una herramienta de control que trasciende lo económico para imponerse en la subjetividad. Los campesinos endeudados no solo están subordinados al capital financiero, sino que internalizan una ética de la deuda que los convierte en responsables de su situación. Este concepto resuena con el análisis de Foucault (2007) sobre la gubernamentalidad, en la que el poder opera mediante mecanismos de subjetivación que disciplinan a los individuos desde su interior, condicionando sus comportamientos y decisiones en función de los intereses del capital.

sujetos endeudados no son solo agentes productivos, sino individuos cuyo comportamiento, decisiones y modos de vida están completamente condicionados por el capital financiero. Este concepto se puede aplicar en las zonas rurales, donde la dependencia del crédito no solo es una cuestión económica, sino también ética y moral. Los campesinos endeudados no solo deben rendir cuentas a los bancos, sino también asumir la responsabilidad de su situación, internalizando la culpa por su precariedad.

Esta “subjetividad endeudada” ha sido analizada desde una perspectiva crítica por Gramsci (1971), quien advierte cómo el capital ejerce su hegemonía mediante la creación de consensos que legitiman la explotación. En este contexto, el crédito y la deuda se presentan como herramientas de inclusión financiera, cuando en realidad refuerzan la subordinación de los campesinos a las lógicas del mercado. Los campesinos no solo se ven atrapados en relaciones de explotación, sino que también se ven obligados a aceptar estas relaciones como naturales y legítimas.

Shakir y Tus-Saifiyah (2022) documentan casos en el África subsahariana donde los programas de microcrédito han aumentado la precariedad de las comunidades rurales en lugar de empoderarlas. En países como Kenia y Uganda, el microcrédito ha sido presentado como una herramienta para mejorar la productividad agrícola, pero ha generado una dependencia estructural del capital extranjero, creando una nueva clase de campesinos endeudados.

Financiarización y la transformación de las relaciones territoriales

En América Latina, la financiarización rural no se expresa únicamente en la expansión del crédito, sino en la creciente articulación entre deuda, valorización de la tierra e inversión orientada por lógicas financieras. Green (2022) señala que el crédito y la deuda agraria no operan de manera aislada, sino que se insertan en tramas de reproducción rural cada vez más condicionadas por escalas múltiples del capital financiero. En esa dirección, Hershaw y Sauer (2023) muestran que, en la frontera agrícola del Matopiba brasileño, la entrada de capital extranjero y transnacional ha profundizado la financiarización de la tierra, favoreciendo el acaparamiento, la expansión agroindustrial y la intensificación de los conflictos territoriales. Desde esta perspectiva, la financiarización del campo no solo implica el despojo material de los campesinos, sino también una reconfiguración territorial que subordina las formas comunitarias de relación con la tierra a la lógica de valorización del capital (Chayanov, 1974).

Subjetividad campesina y resistencia en la era de la financiarización

A pesar de los efectos devastadores de la financiarización, los campesinos no han sido sujetos pasivos frente a este proceso. En muchas regiones, las comunidades rurales han desarrollado estrategias de resistencia frente al endeudamiento y la subordinación al capital financiero. Estas resistencias se manifiestan no solo en el ámbito económico, sino también en la forma en que los campesinos reconfiguran sus relaciones con el territorio y sus identidades.

La reterritorialización, como se ha discutido previamente, es clave en estas resistencias. Los campesinos buscan recuperar sus vínculos con la tierra por medio de prácticas agroecológicas y cooperativas solidarias, que desafían las lógicas del mercado global. Estos movimientos no solo promueven una producción agrícola sostenible, sino que también representan una reapropiación del territorio y la identidad campesina (Haesbaert, 2011).

Un ejemplo emblemático de resistencia es el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) en Brasil, que ha utilizado la agroecología como una herramienta para resistir la financiarización y la expansión del agronegocio. Según Altieri y Nicholls (2017)¹⁶, la agroecología ha permitido a los campesinos brasileños reconstruir sus relaciones con la tierra y resistir las presiones del capital financiero. Estos movimientos agroecológicos no solo promueven una producción más sostenible, sino que también desafían la lógica extractivista y ofrecen una alternativa viable al modelo de desarrollo basado en el endeudamiento y la explotación.

La financiarización de las economías rurales ha generado profundas transformaciones no solo en las estructuras productivas, sino también en la subjetividad campesina. Este proceso, que se presenta como una solución para el desarrollo, ha subordinado a los campesinos a las lógicas del capital financiero global, atrapándolos en ciclos de deuda que redefinen su identidad y su relación con la tierra. La lógica del *homo* endeudado, tal como lo expone Lazzarato (2013), impone una ética de responsabilidad individual que invisibiliza las estructuras de explotación que perpetúan esta subordinación. Sin embargo, los campesinos no han sido sujetos pasivos frente a este fenómeno. Las prácticas de reterritorialización y agroecología, como las implementadas por movimientos como el MST en Brasil, muestran que existen alternativas viables a la financiarización que buscan reconstruir las relaciones entre las comunidades rurales y su territorio.

¹⁶ Altieri y Nicholls (2017) argumentan que la agroecología no solo es una respuesta técnica a la crisis ambiental, sino también una estrategia política para resistir las lógicas del capital financiero. Los movimientos agroecológicos, como los observados en Brasil y otros países de América Latina, buscan recuperar la soberanía sobre la tierra y redefinir las relaciones sociales en función de la sostenibilidad y la justicia social. Esta resistencia también puede entenderse por medio del concepto de *contrapoder*, desarrollado por Holloway (2005), que sostiene que los movimientos sociales pueden crear nuevas formas de poder desde abajo, desafiando las estructuras hegemónicas del capital.

Este análisis subraya que cualquier propuesta de desarrollo rural debe cuestionar críticamente los efectos de la financiarización y priorizar modelos de producción que promuevan la autonomía campesina y la sostenibilidad territorial.

Despojo y microfinanciarización en las economías rurales: expansión crítica

El microcrédito ha sido celebrado como una herramienta revolucionaria para combatir la pobreza en las áreas rurales. Sin embargo, la evidencia empírica sugiere que su impacto ha sido más matizado y, en muchos casos, problemático. Desde una perspectiva crítica, la microfinanciarización no solo genera un despojo económico, sino también un despojo simbólico y ecológico, desarticulando las relaciones tradicionales entre los campesinos y la tierra, mientras subordina a estos actores rurales a las lógicas de acumulación capitalista.

En esta sección, se profundiza en las dimensiones multifacéticas del despojo causado por el microcrédito, enfatizando cómo este proceso afecta las estructuras sociales, la sostenibilidad ambiental y la subjetividad campesina. Se incorporan estudios de casos internacionales recientes para ofrecer una visión comparativa y demostrar cómo el microcrédito, lejos de ser una herramienta de inclusión, a menudo ha intensificado las dinámicas de exclusión y precariedad.

Microfinanciarización y la expropiación de la autonomía productiva

La relación acreedor-deudor es uno de los ejes centrales en los que se sustenta la microfinanciarización. Si bien el acceso al crédito puede ser visto como un instrumento de autonomía económica, estudios recientes sugieren lo contrario. Dupas y Robinson (2013) demuestran cómo la dependencia de los campesinos del crédito a menudo los empuja a adoptar decisiones productivas orientadas al mercado global, abandonando las prácticas tradicionales de subsistencia. Este proceso genera lo que Demirgüç-Kunt et al. (2020) denominan “dependencia crediticia crónica”, en la cual los campesinos ya no tienen la libertad de decidir sobre sus cultivos o métodos agrícolas, sino que están sujetos a las demandas del capital financiero.

Esta dependencia genera un tipo de despojo simbólico, en el que la identidad productiva del campesino se redefine de acuerdo con las necesidades del mercado global. La relación con la tierra y los recursos naturales se transforma, ya que el campesino ahora se ve obligado a maximizar la eficiencia y rentabilidad de su producción, en lugar de priorizar la sostenibilidad a largo plazo. Esto genera tensiones entre las economías locales y las lógicas extractivistas globales, exacerbando las desigualdades rurales.

Lo anterior se puede constatar en India, donde el impacto del microcrédito en las comunidades rurales ha sido devastador. El estudio de Garikipati et al. (2017)¹⁷ muestra que, en muchas regiones agrícolas, los pequeños agricultores se han visto atrapados en ciclos de endeudamiento, lo que ha conducido a una crisis de suicidios entre los agricultores. Este fenómeno está directamente relacionado con las presiones ejercidas por las instituciones microfinancieras para que los campesinos adopten cultivos comerciales que les permitan pagar sus deudas, a expensas de los cultivos alimentarios tradicionales. La pérdida de tierras y la fragmentación de las comunidades rurales han sido algunos de los efectos más visibles de este proceso.

El despojo de la sostenibilidad ecológica

Un aspecto clave del despojo relacionado con la microfinanciarización es el impacto sobre los ecosistemas rurales. Estudios han demostrado que el acceso al crédito rural a menudo incentiva prácticas agrícolas intensivas que erosionan los suelos y agotan los recursos hídricos. Según Dupas y Robinson (2013)¹⁸, estas prácticas son necesarias para que los campesinos cumplan con los pagos de sus deudas, lo que genera una espiral de insostenibilidad. La adopción de monocultivos y la dependencia de agroquímicos no solo empobrecen la biodiversidad local, sino que también aumentan la vulnerabilidad de los campesinos frente al cambio climático y las fluctuaciones del mercado global.

En Brasil, el microcrédito ha facilitado la expansión de la agroindustria, especialmente en la Amazonía (Kröger, 2025; Hershaw y Sauer, 2023; Moreira-Dantas et al., 2023). Moreira-Dantas et al. (2023) y Kröger (2025)¹⁹ documentaron cómo las instituciones microfinancieras han desempeñado un papel central en el despojo de tierras a comunidades campesinas e indígenas, a medida que los pequeños agricultores se ven forzados a vender sus tierras para pagar deudas impagables. La expansión del monocultivo de

¹⁷ Este estudio aborda el impacto del microcrédito desde una perspectiva de género, mostrando cómo las mujeres campesinas son desproporcionadamente afectadas por los ciclos de endeudamiento. A menudo vistas como clientes “ideales” para las microfinancieras, también son las más vulnerables a los impactos negativos del microcrédito debido a su limitada autonomía económica y social. La discusión sobre género en el contexto del microcrédito es esencial para comprender las dinámicas de despojo que afectan a las poblaciones más vulnerables.

¹⁸ Este experimento de campo en Kenia es fundamental para entender las limitaciones del microcrédito en contextos rurales. Dupas y Robinson encuentran que muchos campesinos, a pesar de tener acceso al crédito, no pueden desarrollar sus microempresas debido a restricciones estructurales más profundas, como la falta de acceso a mercados o la volatilidad de los precios agrícolas. Este estudio refuerza el argumento de que el crédito por sí solo no es suficiente para generar cambios significativos en las economías rurales y, en cambio, puede reforzar las desigualdades existentes.

¹⁹ Este estudio es crucial para entender el papel del microcrédito en la expansión de la agroindustria en la Amazonía brasileña. Moreira-Dantas et al. (2023) documentan cómo el acceso al crédito ha facilitado el despojo de tierras y la destrucción de los modos de vida tradicionales. Este caso es un ejemplo claro de cómo la microfinanciarización puede estar directamente vinculada a procesos de acaparamiento de tierras, reforzando el control del capital sobre los recursos rurales. Por tanto, la Amazonía debe concebirse como un microcosmos de los efectos destructivos del capital financiero global sobre los ecosistemas rurales.

soya, financiada por microcréditos, ha resultado en la deforestación masiva y en la destrucción de los modos de vida tradicionales.

Subjetividad y control biopolítico en la era de la microfinanciarización

Además del despojo económico y ecológico, la microfinanciarización opera como una tecnología de gobierno sobre la vida campesina. Como señala Foucault (2007)²⁰, el poder no actúa únicamente por medio de la coerción directa, sino por medio de dispositivos que orientan conductas, administran riesgos y producen sujetos funcionales a un determinado orden. En este marco, el microcrédito no debe entenderse solo como un instrumento financiero, sino como un mecanismo que penetra en las decisiones cotidianas de los hogares rurales, reorganiza sus prioridades productivas y moldea sus horizontes de acción.

Esta dimensión resulta aún más clara a la luz del concepto de *homo endeudado* desarrollado por Lazzarato (2013). La deuda no constituye únicamente una obligación económica, sino que también es una relación moral y política que redefine la subjetividad del deudor. Bajo esta lógica, el campesino endeudado ya no orienta su trabajo primordialmente a la reproducción de la vida familiar y comunitaria, sino al cumplimiento de cronogramas de pago, métricas de responsabilidad y exigencias de rendimiento impuestas desde afuera. De este modo, la deuda no solo transforma la relación con la tierra, sino también la relación del sujeto consigo mismo, al reconfigurar su identidad en función de la obligación, la disciplina y la culpabilidad.

La experiencia reciente de la microfinanza rural muestra con claridad esta mutación. En Camboya, Green (2024) sostiene que la expansión de la inversión de impacto y del crédito rural ha funcionado como una forma de antipolítica del desarrollo, en la medida en que amplía el acceso al endeudamiento mientras despolitiza las condiciones estructurales que producen vulnerabilidad y sobreendeudamiento. En lugar de resolver la precariedad rural, el crédito desplaza la carga de la supervivencia hacia los propios hogares, que deben autorregularse permanentemente para responder a las exigencias del mercado financiero. En esa misma línea, Green et al. (2023) muestran que los indicadores de desempeño del sector microfinanciero invisibilizan las estrategias mediante las cuales los prestatarios recurren a deudas informales para sostener los pagos, lo que profundiza los circuitos de subordinación que exceden el préstamo inicial.

²⁰ Foucault introduce la idea del biopoder, que se aplica aquí para entender cómo las microfinancieras no solo controlan los recursos económicos de los campesinos, sino también su vida cotidiana y sus decisiones productivas. El concepto de *biopolítica* es esencial para comprender cómo las instituciones financieras utilizan el crédito para disciplinar las prácticas y subjetividades campesinas, convirtiendo la deuda en una herramienta de control social. Los lectores deben reflexionar sobre cómo este control se manifiesta en la presión constante sobre los campesinos para maximizar la rentabilidad, aún a costa de la sostenibilidad ecológica y social.

Desde esta perspectiva, la microfinanciarización no disciplina únicamente la economía campesina, sino también el tiempo, las expectativas, los consumos y las formas legítimas de proyectar la vida. Su eficacia biopolítica radica precisamente en que convierte la auto-sujeción en condición de acceso al crédito y presenta la obediencia financiera como signo de responsabilidad individual. Así, el endeudamiento opera como una forma de control social que debilita la capacidad de autoorganización y de resistencia, al subordinar la reproducción social campesina a los imperativos de pago, rendimiento y competitividad. Lejos de ser una herramienta neutral de inclusión, el microcrédito aparece entonces como un dispositivo de subjetivación que integra a los campesinos a las lógicas del capital financiero al mismo tiempo que erosiona sus condiciones de autonomía.

La crisis del microcrédito y sus impactos a largo plazo

La expansión global del microcrédito ha generado lo que Demirgüç-Kunt et al. (2020)²¹ denominan una “crisis estructural de endeudamiento”, que ha afectado tanto a las comunidades rurales como a los ecosistemas de los que dependen. Esta crisis no solo amenaza la sostenibilidad económica de los campesinos, sino también la seguridad alimentaria global, ya que la dependencia del crédito rural ha llevado a la sustitución de cultivos alimentarios por cultivos comerciales, lo que ha exacerbado la vulnerabilidad frente a las fluctuaciones del mercado internacional.

El impacto a largo plazo de esta crisis es profundo. De acuerdo con Dupas y Robinson (2013), la deuda rural, lejos de disminuir, ha aumentado en muchas partes del mundo, lo que ha generado una dependencia estructural de los campesinos respecto a las instituciones financieras. Esta situación no solo perpetúa las desigualdades rurales, sino que también pone en peligro la capacidad de las economías rurales para sostenerse en el futuro.

Impactos de la microfinanciarización en la fragmentación social

Una de las consecuencias más profundas de la microfinanciarización es su impacto en la fragmentación social de las comunidades rurales. El acceso al crédito genera una diferenciación entre aquellos campesinos que pueden cumplir con sus obligaciones financieras y aquellos que se ven atrapados en ciclos de deuda crónica. Según Dupas y Robinson (2013), esta diferenciación ha exacerbado las desigualdades preexistentes

²¹ La base de datos Global Findex es una de las fuentes más importantes para medir la inclusión financiera en el mundo. Este artículo utiliza datos globales para mostrar el estado actual del acceso al crédito en áreas rurales, subrayando las dificultades que enfrentan los campesinos para acceder a servicios financieros en condiciones justas. Para el lector, este estudio proporciona un contexto esencial sobre cómo las políticas de inclusión financiera, cuando se implementan sin una regulación adecuada, pueden llevar a situaciones de sobreendeudamiento.

en muchas comunidades rurales, dividiendo a los agricultores entre quienes tienen acceso a recursos y aquellos que, al no poder pagar sus deudas, pierden sus tierras y caen en la pobreza extrema.

Esta fragmentación tiene implicaciones no solo económicas, sino también sociales y culturales. En muchos casos, las instituciones microfinancieras han debilitado las redes de solidaridad que tradicionalmente sostenían a las comunidades campesinas, imponiendo una lógica individualista en la que cada agricultor debe competir para sobrevivir en el mercado. Esto ha desintegrado los lazos comunitarios y ha debilitado la capacidad de las comunidades rurales para resistir colectivamente frente a los procesos de despojo.

Un estudio de campo en Kenia realizado por Dupas y Robinson (2013) revela cómo el microcrédito ha exacerbado las divisiones dentro de las comunidades agrícolas. Los agricultores que no pueden cumplir con los pagos de sus préstamos se ven marginados y estigmatizados, mientras que aquellos que logran mantenerse al día con sus deudas son percibidos como “exitosos” bajo las normas impuestas por el mercado. Esto ha debilitado las estructuras de cooperación comunitaria y ha aumentado la competencia entre los agricultores, lo que a su vez ha reforzado la desigualdad y la exclusión.

Microfinanzas y el surgimiento de nuevas formas de dependencia

Si bien el microcrédito se presenta como una herramienta de independencia económica, estudios recientes sugieren que en realidad ha creado nuevas formas de dependencia. Según Demirgüç-Kunt et al. (2020), los campesinos que dependen del crédito para financiar sus actividades productivas se encuentran en una posición de vulnerabilidad estructural, ya que cualquier fluctuación en los precios de los productos agrícolas o en las condiciones del mercado global puede poner en peligro su capacidad para pagar sus deudas.

Esta dependencia estructural se agrava por el hecho de que muchas instituciones microfinancieras operan con altas tasas de interés, lo que hace que los préstamos sean cada vez más difíciles de pagar. Como resultado, muchos campesinos se ven obligados a recurrir a nuevos préstamos para pagar los anteriores, lo cual configura una trampa de sobreendeudamiento en la que la promesa de inclusión financiera termina reforzando la vulnerabilidad económica y social de las comunidades rurales (Banerjee y Jackson, 2017; Guérin et al., 2013). Este ciclo de endeudamiento crónico no solo despoja a los campesinos de sus recursos materiales, sino que también les impide planificar a largo plazo, atrapándolos en una lógica de supervivencia económica.

En Bangladesh, un análisis del impacto del microcrédito revela que muchos campesinos han caído en ciclos de endeudamiento perpetuo debido a las altas tasas de interés impuestas por las microfinancieras. Según un estudio de Karim (2011)²², los agricultores que no pueden pagar sus préstamos a tiempo se ven obligados a recurrir a nuevos créditos, lo que agrava aún más su situación financiera. Este ciclo de deuda perpetua ha despojado a muchos campesinos de sus tierras y ha llevado a un aumento de la pobreza en las áreas rurales.

A nivel nacional, Morales Zapata (2021) documenta cómo en Sonsón (Antioquia) el acceso a microcréditos ha facilitado la concentración de tierras por parte de grandes agroindustrias, desplazando a los pequeños agricultores. Este proceso de microfinanciarización ha resultado en la pérdida de autonomía y el despojo de tierras, ya que los campesinos endeudados se ven incapaces de competir con los actores corporativos. En lugar de empoderar a los agricultores, el microcrédito ha exacerbado las desigualdades en acceso a la tierra, promoviendo un modelo extractivo que beneficia a las grandes empresas.

En este sentido, el microcrédito, promovido inicialmente como una solución para el subdesarrollo rural, ha demostrado tener consecuencias mucho más complejas y problemáticas. La microfinanciarización ha facilitado procesos de despojo económico, social y ecológico en las áreas rurales, exacerbando las desigualdades y creando nuevas formas de dependencia estructural. A medida que los campesinos se ven atrapados en ciclos de deuda, sus posibilidades de resistir colectivamente frente al capital financiero global se ven cada vez más limitadas.

Para abordar esta crisis, es crucial reconsiderar el papel del crédito en las economías rurales y buscar alternativas que promuevan la sostenibilidad y la equidad a largo plazo. Los modelos de desarrollo deben centrarse en fortalecer las economías locales y en reconstruir las redes de solidaridad comunitaria, en lugar de imponer soluciones basadas en el endeudamiento individual.

En lugar de empoderar a los agricultores, el microcrédito ha exacerbado las desigualdades en el acceso a la tierra, promoviendo un modelo extractivo que beneficia a las grandes empresas.

²² La obra de Karim ofrece una crítica contundente al modelo de microfinanzas, con un enfoque en Bangladesh, uno de los países más asociados con el éxito del microcrédito. Karim argumenta que el modelo de microfinanzas no solo perpetúa la pobreza, sino que también refuerza las dinámicas patriarcales y de opresión social. Es fundamental para el lector observar cómo las microfinancieras, en muchos casos, actúan como agentes de control social, limitando la capacidad de las mujeres campesinas para mejorar sus condiciones de vida a largo plazo.

Subjetividad, control y resistencia: el campesino endeudado

El fenómeno del endeudamiento campesino ha sido abordado desde múltiples perspectivas dentro del análisis crítico del capitalismo global. La financiarización del sector rural, en particular mediante el microcrédito, ha transformado profundamente no solo las dinámicas económicas en las áreas rurales, sino también las subjetividades campesinas. El campesino endeudado no es solo un agente económico atrapado en una trampa de deuda, sino un sujeto transformado por la deuda misma, que moldea su forma de pensar, de actuar y de relacionarse con su entorno. Además de profundizar en cómo la deuda actúa como un dispositivo de control y subordinación, este apartado explora las formas de resistencia que han surgido como respuesta a estos mecanismos.

Subjetividad y control mediante la deuda

Desde la perspectiva crítica, la deuda no es solo un contrato económico, sino un dispositivo que controla y disciplina. Al introducir el concepto de *homo endeudado*, Maurizio Lazzarato (2013)²³ advierte que el individuo endeudado vive bajo una continua presión de responsabilidad financiera, lo que genera una transformación en su subjetividad. Para el campesino, la deuda no solo determina su capacidad de producción, sino también sus expectativas de vida, su relación con la tierra y su sentido de futuro. Esta transformación subjetiva es central para entender cómo el control financiero sobre el campesino se convierte en una forma de dominación integral.

Control biopolítico y el deudor campesino

En el marco de la teoría foucaultiana del biopoder, la deuda se convierte en una herramienta de control sobre la vida misma. Como apunta Foucault (2007)²⁴, el poder biopolítico no se ejerce solo mediante la coerción física, sino por medio de la gestión de las poblaciones. En el caso de los campesinos endeudados, las instituciones financieras actúan como agentes de biopoder, determinando no solo los términos del contrato

²³ Lazzarato introduce el concepto de *homo endeudado*, argumentando que la deuda no solo genera obligaciones económicas, sino que también produce sujetos que son controlados por la lógica de la deuda. Este concepto es clave para comprender cómo los campesinos endeudados internalizan la presión de la deuda, ajustando sus vidas y decisiones productivas para cumplir con las exigencias del crédito. De modo que la deuda se convierte en una forma de disciplinamiento social y subjetivo.

²⁴ Foucault introduce el concepto de biopoder, que es clave para entender cómo las instituciones financieras ejercen control sobre las vidas de los campesinos, no solo sobre sus prácticas económicas. Este control biopolítico va más allá de lo material, afectando las decisiones cotidianas de los campesinos endeudados. Es importante destacar la relación entre el poder y la deuda como mecanismo de gestión de la vida rural en su totalidad.

económico, sino también las condiciones de vida de los deudores. Los campesinos se ven obligados a ajustar sus prácticas agrícolas y sus modos de vida a las demandas del crédito, lo que genera una subordinación no solo económica, sino también social y cultural.

Un estudio crítico de Banerjee y Jackson (2017) muestra cómo los programas de microfinanzas en comunidades rurales de Bangladesh, inicialmente promovidos como una solución para la pobreza estructural y el empoderamiento económico, han producido efectos profundamente contradictorios. Esto ha provocado que la microfinanciación erosione el capital social comunitario, lo que evidencia una lógica individualista de la deuda que fragmenta las redes de solidaridad tradicionales al transformar las dinámicas de reciprocidad campesina en un estado de competencia financiera. Los autores ponen en evidencia que el acceso al crédito no siempre amplía la autonomía de los hogares rurales, pues en muchos casos incrementa el endeudamiento, intensifica la vulnerabilidad económica y debilita las condiciones sociales y ambientales de reproducción comunitaria. En este contexto, los hogares endeudados quedan sometidos a una presión constante por cumplir con sus obligaciones financieras, lo que los lleva a priorizar decisiones productivas orientadas a la generación inmediata de ingresos, aun cuando estas puedan comprometer la sostenibilidad a largo plazo y sus proyectos de vida comunitaria. Esta dinámica refuerza la idea de que la deuda, si bien representa un dispositivo financiero, se convierte al mismo tiempo en una forma de disciplinamiento subjetivo y control biopolítico sobre la vida rural (Banerjee y Jackson, 2017; Lazzarato, 2013).

Estos impactos también se hacen evidentes en el caso estudiado por Morales Zapata (2021), quien analiza cómo el campesinado en Sonsón ha sido objeto de desposesión mediante la acumulación por desposesión, teorizada por David Harvey. Este concepto se ve reflejado en la agroindustria del aguacate, en la que el campesinado ha sido despojado de su autonomía productiva y subordinado a una lógica de mercado global. El proceso de endeudamiento, que es parte de esta inserción en el mercado, ha creado una subjetividad subalterna, en la que los campesinos se ven forzados a convertirse en asalariados o emprendedores dentro de un sistema que les impone la lógica capitalista.

Deuda y la erosión de la autonomía campesina

La financiarización del campo ha debilitado la autonomía de los campesinos. Como explican Demirgüç-Kunt et al. (2020)²⁵, el acceso al crédito puede ser percibido inicialmente como una forma de empoderamiento, pero en muchos casos termina convir-

²⁵ Este estudio examina el impacto de la inclusión financiera a nivel mundial y es relevante en el contexto de la deuda rural, ya que el acceso al crédito ha sido promovido como una solución para el subdesarrollo. Sin embargo, los datos globales muestran cómo, en muchos casos, el microcrédito ha exacerbado las desigualdades y generado nuevas formas de subordinación financiera. Así, la discusión se amplía para comprender cómo este proceso ha erosionado la autonomía campesina.

tiéndose en una fuente de dependencia crónica. Los campesinos que dependen de los préstamos para sostener sus actividades productivas pierden la capacidad de tomar decisiones económicas autónomas, ya que deben ajustar su producción y estilo de vida a las exigencias del mercado global y de las instituciones financieras que dictan las condiciones del crédito.

Es evidente que la deuda, que erosiona la autonomía del campesinado, no solo es un mecanismo aislado de coerción económica, sino que se sostiene y promueve por medio de instituciones financieras, multinacionales y el propio Estado. Estos actores desempeñan un papel central en la imposición de un modelo económico que, bajo el disfraz del emprendimiento y el desarrollo, convierte al campesino en un sujeto dependiente del capital financiero global, perpetuando así su subordinación estructural. Lejos de ser una herramienta de empoderamiento, la deuda opera como un mecanismo de explotación y control que limita la capacidad de los campesinos para tomar decisiones autónomas sobre su producción y su vida.

Así, por ejemplo, el estudio de Morales Zapata (2021) destaca cómo el proceso de acumulación capitalista en zonas rurales, facilitado por el Estado y las multinacionales, no se limita solo a la coerción económica directa, sino que también está sostenido por un fuerte aparato ideológico. Este aparato promueve el emprendimiento como solución a los problemas del campesinado, mientras impulsa la proletarianización de los campesinos y su inserción forzada en la lógica del mercado global. Aunque este modelo ofrece una narrativa de autonomía y empoderamiento, en realidad los campesinos quedan atrapados en una lógica de explotación que reproduce y refuerza su subordinación al capital.

De igual manera, las microfinanzas en América Latina han sido promovidas como un mecanismo clave para ampliar el acceso al crédito, fortalecer la inclusión financiera y dinamizar sectores tradicionalmente excluidos del sistema bancario. En el estudio elaborado por Larraín (2009) para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) se muestra que en la región no hay un único modelo de microfinanzas, sino trayectorias diferenciadas, atravesadas por procesos de formalización institucional, expansión comercial, regulación financiera y participación de diversos tipos de entidades. En Colombia, este discurso institucional de la inclusión financiera ha presentado el acceso al crédito como un mecanismo para ampliar oportunidades económicas en sectores históricamente excluidos u olvidados. Este enfoque aparece reflejado en los reportes oficiales sobre inclusión financiera, en los que el acceso y uso de productos financieros se consideran indicadores de ampliación de cobertura del sistema financiero (Banca de las Oportunidades y Superintendencia Financiera de Colombia, 2020). Sin embargo, el microcrédito ha demostrado generar dependencias profundas y, como en otros países, ha tenido efectos no solo económicos, sino también subjetivos en los campesinos. Los estudios de caso muestran cómo el acceso a microcréditos ha transformado la autonomía productiva de los pequeños agricultores, quienes ahora están atrapados en una lógica de deuda perpetua, afectando su capacidad de resistir al capital financiero.

Esta lógica también se ve reflejada en el estudio de Ramírez-Virviescas y Guevara (2021), quienes analizan cómo las microfinanzas rurales han contribuido a la financiarización del campo colombiano. Este trabajo revela que, aunque los microcréditos inicialmente intentan impulsar el desarrollo rural, han generado dependencia y subordinación al capital financiero, afectando la autonomía de los campesinos.

Este estudio muestra que el microcrédito en Colombia ha introducido una lógica de dependencia que afecta profundamente a las comunidades rurales. Los campesinos, obligados a pagar altos intereses, adoptan prácticas productivas que a menudo resultan en el agotamiento de sus recursos y en la pérdida de control sobre sus tierras. Este fenómeno no solo limita su autonomía económica, sino que también reconfigura su subjetividad, haciendo que los campesinos internalicen las lógicas del mercado como naturales.

El campesino como sujeto hegemónico subordinado

La teoría de la hegemonía de Antonio Gramsci (1971)²⁶ es útil para entender cómo las microfinancieras, al imponer la deuda, no solo ejercen control económico, sino que también moldean las subjetividades de los campesinos, haciendo que estos acepten la subordinación como algo natural. Los campesinos endeudados internalizan la lógica del mercado y se ven atrapados en una estructura que legitima su explotación mediante narrativas de responsabilidad personal y éxito económico. Este proceso de hegemonía cultural refuerza la subordinación estructural del campesino al capital financiero, limitando su capacidad para resistir.

Un estudio reciente de Middelberg (2017) sobre las microfinancieras en Zambia señala cómo los pequeños agricultores, al endeudarse, pierden su capacidad de tomar decisiones sobre sus cultivos y métodos agrícolas. En muchos casos, los campesinos zambianos se ven obligados a adoptar cultivos comerciales, como el maíz, para cumplir con los pagos de sus deudas, lo que genera una mayor dependencia del mercado global y una erosión de las prácticas agrícolas tradicionales. Este caso ilustra claramente cómo la deuda transforma la autonomía productiva y la subjetividad campesina, generando una mayor vulnerabilidad económica.

²⁶ Gramsci es esencial para analizar cómo las instituciones financieras no solo ejercen control económico, sino también cultural, logrando que los campesinos acepten su subordinación mediante la hegemonía cultural. El concepto de hegemonía cultural permite entender cómo los campesinos endeudados ven su situación como una consecuencia natural de sus decisiones, lo que limita las posibilidades de resistencia.

Resistencia por medio de la reapropiación de la subjetividad

A pesar de los efectos opresivos de la deuda, los campesinos no son sujetos pasivos. Como señala Badiou (2022)²⁷, la resistencia al capital financiero no solo se manifiesta a nivel económico, sino también a nivel subjetivo. La lucha por la reapropiación de la subjetividad es central en las resistencias campesinas contemporáneas. Los movimientos campesinos, como La Vía Campesina, han demostrado que la resistencia frente a la financiarización no se limita a las demandas económicas, sino que también implica una reconfiguración de las identidades campesinas y la creación de nuevas formas de organización social y productiva.

En México, los movimientos agroecológicos han surgido como una forma de resistencia frente a la financiarización y la subordinación por medio de la deuda. Según un estudio reciente de Heredia Hernández y Hernández Moreno (2022), los campesinos agroecológicos han logrado desarrollar redes de producción y distribución que les permiten escapar de las lógicas del mercado global y del endeudamiento crónico. Por medio de la agroecología, los campesinos no solo recuperan su autonomía productiva, sino también su identidad como actores sociales y políticos. Este caso resalta la importancia de la resistencia subjetiva como un componente central de la lucha campesina contra la deuda.

De igual manera, Ramírez-Virviescas y Guevara (2021) resaltan cómo, a pesar de las dinámicas de subordinación, han surgido movimientos de resistencia en Colombia. Los campesinos organizados han recurrido a prácticas agroecológicas y cooperativas para enfrentar la lógica impuesta por las microfinancieras. Estos movimientos desafían la narrativa hegemónica de la deuda como herramienta de desarrollo, ofreciendo una alternativa centrada en la soberanía alimentaria y la producción comunitaria.

La deuda como terreno de lucha política

En efecto, la deuda se ha convertido en un campo de batalla central en las luchas políticas de los campesinos. Como señala Soederberg (2014), la deuda no solo es una relación financiera, sino una herramienta de poder que configura las relaciones de clase, género y territorio. Los movimientos sociales han empezado a cuestionar la legitimidad

²⁷ Badiou, en su reflexión sobre la verdad y la subjetividad, explora cómo las formas de resistencia surgen de la capacidad de los sujetos para desafiar las estructuras dominantes. En el contexto de la deuda campesina, su teoría sobre la *subjetividad de la verdad* es particularmente relevante. Badiou argumenta que las verdades no son simplemente descripciones de la realidad, sino eventos que abren nuevas posibilidades de ser. Esto se relaciona con los movimientos campesinos que luchan por la soberanía alimentaria y la reapropiación de la tierra, resistiendo la subordinación impuesta por la deuda. La idea de que la subjetividad puede ser transformada por medio de un acto de resistencia es central para entender cómo los campesinos endeudados reconfiguran sus identidades al desafiar las lógicas del capital financiero.

de la deuda como instrumento de control, proponiendo alternativas que promuevan la soberanía económica y la justicia social.

En este contexto, las luchas campesinas frente a la deuda no pueden reducirse a reclamos económicos aislados, ya que expresan disputas más amplias por la tierra, la autonomía productiva y la capacidad colectiva de decidir sobre las condiciones de reproducción de la vida rural. Gerber et al. (2021) muestran que los conflictos sociales por las deudas privadas han tenido una presencia significativa en contextos rurales y que, lejos de constituir reacciones meramente individuales, pueden articular formas colectivas de resistencia frente a mecanismos financieros que subordinan hogares, territorios y relaciones comunitarias. En Indonesia, las trayectorias de los movimientos agrarios evidencian que la resistencia campesina se ha configurado históricamente alrededor de la disputa por la tierra, la crítica a las formas dominantes de propiedad y la organización política desde abajo (White et al., 2023).

La deuda, como dispositivo de control y subordinación, ha transformado profundamente la subjetividad campesina en el contexto de la financiarización global. Sin embargo, los campesinos no han sido sujetos pasivos frente a estas dinámicas. A lo largo de este capítulo, hemos explorado cómo la deuda no solo tiene implicaciones económicas, sino también culturales, sociales y políticas, afectando profundamente la identidad y las prácticas de los campesinos endeudados. Desde el control biopolítico ejercido por medio de la deuda hasta las formas de resistencia que surgen frente a estas imposiciones, la lucha por la subjetividad campesina continúa siendo un campo de batalla clave en las economías rurales.

Los casos mencionados muestran que la resistencia campesina frente a la deuda no solo implica la lucha por la tierra y los recursos, sino también la reconfiguración de las subjetividades y las relaciones sociales dentro de las comunidades rurales. Movimientos como La Vía Campesina han demostrado que es posible resistir al capital financiero mediante prácticas agroecológicas y redes de solidaridad, creando nuevas formas de organización que desafían las lógicas de la deuda.

El desarrollo de estudios en diferentes contextos internacionales, como México, Bangladesh, Zambia e Indonesia, destaca la relevancia de estas dinámicas a nivel global. Estos estudios ponen en evidencia que, aunque la deuda sigue siendo una herramienta poderosa de control, las formas de resistencia emergentes abren la posibilidad de imaginar nuevas alternativas económicas y sociales para las comunidades campesinas.

Acumulación por desposesión y la configuración del territorio

La acumulación por desposesión es un proceso clave en la expansión del capitalismo, que implica la expropiación de bienes comunes y la apropiación de tierras para integrarlas en lógicas de acumulación de capital. Esta dinámica, como expone Harvey (2004), ha generado una transformación profunda no solo en las economías rurales, sino también en las estructuras espaciales y territoriales que sustentan la vida campesina. Por medio de la imposición de modelos de producción intensiva, el capital global ha reconfigurado los territorios rurales, alterando los modos de vida y las relaciones ecológicas que existían antes de la intervención del mercado. Esta sección profundiza en cómo la acumulación por desposesión ha afectado la configuración territorial en diferentes contextos globales, prestando particular atención a los efectos sobre la subjetividad campesina y la resistencia territorial.

La teoría de la acumulación por desposesión y su aplicación al mundo rural

David Harvey introdujo el concepto de *acumulación por desposesión* como una actualización del concepto marxista de *acumulación primitiva*. Harvey (1975, 2004) argumenta que el capitalismo contemporáneo sigue recurriendo a prácticas de expropiación para mantener su capacidad de expansión, especialmente en tiempos de crisis económica. Este proceso incluye la privatización de bienes públicos, la mercantilización de la naturaleza y la explotación de los territorios rurales para fines de acumulación de capital. En el contexto rural, la acumulación por desposesión se manifiesta por medio de la expulsión de los campesinos de sus tierras, la concentración de la propiedad en manos de corporaciones agroindustriales y el uso intensivo de recursos naturales.

Así, por ejemplo, el estudio de Cáceres (2015)²⁸ sobre Argentina describe cómo la expansión del agronegocio, particularmente de la soya transgénica, ha llevado a un proceso de concentración de tierras que ha despojado a miles de familias campesinas y pueblos indígenas. La introducción de estos monocultivos no solo ha transformado

²⁸ Cáceres (2015) señala que la expansión del agronegocio en Argentina ha exacerbado los conflictos socioambientales, debido a la concentración de tierras y la intensificación de la explotación de los recursos naturales. Estos conflictos no son meramente económicos, sino que también tienen una dimensión política, ya que el Estado facilita la expropiación mediante políticas que favorecen el capital transnacional. La obra de Cáceres puede ser contrastada con la de Castro de Araújo y Araújo Sobrinho (2022) y la de Sauer y Pereira Leite (2012), quienes analizan cómo los movimientos campesinos en Brasil han desarrollado estrategias de resistencia frente a la expansión del monocultivo. Esto resalta la importancia de entender la acumulación por desposesión no solo como un proceso económico, sino también como una forma de reconfiguración territorial impuesta desde el poder estatal.

el uso de la tierra, sino que ha reconfigurado el territorio en función de los intereses del mercado global. Estos casos de despojo son ejemplos claros de cómo el capital global penetra en los territorios rurales, transformando las dinámicas locales en función de la acumulación de valor a gran escala.

El impacto territorial: reconfiguración espacial y desplazamiento forzado

La acumulación por desposesión en el ámbito rural no solo se manifiesta en la pérdida de tierras, sino en una reconfiguración integral del espacio y las relaciones sociales. Según Villamayor-Tomas y García-López (2018), el despojo campesino transforma la ecología de los territorios al reemplazar economías de subsistencia basadas en la biodiversidad por sistemas productivos intensivos que dependen de la monocultura y el uso de agroquímicos. Este cambio no solo tiene consecuencias ambientales devastadoras, como la degradación del suelo y la contaminación del agua, sino que también reestructura el territorio en función de las necesidades del capital, separando a las comunidades de sus medios de vida tradicionales y generando conflictos por los recursos.

Un claro ejemplo de esta reconfiguración territorial es el desplazamiento campesino en Filipinas. Borrás y Franco (2012) estudian cómo las políticas de reforma agraria fueron desmanteladas a favor de la expansión de monocultivos, como la caña de azúcar y el aceite de palma, impulsados por capitales extranjeros. Por medio de la financiarización de la agricultura, los campesinos filipinos han sido desplazados de sus tierras para dar paso a grandes proyectos agroindustriales²⁹. Estos proyectos no solo reconfiguran el territorio en términos productivos, sino que alteran las redes sociales y de poder, sometiendo a las comunidades locales a nuevas formas de explotación laboral y dependencia.

Financiarización de la tierra y el despojo campesino en América Latina

En América Latina, el proceso de acumulación por desposesión ha estado profundamente vinculado a la financiarización de la tierra, un fenómeno que ha facilitado la privatización y concentración de grandes extensiones rurales. Según Svampa (2019), la financiarización ha permitido que el capital fluya hacia áreas rurales en forma de

²⁹ Este proceso de acumulación por desposesión no solo ha resultado en el desplazamiento masivo de campesinos, sino que también ha reconfigurado las estructuras sociales en función de la producción intensiva para la exportación. El caso de Filipinas se puede comparar con el fenómeno de la expansión del cultivo de palma en Colombia, donde la articulación entre conflicto armado, valorización agroindustrial de la tierra y control territorial han reconfigurado los territorios rurales. Millán-Quijano y Pulgarín (2023) muestran la relación entre desplazamiento forzado interno y expansión de la palma aceitera en Colombia, mientras que Potter (2020) analiza cómo el desarrollo palmero se consolidó en medio de condiciones desiguales de acceso y control de la tierra.

inversión directa o préstamos a los campesinos, lo que en última instancia genera su despojo. Esta dinámica está respaldada por políticas gubernamentales que promueven la inversión extranjera y los proyectos extractivos, como la minería y el agronegocio, a expensas de los derechos territoriales de las comunidades locales.

Un caso emblemático de este proceso en Colombia es la expansión del cultivo de palma aceitera en la región del Magdalena Medio. Según el estudio de Ramírez-Virviescas y Guevara (2021), las políticas de desarrollo rural promovidas por el Estado han facilitado el acceso a créditos para grandes empresas agroindustriales, mientras que los pequeños agricultores se ven atrapados en ciclos de deuda. Esta financiarización ha conducido al despojo de tierras campesinas, las cuales han sido adquiridas por grandes corporaciones que utilizan estos territorios para la producción intensiva de aceite de palma, destinado principalmente a la exportación. El resultado es un desplazamiento masivo de comunidades rurales y una transformación del paisaje rural en beneficio del capital global.

Interpretación de patrones espaciales y dinámicas de financiarización

La reconfiguración territorial documentada en los casos analizados opera como un dispositivo estructural de extracción de renta financiera. La correlación espacial entre zonas de alto endeudamiento campesino y corredores de expansión agroindustrial evidencia cómo el crédito actúa como un mecanismo de disciplinamiento espacial. Al condicionar el acceso al financiamiento a la adopción de monocultivos comerciales, las instituciones microfinancieras reorganizan el paisaje rural, fragmentando la contigüidad ecológica de las unidades productivas familiares y desplazando la vocación agroecológica original.

Más que una externalidad técnica, este patrón obedece a una lógica de valorización financiera que convierte al suelo en el activo colateral de flujos de capital especulativo. La intensificación productiva exigida por los contratos crediticios acelera la degradación del suelo y la sobreexplotación hídrica, externalizando los costos metabólicos hacia las comunidades mientras las plusvalías se capturan mediante cadenas globales de valor. Esta dinámica geoespacial confirma que el despojo contemporáneo opera mediante instrumentos de mercado que subordinan la tenencia de la tierra a ciclos de reproducción financiera, desplazando la coerción directa por mecanismos de endeudamiento estructural (Clapp e Isakson, 2018; Fairbairn, 2014; Moore, 2025).

Resistencia y reconfiguración del territorio: la agroecología como respuesta al despojo

A pesar de los procesos de acumulación por desposesión, las comunidades campesinas han desarrollado formas de resistencia frente a la privatización de la tierra y la imposición de monocultivos. En el caso de Brasil, Testa Monteiro et al. (2025) afirman que la transición agroecológica debe trascender la simple sustitución técnica de insumos para ser vista como un proceso territorial sostenido por la organización campesina, la construcción colectiva de conocimientos, la identidad rural, las políticas públicas y la articulación entre actores locales, regionales y nacionales. Según esta perspectiva, la agroecología aparece como una respuesta al modelo agroindustrial dominante, en la medida en que permite reconfigurar el territorio en función de la soberanía alimentaria, la sostenibilidad ecológica y la reproducción social campesina. Estos procesos desafían la lógica del capital al promover formas de producción vinculadas con la diversidad biológica, la cooperación comunitaria y la defensa de los ecosistemas locales.

Como señalan Borsatto y Souza-Esquerdo (2019)³⁰, los movimientos agroecológicos en Brasil han sido una respuesta directa a la expansión del agronegocio y la financiarización de la agricultura. Estos movimientos buscan reconfigurar el territorio en función de los principios de soberanía alimentaria y sostenibilidad ecológica, desafiando la lógica del capital y promoviendo formas de producción que están en armonía con los ecosistemas locales.

El caso del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) en Brasil es uno de los ejemplos más destacados de cómo las comunidades campesinas pueden resistir la acumulación por desposesión y reconfigurar el territorio de manera sostenible. Según Borsatto y Souza-Esquerdo (2019), el MST ha logrado recuperar miles de hectáreas de tierra que habían sido acaparadas por corporaciones agroindustriales y ha transformado estos territorios en asentamientos agroecológicos, ya que, desde mediados de la década de 1990, ha promovido la agroecología como orientación estratégica en sus asentamientos rurales.

A esta experiencia se suman formas de comercialización alternativa, ferias de reforma agraria, mercados de proximidad y espacios como los *Armazéns do Campo*, mediante los cuales el movimiento busca conectar la producción agroecológica con consumidores urbanos y ampliar el sentido político de la reforma agraria (Pizarro Muñoz et al., 2021). En este marco, los asentamientos no solo buscan producir alimentos de

³⁰ Borsatto y Souza-Esquerdo (2019) advierten que la agroecología no es solo una alternativa técnica a la agricultura industrial, sino una respuesta política al despojo territorial. En Brasil, el MST ha utilizado la agroecología como una herramienta para reconfigurar los territorios rurales en función de las necesidades de las comunidades campesinas, en lugar de los intereses del capital. Este enfoque agroecológico puede ser comparado con los movimientos de resistencia agroecológica en México y otros países de América Latina, donde los campesinos han logrado desafiar la lógica de la financiarización y la acumulación por desposesión, reconfigurando sus territorios para promover la soberanía alimentaria.

manera sostenible, sino que también reconstituyen relaciones sociales basadas en la cooperación, la solidaridad y la defensa territorial, en contraposición a la competencia impuesta por el agronegocio.

Dimensiones políticas de la acumulación por desposesión

Como se ha señalado, la acumulación por desposesión no es solo un proceso económico, sino profundamente político. Los Estados desempeñan un papel central en la facilitación de este proceso, ya sea mediante políticas neoliberales que promueven la inversión extranjera o mediante el uso de la violencia y la represión para desalojar a las comunidades rurales de sus tierras. Soederberg (2014)³¹ analiza cómo los Estados, por medio de la deuda y las políticas de austeridad, imponen regímenes de desposesión sobre los territorios rurales, obligando a los campesinos a entrar en relaciones de dependencia con el capital financiero.

En Colombia, el Estado ha sido un facilitador clave de la acumulación por desposesión. Las políticas de desarrollo rural han estado orientadas a promover la inversión en el sector agroindustrial, en detrimento de las economías campesinas tradicionales. Así, por ejemplo, el Estado ha implementado políticas de incentivo para la expansión del monocultivo de palma aceitera, lo que ha resultado en el desplazamiento de miles de campesinos y en la concentración de la tierra en manos de unas pocas corporaciones (Millán-Quijano y Pulgarín, 2023; Potter, 2020).

La acumulación por desposesión sigue siendo un proceso clave en la configuración del territorio rural bajo el capitalismo contemporáneo. Por medio de la financiarización, la privatización de la tierra y la imposición de monocultivos, el capital ha transformado los paisajes rurales, generando nuevas formas de explotación y despojo. Sin embargo, las comunidades campesinas han desarrollado formas de resistencia que buscan reconfigurar el territorio en función de principios de justicia social y sostenibilidad ecológica. La lucha por la tierra es, en última instancia, una lucha por el control del territorio y la soberanía sobre los recursos que sustentan la vida.

La revisión teórica y empírica desarrollada en este capítulo representa una contribución original frente a los marcos de la economía política de la deuda y la ecología financiera

³¹ Soederberg (2014) profundiza en el concepto de *debtfare*, según el cual los Estados instrumentalizan la deuda como un mecanismo de control sobre las poblaciones más pobres, incluyendo a las comunidades rurales. En este contexto, las políticas neoliberales promueven el acceso al crédito como una solución para la pobreza, cuando en realidad generan nuevas formas de subordinación al capital financiero. En el caso colombiano, el concepto de *debtfare* es relevante para entender cómo la financiarización del campo ha despojado a los campesinos de sus tierras, facilitando su conversión en asalariados o microempresarios dentro del sistema capitalista. Contrastar esta obra con la de Ramírez-Virviescas y Guevara (2021) permitiría esclarecer cómo la deuda opera como un mecanismo de desposesión en los territorios rurales colombianos.

rural. Lejos de limitarse a catalogar los efectos negativos del microcrédito, este análisis demuestra que la financiarización opera como un régimen biopolítico que reconfigura la subjetividad campesina mediante la internalización de la culpa y la responsabilidad individual.

La contribución de los autores radica en hacer evidente que la trampa de la deuda no deriva de un fallo de diseño institucional, sino que configura una arquitectura deliberada de extracción de plusvalía social que transforma al productor rural en un agente fiscalizado y productivamente alienado. Frente a esto, la resistencia campesina no se agota en la renegociación crediticia, sino que se materializa en la construcción de contraespacios metabólicos que restablecen la soberanía productiva y epistémica. Los movimientos agroecológicos y las redes de economía solidaria surgen, en este marco, como laboratorios de desendeudamiento ontológico que desafían la homogeneización financiera del campo. Al vincular los ciclos de crédito con la fragmentación territorial y la erosión de las capacidades humanas, se establece un puente analítico que permite comprender la crisis rural no como una deficiencia de mercado, sino como una contradicción estructural del capitalismo financiarizado aplicado a la reproducción de la vida campesina (Foucault, 1978; Gutiérrez Sanín y Carranza Franco, 2017; Lazzarato, 2013).

Proyecciones hacia la planificación rural, ordenamiento territorial y estrategias institucionales

La evidencia analítica exige una reorientación normativa hacia instrumentos de planificación rural que trasciendan el enfoque asistencialista del crédito. Se requiere consolidar el ordenamiento territorial con enfoque de cuenca biocultural, integrando la capacidad de carga ecosistémica como límite operativo para la expansión agroexportadora. Los TECAM deben articularse como figuras estratégicas de gestión del riesgo climático y financiero, priorizando la restauración de corredores agroecológicos, la implementación de bancos de semillas comunitarios y la creación de fondos de soberanía alimentaria desvinculados de la lógica crediticia externa.

A nivel institucional, se recomienda: (a) diseñar instrumentos de financiamiento público no extractivo para los TECAM, basados en capital semilla a fondo perdido y periodos de gracia alineados a los ciclos biológicos de los cultivos; (b) implementar sistemas de alerta temprana para gestión del riesgo de sobreendeudamiento rural, vinculando los observatorios de precios agrícolas con los portafolios de crédito institucional; (c) fortalecer la gobernanza participativa mediante mesas técnicas de ordenamiento territorial, en las que las organizaciones campesinas ejerzan capacidad decisoria sobre la destinación de usos del suelo y la priorización de inversiones públicas en infraestructura agroecológica, y (d) regular las tasas de interés y las condiciones de los microcréditos rurales, estableciendo techos éticos y mecanismos de auditoría comunitaria que prevengan la captura extractiva del capital financiero. Solo mediante esta articulación entre política pública, gestión del riesgo ecosistémico y autonomía decisional campesina será posible

transformar la planificación rural en un instrumento de emancipación socioecológica (Borras y Franco, 2012; Kay, 1989; Toledo y Barrera-Bassols, 2008).

Conclusiones

La financiarización de las economías rurales ha resultado ser un proceso profundamente transformador que va más allá de las dinámicas económicas, configurándose como un mecanismo de despojo, no solo material, sino también subjetivo y territorial. La lógica del crédito y el endeudamiento, promovida como una solución para el desarrollo rural, ha convertido a los campesinos en sujetos subordinados a las exigencias del capital financiero, generando nuevas formas de explotación que transforman la relación del campesino con la tierra, el trabajo y la comunidad.

Este capítulo ha mostrado cómo la expansión de las microfinanzas, lejos de ser una herramienta de empoderamiento, ha creado una trampa de deuda que afecta tanto a la autonomía productiva de los campesinos como a su subjetividad. Siguiendo el concepto de *homo endeudado* desarrollado por Lazzarato (2013), la deuda se ha impuesto como una forma de control biopolítico que condiciona las decisiones productivas y de vida de los campesinos, quienes se ven forzados a adoptar prácticas agrícolas intensivas y a menudo insostenibles para cumplir con las exigencias del crédito. Esta lógica no solo destruye los modos de vida tradicionales, sino que reconfigura las relaciones territoriales, subordinando los territorios rurales a las lógicas extractivistas y globales del capital financiero.

Los casos presentados a lo largo de este capítulo, como el impacto del microcrédito en la India o la financiarización del campo en Sonsón (Antioquia), reflejan cómo el despojo económico se entrelaza con un despojo simbólico y cultural. Los campesinos, atrapados en ciclos de deuda crónica, no solo pierden el control sobre sus tierras, sino que también ven transformada su identidad, pasando de ser agentes autónomos a convertirse en sujetos subordinados a las dinámicas del capital global. Esta subordinación se refuerza mediante un fuerte aparato ideológico que promueve el crédito y el emprendimiento como soluciones naturales a la pobreza, ocultando así las estructuras de explotación que perpetúan la desigualdad rural.

Sin embargo, la financiarización no ha sido un fenómeno incuestionable. A lo largo del capítulo se han destacado las formas de resistencia que han surgido desde las comunidades rurales, como los movimientos agroecológicos y las cooperativas solidarias, que representan una reconfiguración de las relaciones con la tierra y el territorio. Estas resistencias, si bien aún son marginales en términos globales, muestran que es posible construir alternativas al modelo de desarrollo basado en el endeudamiento, poniendo en el centro la sostenibilidad y la justicia social.

En definitiva, la financiarización de las economías rurales ha operado como un mecanismo de acumulación por desposesión que transforma no solo las estructuras productivas, sino también las subjetividades campesinas y las relaciones territoriales. Este análisis resalta la necesidad de cuestionar críticamente las políticas de crédito y desarrollo rural porque, lejos de empoderar a los campesinos, los atrapan en una lógica de deuda que perpetúa su subordinación estructural al capital financiero. Por tanto, el reto radica en promover modelos de desarrollo alternativos que prioricen la autonomía campesina, la soberanía alimentaria y la sostenibilidad territorial como ejes centrales para la reconfiguración de las economías rurales en un mundo cada vez más interconectado y financieramente dependiente.



Capítulo 3.

Transformaciones socioambientales y resistencia territorial en la región andina del Tolima: vocación del suelo y conflictos por el uso del territorio

La interrelación entre los seres humanos, la naturaleza y el territorio andino del Tolima ofrece una oportunidad única para reflexionar sobre las múltiples dimensiones del conflicto ambiental y las posibilidades de regeneración. En la región de los municipios de Líbano, Murillo y Villahermosa, los sistemas agrícolas y agroforestales han transformado profundamente el paisaje natural. No obstante, esta transformación no debe entenderse únicamente desde un enfoque técnico o económico, sino también desde una perspectiva ontológica y política, en la que el territorio se convierte en un espacio de lucha por la autonomía, la identidad y la sostenibilidad (Escobar, 2025)³².

Desde el enfoque del pluriverso, propuesto por la ecología política decolonial, el territorio es mucho más que un recurso explotable: es un entramado de relaciones en el que lo humano y lo no humano coexisten y cocrean alternativas de vida en resistencia al avance de las lógicas extractivistas del capitalismo global (Blaser, 2025; Blaser y De la Cadena, 2018)³³. Este enfoque multidimensional permite integrar distintas disciplinas, desde la ecología crítica hasta la sociología rural, revelando cómo las comunidades campesinas en el Tolima han enfrentado históricamente el avance de la frontera agrícola, la explotación de sus recursos naturales y la presión constante para integrar sus tierras en mercados agroindustriales.

Las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) y los Territorios Campesinos Agroalimentarios (TECAM) surgen como respuestas locales frente a la expansión de la agroindustria y los monocultivos que han caracterizado el desarrollo agrícola en la región. Estas iniciativas comunitarias no son solo proyectos de conservación ambiental, sino que representan la posibilidad de construir otros mundos posibles, basados en la agroecología, la soberanía alimentaria y la autodeterminación territorial (Escobar, 2014)³⁴. En contraste con la lógica monocultural del capitalismo, que reduce la tierra a una simple mercancía, las ZRC y los TECAM reivindican la diversidad biocultural y la importancia de regenerar las relaciones entre las comunidades y los ecosistemas³⁵.

³² La ecología política se ha desarrollado como un enfoque teórico que aborda la interacción entre el ambiente y las sociedades humanas desde una perspectiva de poder y conflicto. Según Escobar (2025), el territorio no es solo un recurso explotable, sino un espacio cargado de significados sociales y culturales, donde los actores locales y globales luchan por su control. Este enfoque ha sido clave para comprender los conflictos territoriales en el contexto latinoamericano, donde las políticas extractivistas chocan con las prácticas campesinas de subsistencia.

³³ El concepto de *pluriverso*, desarrollado por autores como Blaser (2025), desafía la visión universalista del desarrollo al proponer que existen múltiples formas de ser y conocer el mundo. En este contexto, la coexistencia entre lo humano y lo no humano se convierte en una forma de resistencia al capitalismo global y sus lógicas extractivistas.

³⁴ Los TECAM surgen como una respuesta organizativa de las comunidades rurales a las presiones del agronegocio y las políticas neoliberales. Según Escobar (2014, 2025), estas prácticas no solo buscan la autosuficiencia alimentaria, sino que también desafían las lógicas del mercado global al priorizar la gestión sostenible de los recursos y la conservación de la biodiversidad. Este enfoque se conecta con los movimientos por la soberanía alimentaria que promueven una resistencia al extractivismo agrícola.

³⁵ Las ZRC son un mecanismo legal que permite a las comunidades rurales conservar sus territorios frente a las presiones de la agroindustria. Estas zonas no solo protegen la biodiversidad, sino que también fortalecen la soberanía territorial de las comunidades. Como señala Barreto García (2023), estas figuras institucionalizan la gestión comunitaria de los bienes comunes, fortaleciendo la soberanía territorial y

Esta resistencia ontológica no solo desafía el modelo extractivista, sino que también cuestiona las bases epistemológicas del desarrollo³⁶ al proponer un enfoque basado en el buen vivir, que prioriza el bienestar colectivo sobre el lucro individual. Al proponer estas alternativas, las comunidades de Líbano, Murillo y Villahermosa han mostrado que es posible reimaginar el uso del suelo y la vocación de los territorios, integrando prácticas sostenibles que permiten el cuidado de los ecosistemas estratégicos, como los páramos y las zonas de reserva natural (Martínez Alíer, 2021).

En este sentido, la expansión de la frontera agrícola no solo implica la transformación de los ecosistemas, sino también un proceso de despojo que reconfigura la relación de las comunidades con su territorio³⁷. Como señala el análisis marxista de la ecología, el capital tiende a apropiarse de la naturaleza mediante la privatización y la mercantilización de los recursos, desplazando a las comunidades que dependen de ellos para su subsistencia. Sin embargo, en el caso del Tolima, las comunidades campesinas han resistido estas dinámicas de acumulación por desposesión mediante la creación de redes de apoyo mutuo y la implementación de sistemas de producción agroecológica que buscan restaurar los suelos y preservar la biodiversidad (Moore, 2025).

Al poner en el centro las luchas campesinas y su relación con el territorio, la ecología política decolonial nos invita a repensar las políticas de desarrollo que han dominado el manejo del suelo en Colombia. En lugar de seguir promoviendo modelos que agotan los recursos naturales en nombre del progreso, es necesario escuchar a las comunidades locales y sus propuestas de ordenamiento territorial basadas en una gestión más integral y respetuosa de los ciclos naturales y las relaciones humanas (Harvey, 2004). En este sentido, las ZRC y los TECAM no son solo soluciones técnicas, sino parte de una estrategia más amplia para construir un mundo donde la vida, en todas sus formas, sea valorada y respetada.

la protección de la biodiversidad. Desde la perspectiva de la ecología política, esta articulación entre organización campesina y conservación puede entenderse como una expresión de lo que Martínez Alíer (2021) denomina ecologismo de los pobres, el cual se refiere a la defensa activa de los medios de vida, priorizando el bienestar colectivo y la reproducción social, en línea con el buen vivir, sobre la lógica extractivista de mercantilización de la naturaleza.

³⁶ El término *resistencia ontológica* ha sido acuñado por autores de la ecología política para describir cómo las comunidades indígenas y campesinas no solo resisten al extractivismo en el ámbito material, sino también en el epistemológico. Según Blaser (2025), las formas de conocimiento local no se alinean con las lógicas occidentales de explotación de la naturaleza, proponiendo en su lugar una ontología relacional en la que los seres humanos y los no humanos coexisten de manera armónica. Este enfoque es fundamental para comprender las luchas campesinas en Colombia.

³⁷ El concepto de acumulación por desposesión desarrollado por David Harvey (2004, 2026) es clave para entender este proceso. En este caso, la expansión de la frontera agrícola en el Tolima refleja la apropiación de tierras y recursos naturales por parte del capital, que transforma los ecosistemas y desplaza a las comunidades rurales de sus tierras ancestrales. Este proceso no es exclusivo de Colombia, sino que es característico del modelo de desarrollo capitalista en muchas regiones del sur global.

Delimitación metodológica y procedimientos analíticos

Para garantizar la transparencia, la validez interna y la replicabilidad de los hallazgos, este capítulo se sustenta en un diseño cualitativo-crítico de orientación socioecológica, fundamentado en los postulados de la ecología política y la geografía agraria crítica. Siguiendo a Robbins (2019), la investigación adopta un enfoque interdisciplinar que examina las relaciones de poder, los conflictos distributivos y las transformaciones espaciales como procesos estructurales y no como fenómenos aislados. La estrategia metodológica se configura como un estudio de caso instrumental, seleccionado mediante muestreo teórico para revelar dinámicas de financiarización rural y acumulación por desposesión en contextos andinos colombianos (Stake, 2008).

Las técnicas de recolección de datos se articulan en tres ejes fundamentales. En primer lugar, se ejecuta una revisión documental sistemática y crítica de bases institucionales oficiales (Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE]; Instituto Geográfico Agustín Codazzi [IGAC]; Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales [IDEAM]; Corporación Autónoma Regional del Tolima [CORTOLIMA], y Unidad de Planificación Rural Agropecuaria [UPRA]), aplicando criterios de exhaustividad, actualidad y triangulación cruzada para mitigar sesgos de fuente y garantizar la trazabilidad de los datos espaciales (Flick, 2018). En segundo lugar, se emplea análisis geoespacial comparativo mediante sistemas de información geográfica (QGIS), siguiendo protocolos de validación topológica y superposición multicapa para cartografiar vocación de uso, coberturas naturales, oferta ambiental y áreas protegidas; este procedimiento se alinea con la tradición de la cartografía crítica y el contramapeo territorial, que permite visibilizar las asimetrías en el acceso, el control y la valoración del suelo (Haesbaert, 2004; Peluso y Lund, 2011). En último lugar, se realiza una triangulación teórico-metodológica que integra categorías de la ecología política decolonial, el marxismo ecológico y los estudios de ordenamiento territorial, garantizando coherencia entre el marco conceptual y la evidencia empírica (Leff, 2010; Toledo y Barrera-Bassols, 2008).

El criterio de delimitación del área de estudio —que comprende los municipios de Líbano, Murillo y Villahermosa— se fundamenta en tres variables estratégicas validadas en la literatura agraria comparada. La primera variable es la representatividad ecosistémica y productiva: la región opera como zona de transición entre páramos andinos y valles intermedios, con una frontera agrícola en expansión documentada por la UPRA (2023). La segunda variable es la intensificación de conflictos territoriales y presión especulativa: los registros catastrales y judiciales evidencian procesos de revalorización del suelo, concentración predial y disputas por el uso del territorio, fenómenos centrales para analizar la acumulación por desposesión en clave contemporánea (Borras y Franco, 2012; Kay, 1989). La tercera variable es la presencia de dispositivos de gobernanza

colectiva: la configuración activa de ZRC y TECAM ofrece un laboratorio empírico para observar resistencias ontológicas y prácticas de reterritorialización frente al capital financiero (Escobar, 2014; Machado, 2017).

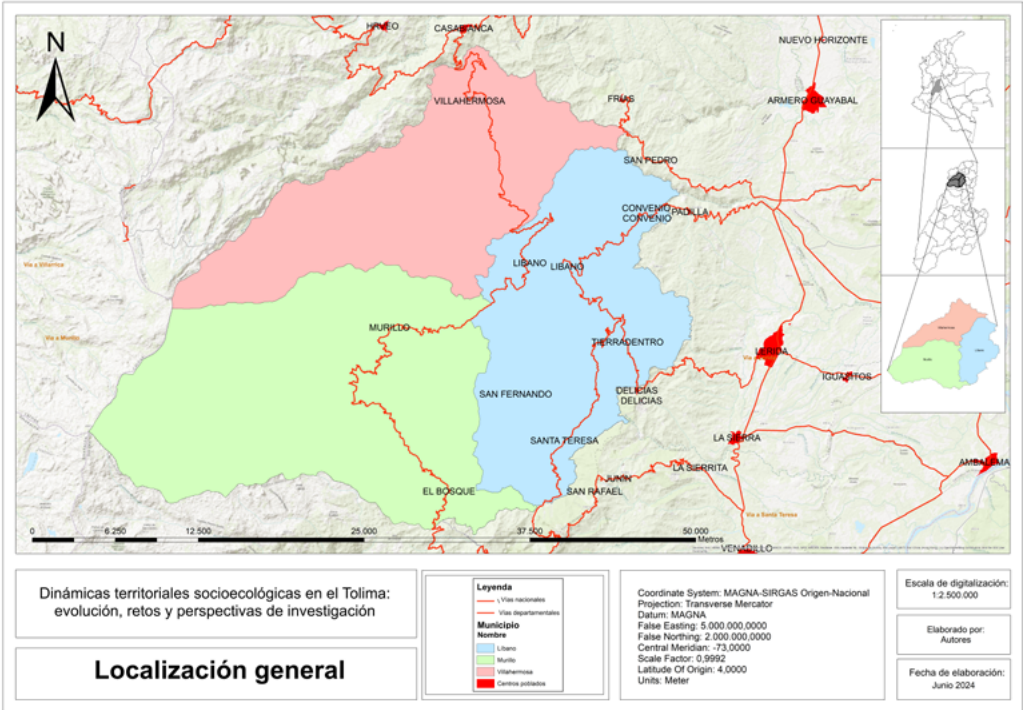
Los procedimientos analíticos se estructuran en una ruta dialéctica de tres fases, diseñada para trascender la descripción empírica y alcanzar una interpretación crítico-estructural. En la primera fase, se contrasta la vocación biofísica del suelo con los patrones de uso efectivo, cuantificando las divergencias mediante matrices de transición e índices de fragmentación predial. Esta operación permite identificar los desajustes metabólicos y la mercantilización del territorio (Moore, 2025). En la segunda fase, se cruzan variables socioeconómicas (tamaño predial, avalúos catastrales, acceso a crédito) con las transformaciones espaciales, aplicando análisis comparativo para revelar cómo la financiarización del suelo reconfigura la estructura agraria local (Clapp e Isakson, 2018; Fairbairn, 2014). En la tercera fase, se interpreta la evidencia espacial como materialización de procesos de acumulación por desposesión y subordinación financiera, articulando la cartografía temática con categorías teóricas de Harvey (2004) y Lazzarato (2013). Este diseño metodológico asegura que los hallazgos no dependan de inferencias descriptivas y se anclen en un proceso verificable, replicable y rigurosamente fundamentado en la tradición de la investigación crítico-territorial latinoamericana.

Ubicación geográfica

El área principal de estudio se encuentra integrada por tres municipios: Líbano, Murillo y Villahermosa, ubicados al norte del departamento del Tolima, en el centro de Colombia, sobre la cara oriental de la cordillera Central de los Andes. Se caracteriza por tener un clima que va desde cálido semihúmedo hasta extremadamente frío súper húmedo, un régimen de precipitación mayor a 2000 mm y una temperatura entre 9 °C y 21 °C, lo cual evidencia una amplia variedad climática y condiciones para la biodiversidad ecosistémica (IDEAM, 2018, 2023). En el mapa 1 se presenta la delimitación espacial del área de estudio y en la tabla 1, la extensión territorial por municipio.



Mapa 1. Ubicación geográfica del área de estudio



Fuente: elaboración propia a partir del DANE (2020).

Tabla 1. Extensión territorial de los municipios del área de estudio

Municipio	Área (ha)
Murillo	42 372,1513
Líbano	28 220,0244
Villahermosa	27 906,4902
Total	98 499,6659

Fuente: elaboración propia a partir del DANE (2020).

La extensión territorial de estos municipios permite dimensionar la escala espacial del análisis y reconocer que el área de estudio es un territorio internamente diferenciado. En la tabla 1 se observa que Murillo concentra la mayor superficie, con 42 372,1513 ha; seguido por Líbano, con 28 220,0244 ha, y Villahermosa, con 27 906,4902 ha, para un total de 98 499,6659 ha. Esta distribución resulta relevante porque las diferencias de extensión, altitud, cobertura y vocación del suelo inciden en la manera como se expresan las tensiones entre conservación, producción agropecuaria, expansión de la frontera agrícola y resistencia territorial, lo cual es aprovechado por diferentes actores económicos.

La diversidad climática y ecosistémica de esta región ha sido históricamente aprovechada de manera desigual por diferentes actores económicos. La expansión de la frontera agrícola, incentivada por los intereses del mercado global, ha ocasionado una transformación del paisaje que, aunque promueve el crecimiento económico, genera tensiones en la preservación de los ecosistemas locales. Estos procesos reflejan las dinámicas de la acumulación capitalista, de modo que los recursos naturales se convierten en mercancías al servicio de intereses externos a las comunidades locales (Harvey, 2004).

Caracterización biofísica y ambiental

El análisis de las características biofísicas y ambientales de los municipios de Líbano, Murillo y Villahermosa, situados en el norte del Tolima, revela una región muy diversa en términos climáticos, hidrográficos y ecológicos. La variabilidad en el clima, que abarca desde zonas cálidas semihúmedas hasta climas extremadamente fríos y súper húmedos, genera un ambiente propicio para la biodiversidad y los servicios ecosistémicos esenciales, como la regulación hídrica y la preservación de suelos fértiles (Clerici et al., 2019; IDEAM, 2023). El estudio de la vocación de uso del suelo en esta región es crucial para entender las dinámicas productivas y los retos de la conservación ambiental.

La ecología política es una herramienta clave para analizar cómo el uso de los recursos naturales en esta área responde a una combinación de fuerzas económicas, políticas y sociales. La expansión de la frontera agrícola y la presión para desarrollar actividades productivas intensivas han generado impactos significativos en los ecosistemas, donde la biodiversidad y las coberturas naturales se han visto reducidas para dar paso a la agricultura y la ganadería (Agudelo-Hz et al., 2023; FAO, 2022; Rodríguez-Eraso et al., 2013; Soriano Hoyos, 2025)³⁸. Esta transformación de la vocación del suelo refleja las tensiones entre la conservación de los ecosistemas estratégicos y las políticas de desarrollo impulsadas por intereses económicos globales.

La vocación forestal, que abarca más del 60 % del área de estudio, es esencial para la protección de ecosistemas estratégicos como los páramos. No obstante, este uso del suelo enfrenta amenazas constantes debido a la expansión agrícola y las políticas que priorizan la producción económica a corto plazo, a menudo en detrimento de la sostenibilidad a largo plazo (Martínez et al., 2021). Estudios recientes sobre páramos y bosques andinos en Colombia muestran que la expansión agropecuaria puede reducir la vegetación nativa, fragmentar ecosistemas estratégicos y comprometer funciones

³⁸ La expansión de la frontera agrícola en América Latina ha sido impulsada históricamente por las políticas de desarrollo y el crecimiento de los mercados agroindustriales. Según la FAO (2022), esto ha causado la degradación del suelo, la pérdida de biodiversidad y el desplazamiento de comunidades rurales, lo que evidencia las consecuencias socioambientales de la intensificación agrícola. En el caso específico de Colombia, Rodríguez-Eraso et al. (2013) destacan cómo estos procesos han fragmentado los ecosistemas estratégicos, debilitando su capacidad de sostener servicios ecosistémicos esenciales.

esenciales de regulación hídrica y conservación de biodiversidad (Murad et al., 2024). Este conflicto es central para comprender la tensión entre producción agrícola intensiva y preservación de áreas protegidas y ecosistemas clave de la región (IGAC, 2023)³⁹.

La expansión de la frontera agrícola en los municipios de Líbano, Murillo y Villahermosa ha resultado en una transformación masiva de los paisajes naturales. Según el IDEAM (2022), el 57 % del territorio está cubierto por sistemas agrícolas, lo que ha ocasionado una reducción significativa en la cobertura forestal. Esta expansión, impulsada tanto por la demanda de tierras agrícolas como por las políticas gubernamentales, ha exacerbado la pérdida de biodiversidad y la degradación de los suelos, afectando la estabilidad ecológica de la región (Blake et al., 2023).

A pesar de estos cambios, todavía se conservan áreas importantes de bosques y zonas seminaturales, que representan el 41,74 % del territorio. Estos ecosistemas son fundamentales no solo para la conservación de la biodiversidad, sino también para la mitigación de los efectos del cambio climático. Las comunidades locales, en colaboración con el Gobierno, han desempeñado un papel crucial en la preservación de estas áreas mediante la implementación de prácticas agroecológicas y la creación de reservas comunitarias (Barrios Latorre et al., 2023; Chavez-Miguel et al., 2022).

En cuanto a la oferta ambiental, las áreas designadas para la conservación representan un 41,88 % del área total. En estas zonas, se destaca la importancia de la preservación de los recursos hídricos y la biodiversidad. Sin embargo, estas áreas prioritarias también enfrentan presiones significativas debido a la expansión agrícola; por tanto, se requiere la implementación de políticas públicas más efectivas que promuevan el uso sostenible del territorio y protejan los ecosistemas estratégicos de la región (IGAC, 2023).

Vocación de uso del suelo

La vocación de uso del suelo está profundamente influenciada por factores como la topografía, el clima, la calidad del suelo y la disponibilidad de agua. Estos factores definen el uso óptimo del territorio, tanto para actividades agrícolas como para la conservación ambiental, y permiten entender cómo se distribuyen los sistemas productivos en la región. Así, por ejemplo, la vocación forestal cubre más del 60 % del área de estudio, lo que destaca la importancia de los ecosistemas forestales como reguladores del clima y amortiguadores de los impactos ambientales. No obstante, este uso del suelo está amenazado por la expansión de la frontera agrícola, que ha resultado

³⁹ La vocación forestal en zonas con ecosistemas estratégicos, como los páramos, enfrenta retos constantes debido a la expansión de la frontera agrícola. Los estudios del IGAC (2023) señalan la importancia de preservar estos espacios para mitigar el cambio climático y proteger la biodiversidad. Asimismo, Blake et al. (2023) indican que el modelo agroextractivista ha comprometido seriamente la sostenibilidad de estos territorios, generando un conflicto latente entre conservación y producción económica.

En el mapa 2, se puede observar la distribución de la vocación de uso del suelo en los tres municipios, donde se destaca la predominancia de las áreas forestales hacia el oriente y centro de la región, junto con parches de terrenos destinados para la agricultura y cuerpos de agua. Si bien este esquema visual permite apreciar cómo se distribuyen los usos del suelo en función de su capacidad biofísica, también evidencia las presiones socioeconómicas que afectan la capacidad de los ecosistemas para regenerarse y sostener la biodiversidad.

Dinámicas territoriales socioecológicas en el Toluca: evolución, retos y perspectivas de investigación

Vocación de uso del suelo

Legenda

Vocación	Color
Agropecuaria	Verde
Agropecuaria	Verde
Conservación de suelos	Púrpura
Cuencas de agua	Azul
Forestal	Amarillo
Zonas urbanas	Naranja

Coordenadas

Coordenadas: 19° 00' 00" N, 99° 00' 00" W

Proyección: Transversa Mercator

Datum: MAGNA

Falso Easting: 5 000 000 000

Falso Northing: 2 000 000 000

Central Meridian: -73.0000

Scale Factor: 0.9992

Latitude Of Origin: 4.0000

Units: Meter

Escala de digitalización: 1:2 500 000

Elaborado por: Autores

Fecha de elaboración: Junio 2024

En la tabla 2, se presenta un desglose detallado de los diferentes usos principales del suelo en términos de hectáreas ocupadas y porcentaje del área total, lo que facilita un análisis cuantitativo de las transformaciones territoriales. En particular, el uso forestal para la protección y producción representa el 60,29% del área, seguido por áreas dedicadas a la conservación de suelos y cuerpos de agua. Sin embargo, la agricultura intensiva y la expansión de cultivos transitorios ocupan un porcentaje significativo del suelo, lo que refleja la presión constante sobre los recursos naturales.

Tabla 2. Vocación y uso principal del suelo

Vocación	Uso principal	Área (ha)	Área (ha)
Agroforestal	Agrosilvícola con cultivos transitorios	1257,8465	1,28
	Agrosilvopastoril con cultivos transitorios	1312,4547	1,33
Cuerpo de agua	Cuerpo de agua	106,1148	0,11
Agrícola	Cultivos permanentes intensivos de clima medio	325,7828	0,33
	Cultivos transitorios intensivos de clima medio	2609,8246	2,65
	Cultivos permanentes semiintensivos de clima medio	732,8383	0,74
	Cultivos permanentes semiintensivos de clima frío	7,6443	0,01
	Cultivos transitorios semiintensivos de clima frío	118,0226	0,12
Forestal	Protección-producción	59 387,3463	60,29
	Forestal de protección	12 444,5461	12,63
Conservación de suelos	Conservación de recursos hidrobiológicos	19 924,3004	20,23
Zonas urbanas	Zonas urbanas	271,9446	0,28
Total		98 498,666	100

Fuente: elaboración propia a partir del DANE (2020) y el IGAC (2016)⁴⁰.

Para la vocación del suelo, se define un uso principal que permite profundizar y ampliar las perspectivas del desarrollo económico sostenible en relación con la capacidad

⁴⁰ Si bien estas cifras reflejan la importancia de conservar las áreas boscosas y los ecosistemas estratégicos, también evidencian el conflicto entre la conservación y la expansión agrícola. La ecología política, en este sentido, nos proporciona una lente crítica para analizar cómo los intereses económicos, tanto locales como globales, están reconfigurando el uso del suelo en detrimento de las formas de vida sostenibles. Como señala Tejedor Estupiñán (2023), la concentración de la tierra en manos de unos pocos propietarios ha exacerbado la degradación ambiental y ha restringido el acceso equitativo de las comunidades campesinas a la tierra, lo que contribuye a las desigualdades socioeconómicas. Asimismo, la expansión de la frontera agrícola ha generado una pérdida significativa de biodiversidad y ha aumentado la presión sobre los recursos hídricos, como se pone en evidencia en el 57 % del territorio que actualmente está ocupado por sistemas agrícolas intensivos (IDEAM, 2023). Esta transformación del paisaje no solo tiene consecuencias ecológicas, sino también sociales, ya que muchas comunidades locales se ven desplazadas o forzadas a adaptarse a modelos productivos que son insostenibles a largo plazo. Los sistemas agroforestales y agrosilvopastoriles, aunque poco desarrollados, representan una alternativa viable para la recuperación de áreas degradadas y la integración de prácticas sostenibles que protejan la biodiversidad al mismo tiempo que fomentan la productividad agrícola (Carvajal et al., 2022).

ecológica del territorio. A continuación, se describen las categorías que se incluyen en la tabla 2 según el IGAC (2016).

- *Agroforestal*: Es el uso adecuado para suelos en altas pendientes, con regímenes de lluvia escasos o muy abundantes, inundables, con baja fertilidad y afectados por diferentes grados de erosión. Estas características no permiten el desarrollo de la agricultura, la ganadería o los cultivos forestales de manera independiente; en cambio, se deben manejar sistemas integrados en los que las actividades agropecuarias se trabajen de manera conjunta con la siembra de árboles. Aunque en el área de estudio representan menos del 2,61 %, son sistemas que representan una opción en tierras con vocación de uso forestal, dado el avance de la frontera agrícola.

Además, se consideran una alternativa a los monocultivos, por cuanto combinan en una misma área especies maderables y agrícolas, de acuerdo con el sistema agropecuario, y ganado. El uso agrosilvícola con cultivos transitorios se refiere a tierras que soportan cultivos transitorios o de pancoger, con ciclos menores a doce meses y que requieren asociarse con especies maderables. El uso agrosilvopastoril con cultivos transitorios se refiere a tierras que soportan cultivos transitorios o de pancoger, con ciclos menores a doce meses y que se asocian con especies maderables y ganado.

- *Forestal*: Son tierras que deben permanecer con cobertura forestal al encontrarse ubicadas en áreas de ecosistemas estratégicos y zonas amortiguadoras de estos, donde se debe regularizar el uso de los bienes del bosque, ya sea para extracción de madera o de productos secundarios. Sin embargo, en Colombia, esta vocación históricamente se ha puesto en tensión por el avance de la frontera agrícola, un proceso que no puede reducirse a la simple ampliación productiva del suelo. Detrás de esa expansión se articulan formas de colonización interna, concentración de la propiedad, desplazamiento de comunidades indígenas y campesinas, violencia rural y presión de los mercados agrarios. Desde esta perspectiva, muchas áreas con vocación forestal han sido incorporadas progresivamente a usos agropecuarios que no siempre corresponden con su capacidad ecológica, reproduciendo conflictos entre conservación, poblamiento campesino y aprovechamiento económico del territorio (Fajardo Montaña, 2015). Esta vocación de uso del suelo representa el 72,92 % del área integrada por los tres municipios. Se destaca que el 60,29 % corresponde a uso forestal productor, lo cual indica un potencial importante para el desarrollo de sistemas agroforestales y silvopastoriles, más compatibles con la vocación ambiental del territorio y con la construcción de sistemas alimentarios sostenibles, especialmente si se consideran los cambios de cobertura que se analizan más adelante.

- *Agrícola*: Son tierras que, por sus características de formación, son altamente productivas, de modo que permiten el establecimiento de sistemas de producción agrícola intensivos y semiintensivos por encima de los 12 °C desde el nivel del mar y 3000 msnm. En el área, estos suelos representan el 4 %, de los cuales el 2,65 % corresponde al uso principal de cultivos transitorios intensivos de clima medio, ubicados en su mayoría en el municipio de Líbano.

La explotación del suelo en estas áreas no solo responde a las condiciones biofísicas del territorio, sino también a los imperativos del capital. Las actividades agroforestales y agrosilvopastoriles, aunque sostenibles en principio, son vulnerables a presiones externas que buscan maximizar la rentabilidad de la tierra a expensas de su capacidad regenerativa. Este fenómeno está vinculado con la lógica del extractivismo, que privilegia la producción para el mercado global sobre las necesidades locales de sostenibilidad (Moore, 2025).

La tierra como espacio de disputa

Desde una perspectiva epistemológica, el territorio no puede ser reducido a una mercancía o recurso productivo. En la ecología política decolonial, la tierra es entendida como un ente vivo, un espacio de relaciones entre humanos y no humanos⁴¹, donde se construyen y mantienen modos de vida que trascienden las lógicas capitalistas de extracción (Escobar, 2025). La expansión de la frontera agrícola y las políticas extractivistas han intentado imponer un único modelo de desarrollo, basado en la mercantilización de la naturaleza. Este enfoque ignora las formas tradicionales de uso del suelo que han sido desarrolladas por las comunidades campesinas en armonía con sus ecosistemas locales.

En este sentido, la tierra se convierte en un campo de disputa ontológica y material. Por un lado, el capital busca ordenar el territorio según sus necesidades de valorización; por el otro, las comunidades campesinas defienden formas de vida que privilegian la sostenibilidad, la soberanía alimentaria y el gobierno comunitario de los bienes comunes. Esta tensión puede abordarse desde Martínez Alier (2021), como parte de los conflictos ecológico-distributivos en los que las comunidades rurales defienden sus medios de vida frente a procesos de despojo ambiental. En el caso de Colombia, estas disputas se expresan en figuras como las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) y los Territorios Campesinos Agroalimentarios (TECAM), que no son simples instrumentos administrativos, sino formas de ordenamiento territorial campesino orientadas a la permanencia en el territorio, la agroecología, la soberanía alimentaria y la defensa de los bienes comunes (Barreto García, 2023; Rosero, 2025).

⁴¹ La visión de la tierra como ente vivo está profundamente arraigada en las cosmovisiones indígenas y campesinas de América Latina. Este enfoque rechaza la idea de la naturaleza como recurso inerte, proponiendo una relación más simétrica entre lo humano y lo no humano. Como señala Escobar (2025), esta perspectiva ontológica desafía las bases del capitalismo extractivista y ofrece alternativas para una convivencia más respetuosa con los ciclos naturales.

Coberturas del suelo

Según el IDEAM (2023), en los municipios de Líbano, Murillo y Villahermosa, las coberturas agrícolas ocupan 56 740,4923 hectáreas, que representan el 57,62 % del territorio. Esta cifra pone en evidencia la drástica transformación de los ecosistemas originales, como resultado de la expansión de la frontera agrícola y la implementación de monocultivos y sistemas de producción intensiva. Estas transformaciones no solo implican un cambio en el paisaje, sino que también reflejan la lógica del capital en su intento de subordinar la naturaleza a los intereses del mercado, despojando al territorio de su diversidad biológica y cultural.

En este contexto, es crucial plantear alternativas que sean coherentes con la vocación de uso del suelo, respetando las capacidades ecológicas del territorio y, a su vez, promoviendo sistemas alimentarios y productivos que mitiguen la degradación ambiental. Las prácticas agroecológicas y los sistemas agroforestales, más allá de ser opciones productivas, representan una forma de resistencia frente al modelo extractivista, ofreciendo soluciones que integran la conservación de los ecosistemas con la seguridad alimentaria y el bienestar de las comunidades locales.

A pesar de la significativa transformación de las coberturas naturales, es relevante destacar que el 41,74 % del territorio aún está cubierto por bosques y áreas seminaurales, como se muestra en la tabla 3. Muchas de estas áreas han sido preservadas gracias a iniciativas de las comunidades rurales, que han logrado establecer formas de coexistencia con la naturaleza. En muchos casos, estos esfuerzos de conservación se han dado en colaboración con instituciones estatales, lo que demuestra la capacidad de las comunidades para gestionar su territorio de manera sostenible, siempre y cuando se les permita participar activamente en la toma de decisiones. Estas áreas conservadas no solo son vitales para la biodiversidad y la regulación climática⁴², sino que también representan espacios de autonomía y resistencia ante las presiones externas que buscan homogeneizar el territorio bajo una lógica productiva orientada exclusivamente al mercado global.

⁴² La conservación de bosques y ecosistemas estratégicos desempeña un papel crucial en la mitigación del cambio climático. Según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, 2021), los ecosistemas forestales son esenciales para capturar carbono y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero; la deforestación y el cambio en el uso del suelo, como ocurre en el Tolima, no solo afectan la biodiversidad, sino que también aumentan la vulnerabilidad climática de las comunidades rurales.

Tabla 3. Coberturas naturales nivel 1

Cobertura	Área (ha)	Área (%)
Territorios artificializados	290,2392	0,29
Territorios agrícolas	56 740,4923	57,62
Bosques y áreas seminaturales	41 098,9267	41,74
Áreas húmedas	95,6347	0,10
Superficies de agua	241,9913	0,25
Total	98 467,2843	100

Fuente: elaboración propia a partir del DANE (2020) y el IDEAM (2023).

En la figura 1, se presenta la distribución porcentual de las coberturas naturales nivel 1.

Figura 1. Coberturas naturales nivel 1



Fuente: elaboración propia a partir del DANE (2020) y el IDEAM (2023).

En la tabla 4, se presentan de manera más detallada las coberturas naturales. Los pastos limpios representan el 18,63 % del área total, lo que evidencia la transición que se ha dado en la zona hacia sistemas de ganadería, reemplazando los cultivos predominantes como respuesta ante la crisis económica y la falta de incentivos agrícolas. Los cultivos permanentes arbustivos —como el café, el cacao y el tomate de árbol— representan el 10,94 % del área total. Los mosaicos de pastos y cultivos representan el 10,12 % del área total, con una tendencia a combinar sistemas agrícolas y pecuarios en arreglos agroforestales o silvopastoriles, es decir, en conjunto con especies maderables que proporcionan otro tipo de beneficios ya sea para los cultivos o el ganado, como sombra, alimento y microclimas, entre otros.

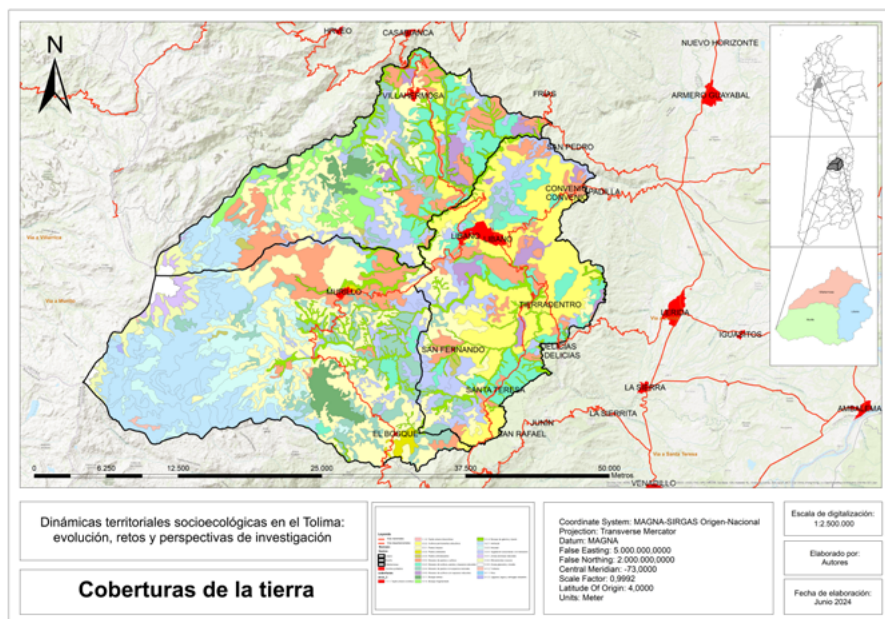
Tabla 4. Coberturas naturales nivel 3

Cobertura	Área (ha)	Área (%)
Tejido urbano continuo	243,9138	0,25
Tejido urbano discontinuo	46,3254	0,05
Cultivos permanentes arbustivos	10 772,5992	10,94
Pastos limpios	18 349,3189	18,63
Pastos arbolados	397,4411	0,40
Pastos enmalezados	487,4623	0,49
Mosaico de pastos y cultivos	9964,9552	10,12
Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales	7473,2190	7,59
Mosaico de pastos con espacios naturales	7432,9565	7,55
Mosaico de cultivos con espacios naturales	1862,5402	1,89
Bosque denso	2052,7204	2,08
Bosque fragmentado	2633,8784	2,67
Bosque de galería y ripario	7231,8493	7,34
Herbazal	12 239,2231	12,43
Arbustal	5702,2374	5,79
Vegetación secundaria o en transición	8335,1509	8,46
Zonas arenosas naturales	659,1033	0,67
Afloramientos rocosos	1652,2988	1,68
Zonas glaciares y nivales	592,4652	0,60
Turberas	95,6347	0,10
Ríos	241,9913	0,25
Lagunas, lagos y ciénagas naturales	31,3817	0,03
Total	98 498,6661	100

Fuente: elaboración propia a partir del DANE (2020) y el IDEAM (2023).

En el mapa 3, se puede visualizar de manera más detallada la información anterior.

Mapa 3. Coberturas naturales nivel 3



Fuente: elaboración propia a partir del DANE (2020) y el IDEAM (2023).

El predominio de las coberturas agrícolas en detrimento de los bosques y las áreas seminaturales refleja un proceso histórico de despojo y transformación del territorio, en el que los intereses del capital agroindustrial han desplazado a formas tradicionales de uso del suelo. Esta dinámica de apropiación territorial es un claro ejemplo de la relación entre capital y naturaleza, en la que los ecosistemas se convierten en un recurso explotable dentro de las cadenas globales de producción (Foster, 2020; Foster y Suwandi, 2020).

La configuración espacial documentada en las tablas y los mapas anteriores no constituye un fenómeno neutro; por el contrario, revela la materialización territorial de la acumulación por desposesión. La concentración del 57,62 % del territorio en coberturas agrícolas (tabla 3) en contraste con una vocación forestal superior al 70 % demuestra cómo la intensificación agroindustrial ha fragmentado los corredores biológicos y ha alterado la regulación hídrica de la región. Este patrón de parcelación discontinua y expansión de monocultivos responde directamente a la financiarización del suelo: el incremento en los avalúos catastrales y la especulación inmobiliaria rural han incentivado la transformación de tierras con vocación forestal en activos productivos de corto plazo, lo que ha desplazado la lógica de reproducción campesina hacia la maximización de rentabilidad financiera.

La fragmentación espacial observada en los mapas de coberturas y vocación de uso del suelo opera como un mecanismo de despojo indirecto. Al erosionar la contigüidad

ecológica y aumentar la presión sobre los recursos hídricos, se debilita la base material que sustenta la agricultura familiar, lo que obliga a los pequeños productores a recurrir al crédito para mantener niveles de producción insostenibles. Por tanto, esta dinámica espacial no es un subproducto del desarrollo técnico, sino una condición estructural que facilita la subordinación financiera del campesinado y la consolidación de territorios controlados por lógicas extractivistas.

Oferta ambiental

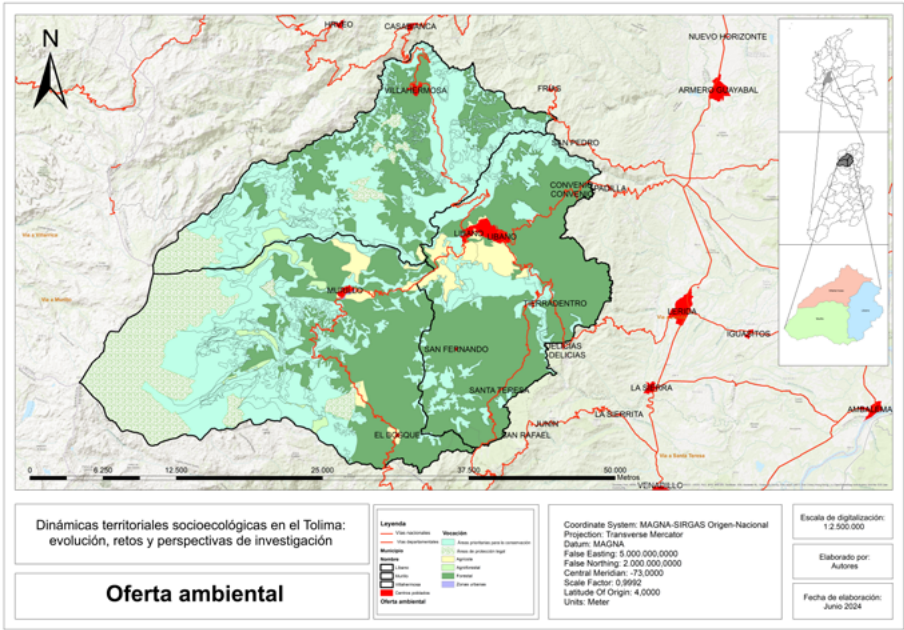
La oferta ambiental de la región estudiada es amplia y refleja un importante potencial para actividades productivas que, según el IGAC (2016), se organizan en áreas agrícolas y agroforestales, con un enfoque en la vocación del uso del suelo. Sin embargo, este recurso natural no es simplemente un espacio para la producción económica, sino que representa un campo de disputa donde interactúan las fuerzas del capital y las resistencias campesinas. Como sostiene Escobar (2014), los territorios no son espacios vacíos, sino el resultado de múltiples interacciones socioecológicas que implican relaciones de poder.

En este sentido, la clasificación de áreas como las ZRC y los TECAM surge no solo como una estrategia de ordenamiento territorial, sino también como una respuesta a las lógicas del extractivismo que buscan maximizar la rentabilidad a expensas de la soberanía alimentaria y la sostenibilidad ecológica. La agroecología, entendida aquí como un proceso de resistencia, promueve un tipo de producción que desafía las dinámicas del capital (Martínez Alier, 2021).

En el mapa 4, el color verde indica las áreas destinadas a la producción, las cuales representan el 45,62 % del total del territorio. El municipio de Líbano, seguido de Murillo y Villahermosa, es el que concentra la mayor oferta ambiental para actividades productivas.

La fragmentación espacial observada en los mapas de coberturas y vocación de uso del suelo opera como un mecanismo de despojo indirecto. Al erosionar la contigüidad ecológica y aumentar la presión sobre los recursos hídricos, se debilita la base material que sustenta la agricultura familiar, lo que obliga a los pequeños productores a recurrir al crédito para mantener niveles de producción insostenibles.

Mapa 4. Oferta ambiental



Fuente: elaboración propia a partir del DANE (2020) y el IGAC (2016).

Como se muestra en la tabla 5, esta distribución territorial es significativa, por cuanto revela cómo se articula la oferta ambiental con las políticas de uso del suelo y el capital agrícola.

Tabla 5. Oferta ambiental

Oferta ambiental	Área (ha)	Área (%)
Áreas de protección legal	12 036,9075	12,22
Áreas para producción	44 935,1372	45,62
Áreas prioritarias para la conservación	41 254,9660	41,88
Zonas urbanas	271,6553	0,28
Total	98 498,6661	100

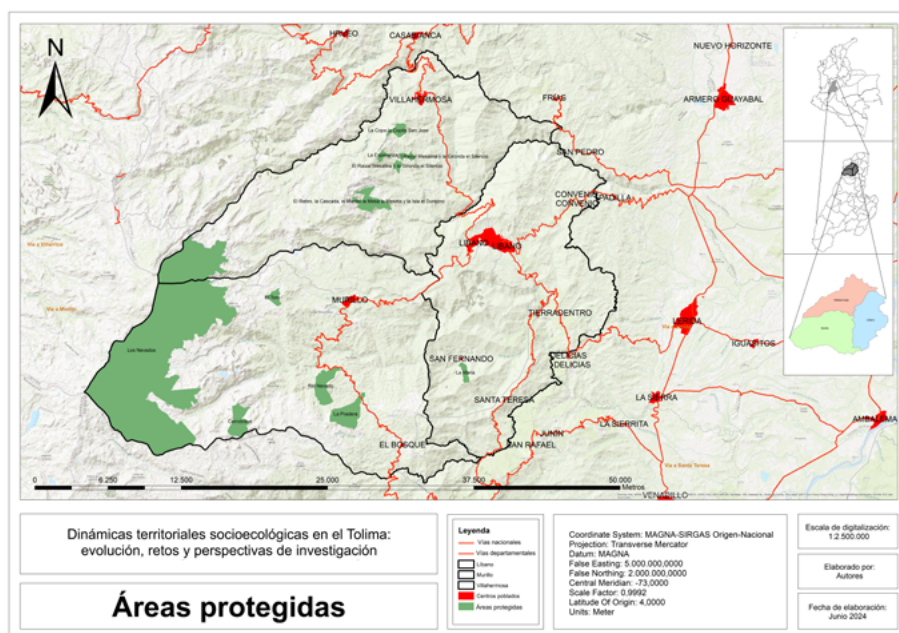
Fuente: elaboración propia a partir del DANE (2020) y el IGAC (2016).

Áreas protegidas

En Colombia, las áreas protegidas de carácter nacional, departamental y municipal responden a la necesidad de preservar territorios con alta importancia ecológica. Como señala Escobar (2014), las áreas protegidas no solo son espacios para la conservación, sino también escenarios de resistencia contra las fuerzas extractivistas que causan la degradación ambiental. Precisamente, los municipios de Villahermosa y Murillo forman parte del Parque Nacional Natural Los Nevados, un área clave para la protección de ecosistemas de páramo en las inmediaciones de los nevados del Ruiz, Santa Isabel, El Cisne, Santa Rosa y Quindío.

Estas áreas protegidas, lejos de ser únicamente reservas estáticas, desempeñan un papel activo en la contención de transformaciones antropogénicas y en la resiliencia ante el cambio climático. En este sentido, las políticas de conservación deben entenderse dentro de una lógica de “territorios en disputa” (Escobar, 2014, 2025), donde las comunidades locales, al interactuar con estos espacios, se enfrentan a las presiones del capital que intenta capturar sus recursos.

Mapa 5. Áreas protegidas



Fuente: elaboración propia a partir del DANE (2020) y CORTOLIMA (2023).

En la tabla 6, se presentan de manera más detallada estas áreas protegidas junto con los municipios y las veredas donde están ubicadas, y su área en hectáreas.

Tabla 6. Áreas protegidas

Área protegida	Municipio	Vereda	Área (ha)
La Pradera	Murillo	Canaán	454,8818
Cerrobravo	Murillo	Las Lagunas	335,1148
El Toro	Murillo	Santa Bárbara	106,3495
La María	Líbano	San Fernando	83,4771
Parque Nacional Natural Los Nevados	Ibagué, Anzoátegui, Santa Isabel, Murillo, Villahermosa, Casabianca y Herveo	15 veredas distribuidas en 7 municipios	10 449,0184
Río Nevado	Murillo	La Esperanza	371,7171
La Esperanza	Villahermosa	El Raizal	53,6974
El Retiro	Villahermosa	Mina Pobre y El Rodeo	333,3180
La Copa, La Copita y San José	Villahermosa	La Lorena y El Raizal	119,4790
El Raizal Mesalina y la Gironda el Silencio	Villahermosa	El Raizal y La Flor	111,3037
Total			12 418,3568

Fuente: elaboración propia a partir del DANE (2020) y CORTOLIMA (2023).

Estas descripciones de tipo biofísico y ambiental permiten comprender parte de la riqueza natural de la zona y las transformaciones realizadas por la implementación de los sistemas agropecuarios, así como la demanda de tierras, el avance de la frontera agrícola y la permanencia de sistemas de agricultura familiar.

El análisis de las áreas protegidas evidencia un vínculo directo entre la conservación y la resistencia territorial. Al involucrarse en estos procesos, los territorios campesinos promueven un modelo de desarrollo alternativo, basado en la soberanía alimentaria y la protección de los bienes comunes (Bollier, 2014). A su vez, estas áreas protegidas forman parte de una estrategia más amplia para contrarrestar la expansión de la frontera agrícola que, como se mencionó, afecta negativamente a los ecosistemas y a las formas de vida campesinas.

En este sentido, las áreas de producción agrícola y agroforestal, aunque son indispensables para el desarrollo económico local, deben ser comprendidas dentro de un marco más amplio que reconozca cómo el capital utiliza estas tierras para maximizar sus beneficios, a menudo en detrimento de las comunidades campesinas y los ecosistemas. Los Territorios Campesinos Agroalimentarios propuestos como zonas de reserva representan una resistencia a esta dinámica extractivista, ofreciendo alternativas basadas en la soberanía alimentaria y la autogestión (Martínez Alier, 2021).

La revisión teórica y empírica desarrollada en este capítulo permite articular una contribución original frente a los marcos de la ecología política y la geografía crítica. Lejos de limitarse a describir la transformación paisajística, este análisis demuestra que la reconfiguración territorial en el norte del Tolima opera como un mecanismo de extracción de plusvalía espacial y de desarticulación metabólica. La divergencia cuantificada entre la vocación natural del suelo (predominantemente forestal y de conservación) y el uso efectivo (mayoritariamente agrícola y ganadero) constituye la huella material de la financiarización rural. Esta brecha no es accidental, sino que es el resultado de una racionalidad productiva que prioriza la rentabilidad inmediata sobre la regeneración ecosistémica, transformando al campesino en gestor de una deuda ecológica y financiera acumulada.

El aporte de los autores radica en hacer evidente que la resistencia territorial no se manifiesta únicamente en la defensa física de la tierra, sino en la construcción de contraespacios que restablecen el metabolismo social alterado. En este marco, las ZRC y los TECAM no son figuras jurídicas residuales, sino laboratorios de soberanía material que desafían la homogeneización del capital. Al vincular los patrones geoespaciales de fragmentación con los ciclos de endeudamiento y la pérdida de autonomía productiva, se establece un puente analítico que permite comprender la crisis socioambiental no como un fallo técnico, sino como una contradicción estructural del modo de producción capitalista aplicado al territorio rural.

Proyecciones para la planificación rural, el ordenamiento territorial y las estrategias institucionales

La evidencia territorial y socioeconómica analizada exige una reorientación normativa hacia instrumentos de planificación rural que superen el enfoque meramente productivista. Se requiere fortalecer el ordenamiento territorial con enfoque de cuenca y corredor biocultural, integrando la vocación real del suelo como límite infranqueable para la expansión agroindustrial. Las ZRC y los TECAM deben consolidarse como figuras de gestión del riesgo climático, priorizando la restauración de cabeceras hídricas, la implementación de sistemas agroforestales resilientes y la creación de fondos compensatorios por servicios ecosistémicos.

A nivel institucional, se recomienda: (a) articular los planes de desarrollo municipal con diagnósticos biofísicos actualizados del IGAC y el IDEAM, evitando la autorización de usos incompatibles con la capacidad de carga; (b) diseñar esquemas de financiamiento no extractivo para los TECAM, basados en créditos verdes con tasas diferenciadas y períodos de gracia acordes a los ciclos agroecológicos; (c) implementar sistemas de

alerta temprana comunitaria para gestión del riesgo por deslizamientos e inundaciones, vinculando la protección de coberturas boscosas con la seguridad de los asentamientos rurales, y (d) fortalecer la gobernanza participativa mediante mesas técnicas de ordenamiento territorial, en las que las organizaciones campesinas tengan capacidad decisoria sobre la destinación de usos del suelo y la priorización de inversiones públicas. Solo mediante esta articulación entre conocimiento territorial, política pública y autonomía campesina será posible transformar la planificación rural en un instrumento de emancipación socioecológica.

Conclusiones

La tierra en disputa: tensiones entre capital y comunidades en el territorio andino

El estudio del territorio en los municipios de Líbano, Murillo y Villahermosa expone las tensiones entre las dinámicas del capitalismo global y las prácticas territoriales de las comunidades campesinas. Desde la perspectiva de la ecología política, se observa cómo la expansión de la frontera agrícola y la mercantilización de los recursos naturales han transformado profundamente el paisaje y la vida comunitaria. Este análisis revela la complejidad de la lucha entre las fuerzas del capital y las prácticas de resistencia campesina que buscan defender la tierra y su vocación comunitaria.

Modalidades de resistencia: Territorios Campesinos Agroalimentarios y Zonas de Reserva Campesina

En el contexto de las tensiones territoriales y las presiones del capitalismo extractivista, los Territorios Campesinos Agroalimentarios (TECAM) han surgido como una de las respuestas más significativas de las comunidades campesinas para proteger sus tierras y sus modos de vida. A diferencia de otras formas de resistencia, los TECAM no se limitan a la conservación ambiental, sino que integran una visión amplia que incluye la soberanía alimentaria, la autogestión territorial y la agroecología, ofreciendo un modelo alternativo al desarrollo capitalista.

- **Territorios Campesinos Agroalimentarios: defensa de la tierra y soberanía alimentaria**

Los TECAM representan una propuesta innovadora de resistencia territorial, que va más allá de la protección de los ecosistemas y se centra en la construcción de sistemas agroalimentarios sostenibles. Estos territorios se organizan en torno a la idea de que las comunidades campesinas deben tener el control sobre sus tierras, sus recursos

naturales y su producción alimentaria. En lugar de depender de los mercados globales y las políticas extractivistas, los TECAM promueven una agricultura sustentable que respeta los ciclos ecológicos y fortalece las economías locales.

Uno de los aspectos más importantes de los TECAM es su enfoque en la agroecología como una estrategia central para regenerar los suelos, conservar la biodiversidad y asegurar la autosuficiencia alimentaria de las comunidades. En lugar de implementar monocultivos que agotan los recursos naturales y crean dependencia del mercado global, los TECAM proponen un modelo de policultivo y agrosilvicultura, en el que las comunidades gestionan sus tierras de manera sostenible y autónoma (Martínez Alier, 2021)⁴³. Este enfoque no solo es más respetuoso con el medio ambiente, sino que también fortalece la resiliencia de las comunidades campesinas frente a las crisis alimentarias y ecológicas.

Además, los TECAM están profundamente vinculados a la defensa de la soberanía alimentaria, entendida como el derecho de las comunidades a definir sus propias políticas agrícolas y alimentarias. Este concepto desafía directamente el modelo neoliberal de producción masiva de alimentos para la exportación y promueve la producción local como una forma de garantizar la seguridad alimentaria y el bienestar de las comunidades. Como señala Escobar (2025), los TECAM son una manifestación de la resistencia campesina a las lógicas extractivistas, ya que proponen un modelo de desarrollo que pone en el centro a las comunidades y su relación con la tierra.

La creación y el fortalecimiento de los TECAM también ha permitido la construcción de redes agroalimentarias que conectan a los campesinos con mercados locales y regionales, promoviendo la venta directa de productos agroecológicos. Esto reduce la dependencia de las grandes cadenas de distribución y permite que las comunidades campesinas recuperen el control sobre su producción y comercialización, al tiempo que preservan sus prácticas agrícolas tradicionales.

- **Zonas de Reserva Campesina: complemento para la conservación y autonomía territorial**

Aunque los Territorios Campesinos Agroalimentarios se han consolidado como la principal estrategia de resistencia en esta región, las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) también desempeñan un papel importante en la defensa del territorio. Sin embargo, su función es más limitada en términos de alcance, pues se enfocan en la conservación de áreas específicas y la protección frente al despojo territorial. Las ZRC se han establecido como áreas legalmente reconocidas por el Estado colombiano, donde las

⁴³ La agroecología, como enfoque sistémico, no solo busca aumentar la productividad en áreas rurales, sino que también propone una regeneración de las relaciones ecológicas mediante el policultivo y el agrosilvopastoreo. Estos modelos desafían la lógica de los monocultivos impuesta por el mercado global, generando resiliencia frente a los cambios climáticos y promoviendo la biodiversidad (Martínez Alier, 2021). La agroecología también se vincula intrínsecamente con la soberanía alimentaria, un concepto que pone énfasis el derecho de los pueblos a definir sus políticas agrarias y alimentarias.

comunidades campesinas pueden ejercer un mayor control sobre el uso de la tierra y los recursos naturales.

Si bien las ZRC tienen una orientación más conservacionista, también están alineadas con los principios de la autogestión territorial y la defensa de la soberanía alimentaria. En muchos casos, las ZRC han sido creadas como respuesta a las políticas de expansión de la frontera agrícola y la presión de las agroindustrias, lo que les permite a las comunidades campesinas organizarse para defender sus tierras frente a la mercantilización y el despojo (Escobar, 2014). No obstante, las ZRC, aunque son efectivas en la protección de territorios específicos, no alcanzan la integralidad de los TECAM en términos de agroecología y desarrollo comunitario a largo plazo.

El papel secundario de las ZRC en comparación con los TECAM se debe a su enfoque en la conservación legal del territorio, lo cual es crucial, pero no abarca todas las dimensiones del desarrollo territorial que las comunidades campesinas requieren. En cambio, los TECAM integran aspectos más amplios, como la producción de alimentos, la regeneración ecológica y la construcción de economías solidarias.

El territorio como espacio de coexistencia y resistencia

Desde una perspectiva cultural-ambiental, el territorio es más que un recurso económico: es un espacio donde las comunidades campesinas han construido relaciones de convivencia con la naturaleza a lo largo de generaciones. Estas relaciones no son meramente instrumentales, sino que están basadas en una profunda comprensión de la interdependencia entre los seres humanos y los ecosistemas. Como argumenta Escobar (2014), la naturaleza no debe ser vista como una entidad separada de la sociedad, sino como parte de un entramado de relaciones que configuran los modos de vida campesinos.

• Ecología política y ontologías del territorio

La ecología política nos permite entender cómo las políticas extractivistas que promueven la explotación intensiva de los recursos naturales han transformado profundamente las relaciones entre las comunidades campesinas y la tierra. Este enfoque revela las tensiones entre el capitalismo global y las formas locales de vida, las cuales se han mantenido por medio de la agroecología y la soberanía alimentaria. En este sentido, la tierra no es un espacio vacío que pueda ser explotado sin consecuencias, sino un ente vivo, donde se tejen relaciones de reciprocidad entre humanos y no humanos.

En los municipios de Líbano, Murillo y Villahermosa, las comunidades campesinas han desarrollado formas de resistencia que desafían la lógica del capitalismo extractivista. Estas resistencias están basadas en una ontología que reconoce la coexistencia entre humanos y no humanos, y que rechaza la visión mercantilista de la tierra como un recurso explotable. Por medio de la agroecología, las comunidades buscan restaurar

las relaciones con sus territorios, protegiendo la biodiversidad y construyendo sistemas alimentarios más resilientes.

- **Luchas por la autonomía territorial**

La lucha por la autonomía territorial es central en las resistencias campesinas frente al extractivismo. La creación de las ZRC y los TECAM representa una estrategia para proteger los territorios de la mercantilización y la expansión de la frontera agrícola. Estas iniciativas no solo buscan preservar los ecosistemas locales, sino también garantizar que las comunidades campesinas puedan seguir viviendo en sus territorios y manteniendo sus formas de vida.

En este contexto, la lucha por la tierra es también una lucha por el derecho a existir como comunidad, en un entorno que respete las interrelaciones entre lo humano y lo no humano. Las políticas extractivistas, al imponer una lógica de explotación, despojan a las comunidades de su capacidad para gestionar sus propios territorios. En cambio, las resistencias campesinas se basan en una visión del territorio como un espacio de coexistencia, donde los intereses de las comunidades y los ecosistemas están en el centro de la toma de decisiones.



Capítulo 4.

Transformaciones agrarias y desafíos territoriales en el norte del Tolima: acumulación de tierras, avalúos catastrales y resistencia campesina

El avance de la frontera agrícola en los municipios de Líbano, Murillo y Villahermosa, en el departamento del Tolima, pone en evidencia un proceso histórico que puede entenderse desde una lectura marxista de la acumulación capitalista y la transformación de la naturaleza en mercancía. Este fenómeno, en el que la tierra se convierte en un objeto de explotación para la producción agroindustrial, revela las profundas contradicciones entre las lógicas del capital y las necesidades de las comunidades locales. La expansión de los monocultivos y la apropiación de grandes extensiones de tierra por actores con mayor poder económico son manifestaciones claras de lo que Marx definió como el proceso de acumulación por desposesión, en el que los campesinos — como clase explotada— son desplazados y sus territorios, subordinados a las exigencias del capital. El proceso de acumulación por desposesión descrito por David Harvey (2004) ha sido crucial para entender cómo las lógicas capitalistas operan en la expansión agrícola, concentrando tierras en manos de pocos.

Sin embargo, la resistencia organizada por las comunidades campesinas frente a este avance agroindustrial nos ofrece una ventana a un modelo alternativo de desarrollo territorial. Iniciativas como las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) y los Territorios Campesinos Agroalimentarios (TECAM) no solo representan una respuesta al despojo capitalista, sino que configuran un replanteamiento radical de la relación entre la tierra y quienes la habitan. En estas luchas, la tierra deja de ser vista únicamente como un recurso explotable y se convierte en un espacio vital para la reproducción de la vida social, cultural y ecológica. En este punto, la crítica marxista al capitalismo se entrelaza con la ecología política al sostener que la sostenibilidad y la justicia ambiental no pueden separarse de la lucha por la redistribución y la justicia social (Robbins, 2019).

El análisis de los municipios de Líbano, Murillo y Villahermosa, objeto de esta caracterización, nos permite profundizar en las distintas formas en que las comunidades campesinas intentan frenar la expansión de la frontera agrícola y promover una reconversión hacia sistemas agroecológicos. En Líbano, con un 83,80 % del área total dedicada a la frontera agrícola, la presión del agroindustrialismo es evidente; mientras que, en Murillo y Villahermosa, donde la protección ambiental es más fuerte, las oportunidades para una revalorización de la tierra desde perspectivas más sostenibles se vuelven más viables. Estos territorios se configuran como espacios de resistencia donde la tierra y su uso se politizan, desafiando las lógicas extractivistas y proponiendo alternativas territoriales⁴⁴ basadas en el respeto por los ecosistemas y las formas de vida campesina.

⁴⁴ En las comunidades campesinas, la tierra no es solo un recurso económico, sino que posee un valor simbólico y cultural, siendo la base de la identidad y la autonomía territorial (Gudynas, 2011).

Delimitación metodológica y procedimientos analíticos

Para garantizar la transparencia epistemológica, la validez interna y la replicabilidad analítica de los hallazgos, este capítulo se sustenta en un diseño cualitativo-crítico de orientación socioecológica, enmarcado en los postulados de la geografía agraria crítica y la ecología política territorial (Creswell y Poth, 2018; Flick, 2018; Robbins, 2019). El estudio se configura como una investigación instrumental de tipo descriptivo-explicativo con proyección analítica, concebida para articular categorías teóricas estructurales (acumulación por desposesión, financiarización del suelo, fragmentación predial y resistencia territorial) con evidencia empírica cuantitativa y cartográfica verificable (Clapp e Isakson, 2018; Fairbairn, 2014; Harvey, 2004; Peluso y Lund, 2011).

La recolección de información se operativiza mediante tres técnicas articuladas: (a) sistematización crítica y triangulación cruzada de bases institucionales oficiales (DANE, UPRA, IGAC y Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital), aplicando protocolos de control de calidad para mitigar sesgos de fuente y garantizar la trazabilidad de los datos espaciales; (b) procesamiento geoespacial comparativo mediante *software* de información geográfica (QGIS 3.28), siguiendo estándares de validación topológica, superposición multicapa y cálculo de índices de fragmentación para cartografiar tamaño predial, avance de la frontera agrícola, avalúos catastrales y dinámica del mercado de tierras, y (c) revisión documental crítica de instrumentos de planificación rural y política agraria municipal, sometida a un análisis de contenido categorial para identificar tensiones entre el discurso institucional y las prácticas territoriales reales.

La selección del área de estudio (municipios de Líbano, Murillo y Villahermosa) se fundamenta en tres criterios validados en la literatura agraria comparada: (a) representatividad ecosistémica y productiva del norte del Tolima como zona de transición andina con alta presión de revalorización catastral y expansión de monocultivos; (b) presencia documentada de conflictos por tenencia de tierra, concentración predial y subordinación crediticia, fenómenos clave para examinar la mercantilización del territorio (Borras y Franco, 2012; Kay, 1989), y (c) configuración activa de dispositivos de gobernanza colectiva (ZRC y TECAM) que operan como laboratorios empíricos de resistencia ontológica y reterritorialización campesina (Escobar, 2014; Machado, 2017).

Los procedimientos analíticos siguen una ruta dialéctica estructurada en tres fases secuenciales. En la primera fase, se cuantifica la distribución predial y se calcula la brecha entre la vocación biofísica del suelo y su uso efectivo, aplicando matrices de transición que evidencian los desajustes metabólicos del territorio (Moore, 2025). En la segunda fase, se realiza un cruce multivariable entre los avalúos catastrales, los indicadores de endeudamiento rural y el acceso a crédito institucional, revelando los

mecanismos de extracción de plusvalía espacial y la presión fiscal sobre el minifundio (Clapp e Isakson, 2018; Fairbairn, 2014). En la tercera fase, se interpretan los patrones geoespaciales resultantes como expresión histórica de la subordinación financiera del campesinado, articulando la cartografía temática con la teoría crítica de la acumulación por desposesión y con los debates recientes sobre régimen agroalimentario, transferencia del control de la tierra y reconfiguración de las fronteras agrícolas de mercancías (Clapp e Isakson, 2018; Del Giorgio, 2024; Fairbairn, 2014; Jakobsen, 2021). Esta delimitación metodológica garantiza que los hallazgos no se reduzcan a una descripción estadística coyuntural, sino que se anclen en un proceso analítico verificable, replicable y rigurosamente fundamentado en la tradición de la investigación crítico-territorial latinoamericana (Del Giorgio, 2024; Zoomers, 2010).

La lucha por la tierra en el Tolima: frontera agrícola, acumulación y resistencias campesinas

El proceso de expansión de la frontera agrícola en los municipios de Líbano, Murillo y Villahermosa refleja claramente las dinámicas de acumulación capitalista en las zonas rurales. Según el *3er Censo Nacional Agropecuario* (DANE, 2016), el 38,6 % del territorio colombiano está destinado al uso agropecuario, con profundas disparidades regionales en términos de acceso y control de la tierra. En el Tolima, el patrón de concentración de tierras en extensiones para monocultivos es evidente, especialmente en Líbano, donde el 83,80 % del área total está dedicada a la agricultura (DANE, 2020). La concentración de tierras en Colombia sigue un patrón claro, con el 1 % de las unidades agrícolas controlando más del 81 % del área rural (Oxfam, 2017).

La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNC) desempeña un papel similar al de una gran agroindustria en el norte del Tolima, particularmente en los municipios de Líbano, Murillo y Villahermosa. Aunque la FNC se presenta como una organización gremial que apoya a los productores de café, su influencia en la promoción del monocultivo ha llevado a una concentración de tierras y una dependencia económica. Esta dinámica reproduce las características de la agroindustria, favoreciendo la producción masiva y limitando las alternativas agrícolas sostenibles para los pequeños productores.

El impacto de esta concentración de tierras no es solo económico, sino también ecológico. La expansión de monocultivos en zonas como Líbano y Murillo ha generado una sobreexplotación de los recursos hídricos, que son fundamentales para los pequeños agricultores. El *3er Censo Nacional Agropecuario* (DANE, 2016) revela que, aunque el 93 % de las Unidades de Producción Agropecuaria (UPA) en estas zonas tiene acceso

al agua, el manejo de este recurso está fuertemente influenciado por la FNC, lo que limita la disponibilidad para los pequeños productores.

Frente a este panorama, las iniciativas campesinas organizadas, como las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) y los Territorios Campesinos Agroalimentarios (TECAM), lideradas por el Coordinador Nacional Agrario (CNA), ofrecen una alternativa para contrarrestar el despojo y recuperar el control sobre la tierra. Estas iniciativas promueven un modelo de producción agroecológico que desafía la lógica extractivista y busca restaurar la soberanía alimentaria y la gestión sostenible de los recursos naturales (Decreto 0780 de 2024).

Cabe mencionar que el conflicto por la tierra no es exclusivo del Tolima, sino un problema estructural que afecta a gran parte del país. En Colombia, el 0,4 % de las unidades productivas concentra el 38,6 % del total de la tierra apta para la agricultura. En este contexto, las luchas campesinas por la equidad territorial siguen siendo una cuestión central para el desarrollo rural y la justicia social (DANE, 2020).

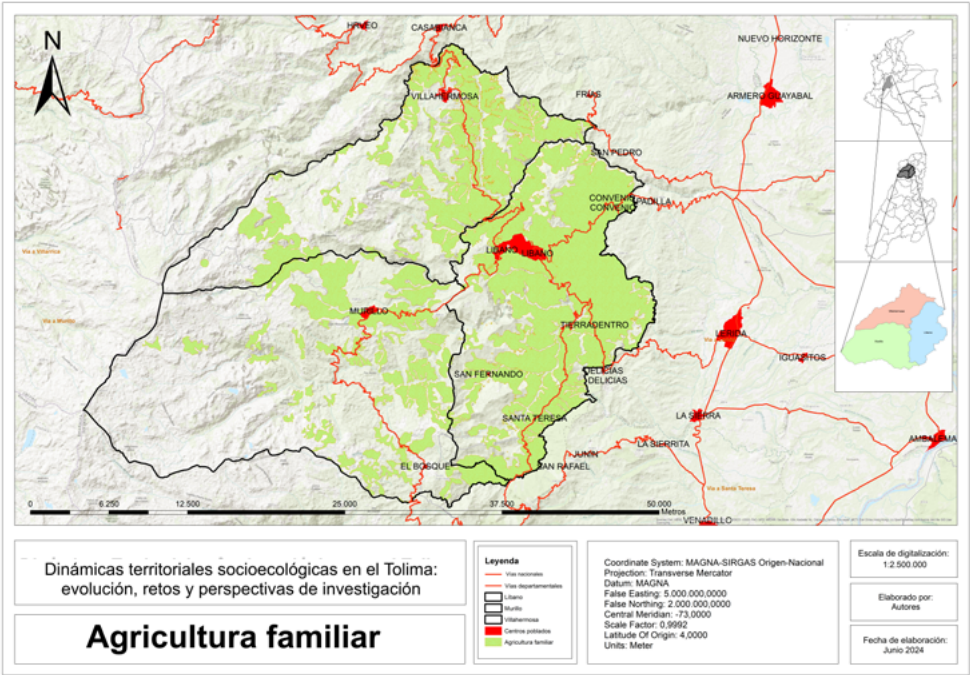
Agricultura familiar y sistemas territoriales en el norte del Tolima

Agricultura familiar y el rol del campesinado en el uso sostenible del territorio

En los municipios de Líbano, Murillo y Villahermosa, la agricultura familiar ha sido una estrategia de resistencia frente a la expansión de la frontera agrícola. Según datos del DANE (2020) y la UPRA (2023), el 67,75 % del área total de Líbano está dedicada a la agricultura familiar; mientras que, en Villahermosa y Murillo, los valores son del 37,26 % y el 20,21 %, respectivamente (mapa 6).



Mapa 6. Agricultura familiar



Fuente: elaboración propia a partir del DANE (2020) y la UPRA (2023).

Los datos de la agricultura familiar son fundamentales para visibilizar cómo este territorio conserva su carácter campesino frente a las transformaciones derivadas de la agroindustria. Por tanto, estos se convierten en un elemento clave para posicionar las ZRC y los TECAM. En la tabla 7, se observa que la agricultura familiar a nivel municipal está representada principalmente en Líbano con un 67,75 %, seguido de Villahermosa con un 37,26 % y, finalmente, Murillo con un 20,21 %.

Tabla 7. Agricultura familiar

Municipio	Área con agricultura familiar (ha)	Área total del municipio (ha)	Porcentaje de agricultura familiar (%)
Líbano	19 119,7659	28 220,0244	67,75
Murillo	8561,7132	42 372,1513	20,21
Villahermosa	10 396,9520	27 906,4902	37,26
Total	38 078,4311	98 498,6659	38,66

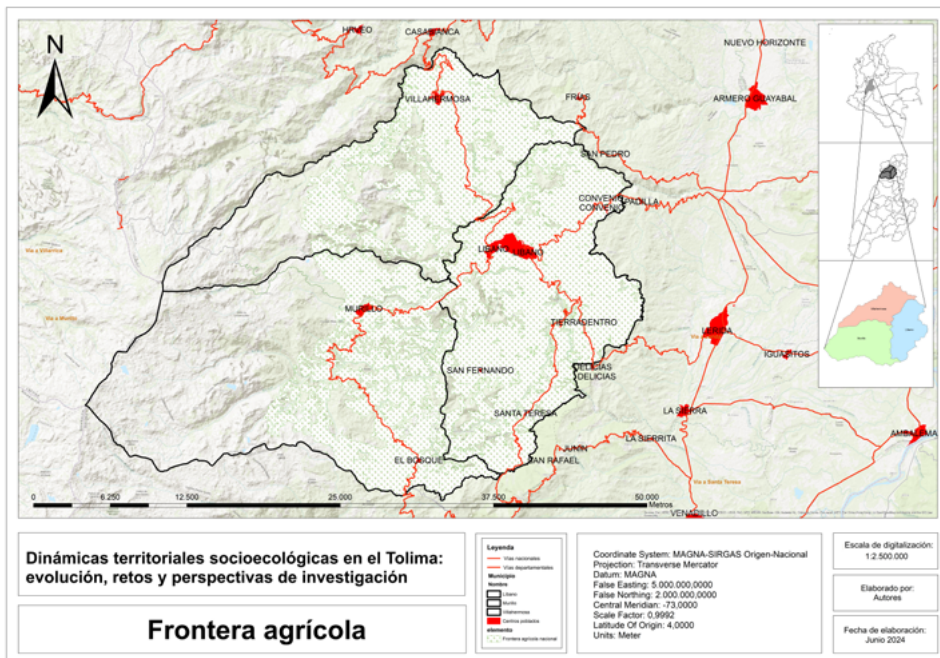
Fuente: elaboración propia a partir del DANE (2020) y la UPRA (2023).

Aunque la agricultura familiar es clave para la sostenibilidad y la preservación de la biodiversidad en el norte del Tolima, enfrenta desafíos significativos debido a la fragmentación de la tierra y la falta de acceso a tecnologías modernas. Los datos del DANE y la UPRA revelan que, si bien la agricultura familiar tiene una extensa cobertura, es necesario promover políticas que faciliten la integración de estos pequeños productores en cadenas de valor más amplias, asegurando su sostenibilidad económica sin sacrificar su impacto ambiental positivo. De hecho, los sistemas agroalimentarios sostenibles resultan cruciales para la seguridad alimentaria y el mantenimiento de la biodiversidad en zonas rurales como el norte del Tolima (Ewert et al., 2023; Pretty et al., 2018).

Distribución territorial y zonificación en las Zonas de Reserva Campesina

Las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) y los Territorios Campesinos Agroalimentarios (TECAM) en dichos municipios han sido herramientas fundamentales para mitigar el avance de la frontera agrícola. En el mapa 7, se muestra el avance de la frontera agrícola en los municipios analizados.

Mapa 7. Frontera agrícola



Fuente: elaboración propia a partir del DANE (2020) y la UPRA (2023).

De acuerdo con los datos proporcionados por el DANE (2020) y la UPRA (2023), el 83,80 % del área del municipio de Líbano ya se encuentra dentro de la frontera agrícola; mientras que Murillo y Villahermosa, gracias a la protección del Parque Nacional Natural Los Nevados, han logrado mantener áreas más preservadas, con un 35,81 % y un 53,84 % de su territorio destinado a la agricultura, respectivamente, como se muestra en la tabla 8.

Tabla 8. Frontera agrícola

Municipio	Frontera agrícola (ha)	Área total del municipio (ha)	Porcentaje d frontera agrícola (%)
Líbano	23 649,0525	28 220,0244	83,80
Murillo	15 171,6956	42 372,1513	35,81
Villahermosa	15 024,1246	27 906,4902	53,84
Total	53 844,8728	98 498,6659	54,67

Fuente: elaboración propia a partir del DANE (2020) y la UPRA (2023).

El avance de la frontera agrícola en el municipio de Líbano es alarmante. Aunque las ZRC y los TECAM ofrecen una solución viable para frenar este crecimiento descontrolado, es vital que las políticas de protección territorial sean más robustas y se apliquen de manera efectiva. La dependencia de monocultivos, promovida por organizaciones como la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNC), está exacerbando la presión sobre la tierra. Por tanto, es urgente la reconversión hacia modelos más sostenibles que integren prácticas agroecológicas y respeten los derechos territoriales campesinos.

***Desafíos y oportunidades:
reconversión productiva y sostenibilidad***

En la tabla 9, se muestra el tamaño predial en los tres municipios. La mayoría de los predios de Líbano (68,7 %) tiene un tamaño que oscila entre una y veinticinco hectáreas. Esto refleja una estructura agraria fragmentada que dificulta la adopción de tecnologías a gran escala y la competitividad en mercados dominados por actores más grandes. Los datos proporcionados por el DANE (2020) y la UPRA (2023) destacan la importancia de promover la colaboración entre pequeños productores para mejorar la eficiencia y sostenibilidad de sus operaciones. Sin embargo, esta configuración sostiene buena parte de la agricultura familiar, pero también expone a los productores a límites materiales importantes: menor capacidad de inversión, dificultades para acceder a tecnologías apropiadas, dependencia de intermediarios y mayor vulnerabilidad frente a las variaciones del mercado.

Tabla 9. Tamaño predial

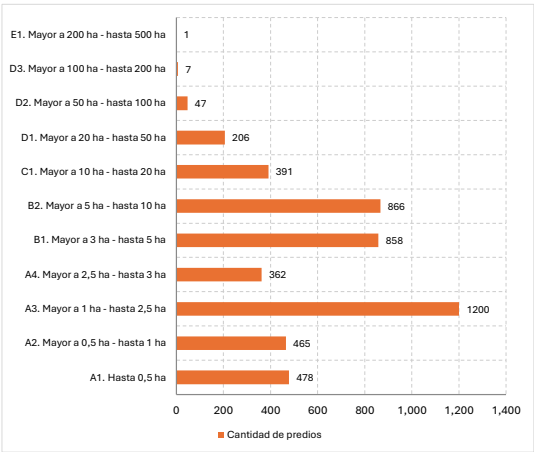
Municipio	Tamaño predial	Cantidad de predios	Área (ha)	rea %)
Libano	A1. Hasta 0,5 ha	478	88,3599	0,32
	A2. Mayor a 0,5 ha - hasta 1 ha	465	303,4249	1,12
	A3. Mayor a 1 ha - hasta 2,5 ha	1200	1868,9149	6,87
	A4. Mayor a 2,5 ha - hasta 3 ha	362	929,0923	3,42
	B1. Mayor a 3 ha - hasta 5 ha	858	3080,1197	11,33
	B2. Mayor a 5 ha - hasta 10 ha	866	5766,8722	21,21
	C1. Mayor a 10 ha - hasta 20 ha	391	5057,1172	18,60
	D1. Mayor a 20 ha - hasta 50 ha	206	5684,4138	20,90
	D2. Mayor a 50 ha - hasta 100 ha	47	3214,7691	11,82
	D3. Mayor a 100 ha - hasta 200 ha	7	980,9523	3,61
	E1. Mayor a 200 ha - hasta 500 ha	1	219,6532	0,81
Total		4881	27 193,6894	100
Murillo	A1. Hasta 0,5 ha	39	9,5170	0,02
	A2. Mayor a 0,5 ha - hasta 1 ha	26	1519,7343	3,65
	A3. Mayor a 1 ha - hasta 2,5 ha	99	70,5268	0,17
	A4. Mayor a 2,5 ha - hasta 3 ha	26	8537,2269	20,51
	B1. Mayor a 3 ha - hasta 5 ha	142	6475,4013	15,56
	B2. Mayor a 5 ha - hasta 10 ha	200	4840,2958	11,63
	C1. Mayor a 10 ha - hasta 20 ha	245	5281,4718	12,69
	D1. Mayor a 20 ha - hasta 50 ha	276	4086,8239	9,82
	D2. Mayor a 50 ha - hasta 100 ha	109	168,1000	0,40
	D3. Mayor a 100 ha - hasta 200 ha	30	555,8267	1,34
	E1. Mayor a 200 ha - hasta 500 ha	15	2524,4195	6,06
	E2. Mayor a 500 ha - hasta 1000 ha	1	502,00976	1,21
	E4. Mayor a 2000 ha - hasta 5000 ha	1	2050,2846	4,93
	E5. Mayor a 5000 ha - hasta 10 000 ha	1	5003,8899	12,02
Total		1210	41 625,5282	100

Municipio	Tamaño predial	Cantidad de predios	Área (ha)	rea %
Villahermosa	A1. Hasta 0,5 ha	251	53,2727	0,19
	A2. Mayor a 0,5 ha - hasta 1 ha	229	169,3842	0,61
	A3. Mayor a 1 ha - hasta 2,5 ha	566	942,4820	3,40
	A4. Mayor a 2,5 ha - hasta 3 ha	132	360,5367	1,30
	B1. Mayor a 3 ha - hasta 5 ha	389	1515,1849	5,47
	B2. Mayor a 5 ha - hasta 10 ha	411	2913,9686	10,52
	C1. Mayor a 10 ha - hasta 20 ha	258	3643,0429	13,15
	D1. Mayor a 20 ha - hasta 50 ha	203	6343,6174	22,90
	D2. Mayor a 50 ha - hasta 100 ha	71	5166,2836	18,65
	D3. Mayor a 100 ha - hasta 200 ha	29	4071,5596	14,70
	E1. Mayor a 200 ha - hasta 500 ha	3	839,3216	3,03
	E3. Mayor a 1000 ha - hasta 2000 ha	1	1681,2462	6,07
Total		2543	27 699,9004	100

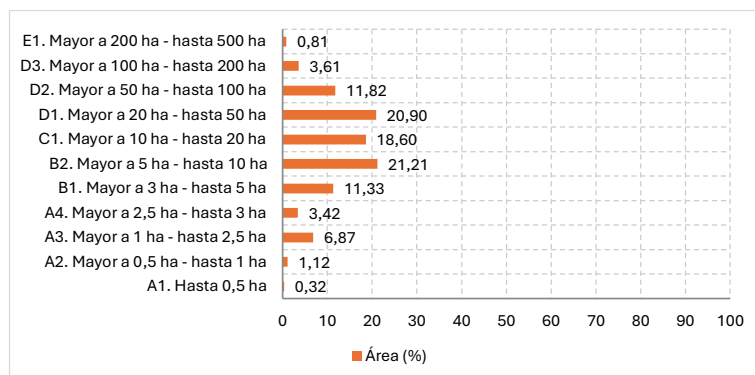
Fuente: elaboración propia a partir del DANE (2020) y la UPRA (2023).

Esta tendencia se observa con mayor claridad en las figuras 2 y 3, en las que la relación entre cantidad de predios y distribución porcentual del área muestra una tensión central: muchos predios se concentran en rangos pequeños, pero una parte significativa del área queda absorbida por rangos superiores. Esta diferencia entre número de unidades y superficie ocupada es clave para comprender que la fragmentación predial no elimina la desigualdad territorial; por el contrario, puede coexistir con formas de concentración relativa del área, especialmente cuando los pequeños productores sostienen la mayor carga productiva en superficies reducidas.

Figura 2. Cantidad de predios por tamaño predial en el municipio de Líbano

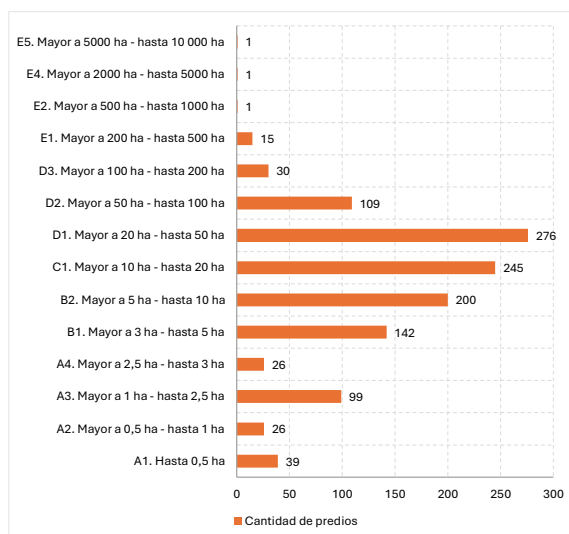


Fuente: elaboración propia a partir del DANE (2020) y la UPRA (2023).

Figura 3. Distribución porcentual del área por tamaño predial en el municipio de Líbano

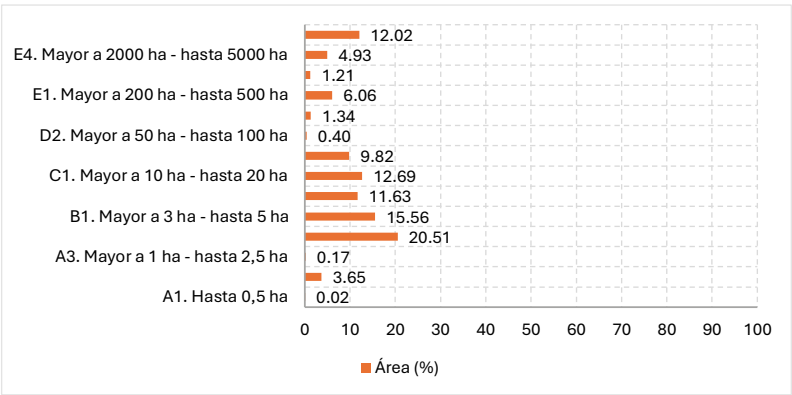
Fuente: elaboración propia a partir del DANE (2020) y la UPRA (2023).

En el caso de Murillo, se observa una estructura distinta en las figuras 4 y 5. La presencia de áreas de mayor extensión se relaciona con condiciones biofísicas particulares, restricciones ambientales y usos asociados a zonas de montaña y conservación. Allí, la lectura predial no puede separarse de la localización del municipio en un entorno ecológicamente sensible, cercano al Parque Nacional Natural Los Nevados. Por tanto, el tamaño de los predios no debe interpretarse únicamente como una variable económica, sino también como una expresión de las tensiones entre producción, conservación, regulación ambiental y permanencia campesina en territorios de alta fragilidad ecosistémica.

Figura 4. Cantidad de predios por tamaño predial en el municipio de Murillo

Fuente: elaboración propia a partir del DANE (2020) y la UPRA (2023).

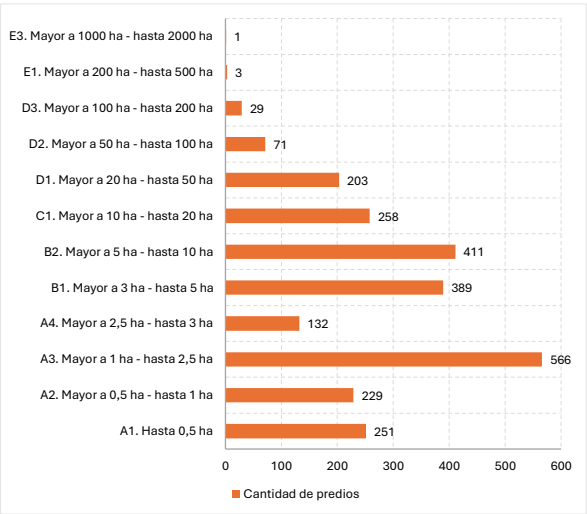
Figura 5. Distribución porcentual del área por tamaño predial en el municipio de Murillo



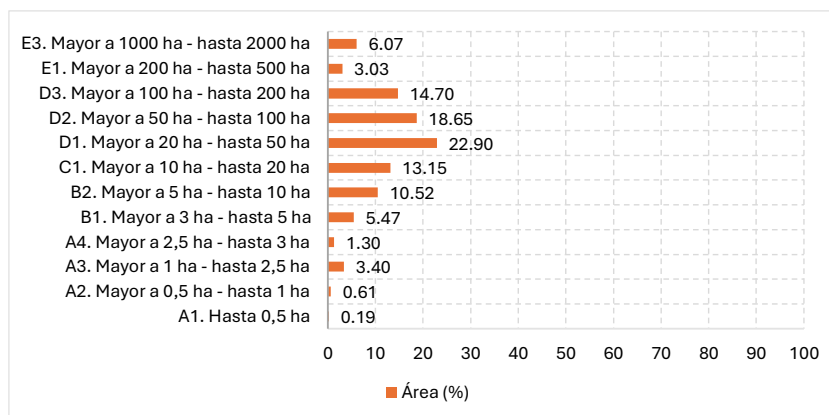
Fuente: elaboración propia a partir del DANE (2020) y la UPRA (2023).

Por su parte, las figuras 6 y 7 muestran que Villahermosa presenta una configuración intermedia, con una distribución predial más diversificada. Esta condición puede ofrecer mayores márgenes de flexibilidad para algunos usos productivos, pero no elimina las presiones estructurales que atraviesan al campesinado: acceso desigual a tierra de calidad, dificultades de comercialización, dependencia del crédito, envejecimiento de la población rural y subordinación frente a mercados agrícolas cada vez más concentrados. En este sentido, la lectura conjunta de la tabla 9 y de las figuras 2 a 7 permite afirmar que la estructura predial del norte del Tolima no es solo un dato catastral, sino que constituye una clave para comprender la forma concreta en que la tierra organiza posibilidades, límites y conflictos para la reproducción de la vida campesina.

Figura 6. Cantidad de predios por tamaño predial en el municipio de Villahermosa



Fuente: elaboración propia a partir del DANE (2020) y la UPRA (2023).

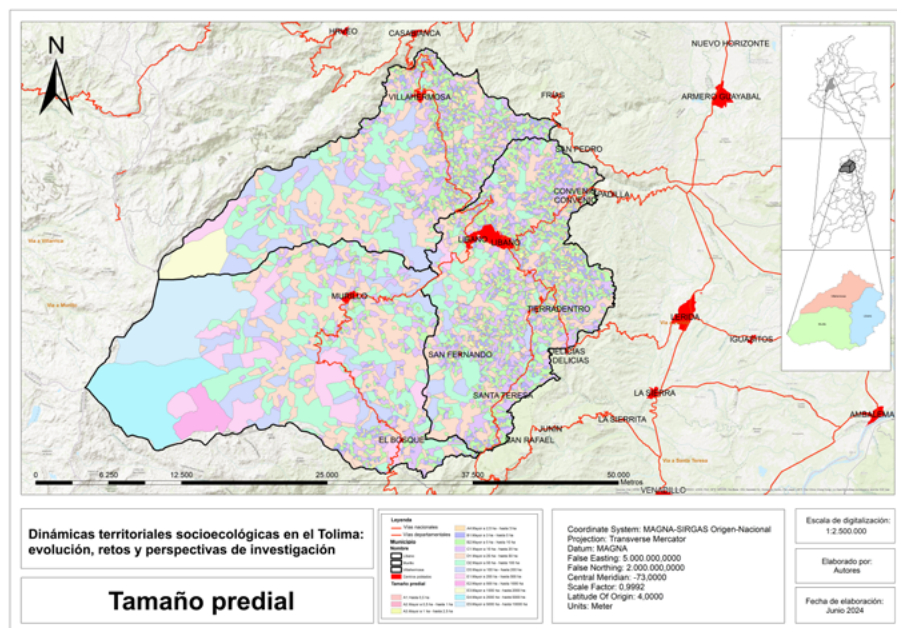
Figura 7. Distribución porcentual del área por tamaño predial en el municipio Villahermosa

Fuente: elaboración propia a partir del DANE (2020) y la UPRA (2023).

Desde la perspectiva crítica que orienta este capítulo, la fragmentación predial no debe entenderse como un simple problema técnico de eficiencia productiva. Su importancia radica en que expresa una relación histórica entre tierra, mercado y poder. Cuando los pequeños productores quedan confinados a unidades reducidas, su autonomía económica se debilita y aumenta su dependencia de créditos, insumos externos, intermediarios y cadenas de valor controladas por actores de mayor escala. Por tanto, las figuras no solo ilustran la distribución del tamaño predial, sino que contribuyen a mostrar cómo la configuración material del territorio condiciona la capacidad campesina para sostener sistemas agroalimentarios propios, diversificados y territorialmente justos. En el mapa 8, se muestra la variación del tamaño predial en los municipios del norte del Tolima.

Quando los pequeños productores quedan confinados a unidades reducidas, su autonomía económica se debilita y aumenta su dependencia de créditos, insumos externos, intermediarios y cadenas de valor controladas por actores de mayor escala

Mapa 8. Tamaño predial



Fuente: elaboración propia a partir del DANE (2020) y la UPRA (2023).

La fragmentación del territorio en pequeñas parcelas plantea tanto desafíos como oportunidades. Por un lado, la pequeña escala permite una gestión más directa y sostenible de los recursos; por otro, limita la capacidad de los campesinos para acceder a financiamiento y tecnología que les permita competir en igualdad de condiciones con grandes productores. Las ZRC y los TECAM desempeñan un papel crucial en la promoción de economías de escala y la resiliencia de las comunidades frente a las fluctuaciones del mercado global.

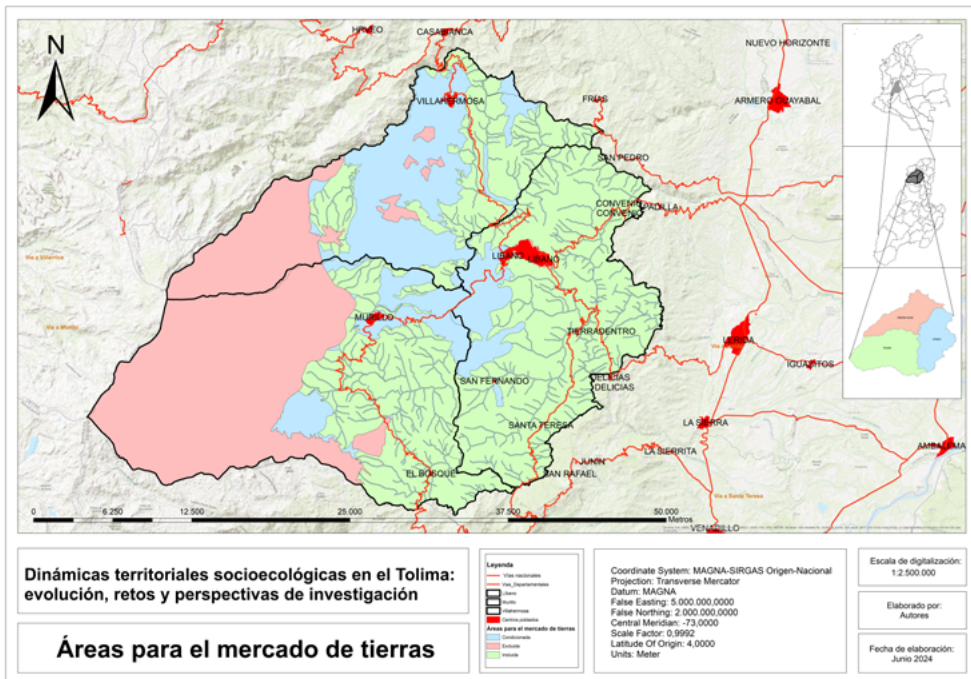
Áreas para el mercado de tierras y avalúos catastrales

El análisis del tamaño predial permite reconocer la forma material de la fragmentación agraria; sin embargo, para comprender su alcance político y económico, es necesario observar cómo esas parcelas ingresan, o quedan parcialmente excluidas, de los circuitos del mercado de tierras. En este punto, los avalúos catastrales adquieren una importancia central, no solo como instrumentos administrativos de valoración fiscal, sino como dispositivos que inciden en la forma en que el territorio es clasificado, valorizado y puesto en relación con dinámicas de inversión, especulación y presión tributaria.

En el norte del Tolima, las áreas incluidas o condicionadas para el mercado de tierras no pueden leerse como simples categorías técnicas. Su distribución espacial revela qué zonas son consideradas disponibles, atractivas o restringidas para la circulación

mercantil del suelo, y permite observar cómo la tierra campesina queda expuesta a procesos de valorización que pueden tensionar su función social, alimentaria y ecológica. Las áreas para el mercado de tierras permiten identificar la distribución espacial de zonas incluidas y condicionadas en Líbano, Murillo y Villahermosa. Esta cartografía ofrece una primera lectura sobre la forma en que el suelo rural entra en circuitos diferenciados de valorización y regulación, antes de examinar las particularidades municipales del mercado de tierras y el avalúo catastral en las siguientes tablas.

Mapa 9. Áreas para el mercado de tierras



Fuente: elaboración propia a partir del DANE (2020) y la UPRA (2020).

En la tabla 10, se presenta una distribución detallada del mercado de tierras y los rangos de avalúo catastral en el municipio de Líbano. Los datos revelan una clara concentración de tierras en rangos menores a una hectárea, con el 18,77 % de las tierras incluidas en este segmento. Esta distribución indica una fragmentación del territorio en pequeñas parcelas, lo que plantea obstáculos significativos para la sostenibilidad económica y el desarrollo de la producción agrícola.

Tabla 10. Mercado de tierras y avalúo catastral en el municipio de Líbano

Clase de mercado de tierras	Rango aval (ha)	Área (ha)	Área (%)
Condicionada	A. Hasta 1	815,9184	3,019
	B. Mayor a 1 - hasta 20	2438,5832	9,024
	C. Mayor a 20 - hasta 60	60,6947	0,225
	D. Mayor a 60 - hasta 100	6,1261	0,023
	E. Mayor a 100	1,0644	0,004
Incluida	A. Hasta 1	5072,7909	18,771
	B. Mayor a 1 - hasta 20	18284,9117	67,661
	C. Mayor a 20 - hasta 60	276,0670	1,022
	D. Mayor a 60 - hasta 100	8,2886	0,031
	E. Mayor a 100	60,0041	0,222
Total		27024,4492	100

Fuente: elaboración propia a partir del DANE (2020) y la UPRA (2020).

Uno de los principales desafíos de esta fragmentación es la dificultad para que los pequeños productores accedan a financiamiento y tecnología. En este contexto, la concentración de tierras en manos de unos pocos propietarios limita las posibilidades de los pequeños agricultores para mejorar su competitividad y participar en cadenas de valor más amplias. Este fenómeno se refleja en el hecho de que el 30,19 % del área total de Líbano está condicionada al mercado de tierras, lo que significa que estas tierras tienen limitaciones para su uso y acceso.

Esta concentración y fragmentación tienen una doble implicación. Por un lado, refuerzan la desigualdad económica en el acceso a la tierra, lo que beneficia a aquellos con mayor poder adquisitivo. Por otro, crean una dependencia estructural que perpetúa la marginalización de los pequeños productores, quienes a menudo se ven forzados a vender sus tierras debido a la carga fiscal impuesta por los altos avalúos catastrales.

Desde una perspectiva crítica, este proceso puede ser interpretado como una manifestación del fenómeno de acumulación por desposesión descrito por Marx, en el que las clases campesinas son sistemáticamente despojadas de sus medios de subsistencia y el territorio es mercantilizado bajo las lógicas del capital. Los pequeños agricultores, desprovistos de apoyo técnico y financiero, se enfrentan a un ciclo de empobrecimiento y exclusión que los empuja a vender sus tierras, lo que permite consolidar el control de grandes propietarios y agroindustrias.

En la tabla 11, se muestra el caso del municipio de Murillo, el cual es similar al de Líbano, pero con ciertas diferencias clave. En Murillo, el 39,18 % del área total está incluida en el rango de tierras menores a una hectárea, lo que destaca una fragmentación aún más

pronunciada. Sin embargo, lo que distingue a Murillo de Líbano es el menor impacto del monocultivo, lo que reduce en cierta medida la presión sobre la tierra. A pesar de esto, los datos revelan que la concentración de tierras en rangos menores sigue limitando el desarrollo agrícola sostenible.

Tabla 11. Mercado de tierras y avalúo catastral en el municipio de Murillo

Clase de mercado de tierras	Rango aval (ha)	Área (ha)	Área (%)
Condicionada	A. Hasta 1	706,155149	3,9185
	B. Mayor a 1 - hasta 20	2885,6177	16,0125
	C. Mayor a 20 - hasta 60	1,260633	0,0070
	D. Mayor a 60 - hasta 100	0,483496	0,0027
	E. Mayor a 100	0,025296	0,0001
Incluida	A. Hasta 1	10 801,0522	59,9358
	B. Mayor a 1 - hasta 20	3622,94509	20,1040
	C. Mayor a 20 - hasta 60	1,414475	0,0078
	D. Mayor a 60 - hasta 100	1,401733	0,0078
	E. Mayor a 100	0,667667	0,0037
Total		18 021,0234	100

Fuente: elaboración propia a partir del DANE (2020) y la UPRA (2020).

Un aspecto importante que considerar es que, aunque la fragmentación es similar a la de Líbano, los pequeños productores de Murillo enfrentan desafíos adicionales debido a la geografía y las características topográficas del territorio. La ubicación de Murillo dentro del Parque Nacional Natural Los Nevados impone restricciones adicionales sobre el uso de la tierra, lo que limita la expansión agrícola; sin embargo, al mismo tiempo, ofrece oportunidades para la implementación de modelos agroecológicos y prácticas sostenibles que pueden mitigar el impacto del cambio climático y la degradación ambiental.

El hecho de que un porcentaje significativo de la tierra en Murillo esté destinado a la conservación bajo el marco del Parque Nacional Natural Los Nevados plantea preguntas sobre el equilibrio entre la producción agrícola y la preservación de los ecosistemas. En este sentido, el uso de la tierra en Murillo debe estar alineado con principios de sostenibilidad, garantizando que las prácticas agrícolas no comprometan la integridad ecológica de la región.

En la tabla 12, se muestra el caso del municipio de Villahermosa, que refuerza la tendencia observada en los municipios de Líbano y Murillo. En Villahermosa, el 14,49% del área está en el rango de hasta una hectárea, mientras que el 40,25% se encuentra en el rango de entre una y veinte hectáreas. Esta diferencia es importante porque muestra

una mayor diversidad en el tamaño de las parcelas, lo que sugiere una posibilidad de mayor flexibilidad en el uso de la tierra.

Tabla 12. Mercado de tierras y avalúo catastral en el municipio de Villahermosa

Clase de mercado de tierras	Rango aval (ha)	Área (ha)	Área (%)
Condicionada	A. Hasta 1	2866,6523	14,492
	B. Mayor a 1 - hasta 20	7894,1304	39,907
	C. Mayor a 20 - hasta 60	1,2243	0,006
	D. Mayor a 60 - hasta 100	0,0001	0,000
	E. Mayor a 100	1,2279	0,006
Incluida	A. Hasta 1	1045,8934	5,287
	B. Mayor a 1 - hasta 20	7962,4592	40,253
	C. Mayor a 20 - hasta 60	3,3017	0,017
	D. Mayor a 60 - hasta 100	2,1871	0,011
	E. Mayor a 100	4,0288	0,020
Total		19 781,1052	100

Fuente: elaboración propia a partir del DANE (2020) y la UPRA (2020).

A diferencia de Líbano y Murillo, Villahermosa parece tener una estructura territorial más equilibrada, en la que los pequeños y medianos productores tienen un mayor acceso a tierras que pueden ser viables para producción agrícola a pequeña y mediana escala. Sin embargo, sigue existiendo el riesgo de que los pequeños productores enfrenten barreras estructurales para acceder a recursos, como financiamiento, asistencia técnica y mercados, lo que perpetúa las desigualdades socioeconómicas en la región.

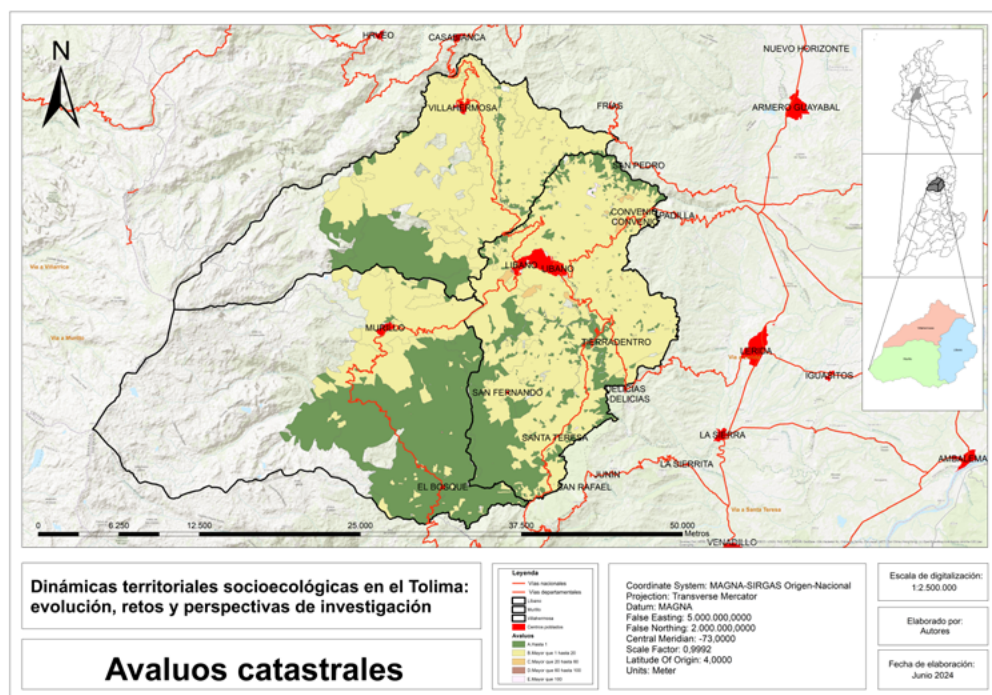
Los datos de Villahermosa sugieren que, aunque existe una menor concentración de tierras en grandes propietarios, el mercado de tierras sigue operando bajo lógicas capitalistas que priorizan el valor económico de la tierra sobre su valor social o ecológico. Este enfoque excluye a los pequeños productores de los beneficios de la modernización agrícola, al mismo tiempo que exacerba la presión sobre los recursos naturales.

En el mapa 10, se observa cómo se distribuyen los avalúos catastrales en los municipios. Este mapa es crucial para entender las disparidades fiscales que afectan a los pequeños y medianos propietarios. Las áreas con altos avalúos catastrales están concentradas en las zonas más productivas, lo que crea una carga fiscal desproporcionada sobre los pequeños agricultores, que no tienen los medios para asumir estos costos sin afectar su viabilidad económica.

Los altos avalúos catastrales no solo representan una barrera para el acceso equitativo a la tierra, sino que también aceleran el proceso de proletarianización campesina, en

el que los pequeños agricultores se ven forzados a vender sus tierras y convertirse en trabajadores asalariados en grandes fincas o en la agroindustria. Este fenómeno es un ejemplo de acumulación por desposesión, en tanto el capital se apropia de la tierra en detrimento de las comunidades locales.

Mapa 10. Avalúos catastrales



Fuente: elaboración propia a partir del DANE (2020) y la UPRA (2020).

La configuración espacial documentada en las tablas y cartografías precedentes opera como un mecanismo estructural de extracción de renta del suelo. La concentración del 67,66 % del área catastral de Líbano en el rango de una a veinte hectáreas (tabla 10), acoplada a una fragmentación extrema en predios menores a cinco hectáreas, evidencia cómo el mercado de tierras se ha reconfigurado bajo lógicas de especulación inmobiliaria rural. Este patrón no constituye un resultado técnico neutral, sino que responde directamente a la financiarización del suelo, en la que el incremento progresivo de los avalúos catastrales funciona como un dispositivo de presión fiscal que obliga a los pequeños propietarios a liquidar sus activos para cubrir obligaciones tributarias insostenibles. La correlación geoespacial entre zonas de alta valoración catastral y corredores de expansión agroindustrial demuestra que la intensificación productiva actúa como catalizador de la revalorización especulativa. Al transformar tierras con vocación agroecológica en monocultivos orientados a la exportación, se generan externalidades positivas capturadas por capitales concentrados, mientras los costos de degradación hídrica y pérdida de biodiversidad se externalizan hacia las comunidades

campesinas. Esta dinámica territorial confirma que el despojo contemporáneo opera mediante mecanismos de mercado que subordinan la tenencia de la tierra a la lógica de rentabilidad financiera, desplazando la coerción directa por instrumentos de disciplinamiento económico (Clapp e Isakson, 2018; Fairbairn, 2014).

Hacia un modelo de desarrollo agroecológico

El análisis de los datos, los mapas y las tablas confirma que los municipios del norte del Tolima enfrentan retos complejos derivados del avance de la frontera agrícola y la concentración de tierras. Sin embargo, las ZRC y los TECAM, junto con la promoción de la agricultura familiar, ofrecen soluciones viables para un desarrollo territorial más justo y sostenible. Los datos del DANE, la UPRA y otras fuentes confiables refuerzan la necesidad de continuar fortaleciendo estas iniciativas para frenar la expansión descontrolada de los monocultivos y garantizar la equidad en el acceso a los recursos.

Análisis marxista del problema de la tierra en el norte del Tolima: datos y proyecciones específicas

El análisis marxista del problema de la tierra en los municipios de Líbano, Murillo y Villahermosa en el norte del Tolima revela un entramado complejo de dinámicas económicas, políticas y sociales que perpetúan la desigualdad territorial. Al transformar la tierra en una mercancía bajo las lógicas capitalistas, el territorio rural se ha convertido en un espacio de acumulación para actores económicos más poderosos, lo que ha dejado a las comunidades campesinas en una situación de vulnerabilidad estructural. A continuación, se ampliará el análisis con datos específicos y verificables para una mejor comprensión.

Acumulación por desposesión y mercantilización de la tierra en cifras

El fenómeno de la acumulación por desposesión, descrito por Marx, se manifiesta de manera clara en el norte del Tolima, donde el aumento del valor de la tierra ha creado un entorno favorable para la concentración de predios en manos de grandes actores económicos. Algunos datos de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) indican que, en los últimos diez años, el valor del suelo en áreas productivas ha aumentado un 27 %, debido principalmente al monocultivo del café y su alta demanda en los mercados internacionales.

Así, por ejemplo, en el municipio de Líbano, el 83,80 % del territorio está dedicado a actividades agrícolas, con un alto grado de concentración en grandes fincas productoras de café. Aunque estas fincas representan una porción relativamente pequeña en términos de número de predios, controlan la mayoría de la tierra fértil y productiva. Esto refuerza la estructura capitalista de acumulación, en la que el control de los medios de producción —en este caso, la tierra— está concentrado en manos de un grupo reducido de actores económicos, mientras que los pequeños campesinos luchan por su subsistencia.

En cambio, los datos del *3er Censo Nacional Agropecuario* (DANE, 2016) muestran que la mayor parte de los predios en Murillo y Villahermosa son de pequeño tamaño (menos de cinco hectáreas), lo que refleja una fragmentación extrema de la propiedad. A pesar de esta fragmentación, los pequeños productores tienen un acceso muy limitado a recursos como créditos, asistencia técnica y tecnología agrícola avanzada, lo que perpetúa su incapacidad para competir con las grandes fincas cafetaleras que dominan la región.

El impacto del avalúo catastral en la exclusión de pequeños productores

El avalúo catastral ha sido una herramienta clave en la consolidación de la mercantilización de la tierra. Según datos proporcionados por la UPRA (2023), el aumento del avalúo catastral en áreas productivas, particularmente en tierras de alta calidad destinadas al cultivo del café, ha resultado en un incremento significativo de los impuestos territoriales. Este aumento ha afectado de manera desproporcionada a los pequeños productores, quienes, a pesar de tener predios pequeños, deben enfrentar los mismos costos de impuestos que los grandes propietarios. Este fenómeno ha llevado a muchos campesinos a vender sus tierras, lo que ha consolidado aún más el control territorial por parte de los actores más poderosos.

En Líbano, el avalúo catastral de los predios destinados al cultivo del café ha aumentado un 25 % en los últimos cinco años, lo que ha obligado a una parte significativa de los pequeños productores a vender sus tierras para poder cubrir sus deudas. Esto no solo refuerza la dinámica de concentración de la tierra, sino que también acelera el proceso de proletarianización de los campesinos, es decir, su transformación en trabajadores asalariados que dependen de los grandes terratenientes para su subsistencia.

En Villahermosa y Murillo, aunque el impacto del monocultivo es menor en términos de concentración de tierras, los datos de la UPRA (2023) muestran que el 39,18 % de las tierras de Murillo tienen un avalúo catastral inferior a una hectárea. Sin embargo, estos predios están sujetos a los mismos incrementos impositivos que las grandes fincas, lo que genera una sobrecarga financiera para los pequeños productores, exacerbando su precariedad económica.

El papel del capital agrario en la configuración del territorio

El capital agrario en el norte del Tolima ha desempeñado un papel determinante en la transformación del territorio. Bajo la lógica capitalista, la tierra no es vista como un recurso para la subsistencia y la sostenibilidad de las comunidades locales, sino como un medio para la acumulación de capital. En el caso del café, la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNC) ha promovido un modelo de monocultivo que requiere grandes extensiones de tierra y el uso intensivo de recursos, como el agua, lo que ha generado un impacto ambiental y social significativo.

El análisis del mercado de tierras en Líbano revela que los grandes productores de café han logrado acaparar las tierras más productivas, mientras que los pequeños agricultores se ven relegados a tierras de menor calidad o se ven forzados a migrar a áreas menos productivas. Esta dinámica no solo tiene implicaciones económicas, sino también ecológicas, ya que la expansión de los monocultivos ha resultado en la degradación de los suelos y la pérdida de biodiversidad.

Según la UPR (2023), el 65 % de las tierras destinadas al café en Líbano están concentradas en manos de solo el 15 % de los productores, lo que evidencia el nivel de concentración de la propiedad en este municipio. Esto contrasta con Villahermosa y Murillo, donde la fragmentación de la tierra es más pronunciada, al tiempo que los pequeños productores enfrentan barreras estructurales para acceder a los mercados de alto valor, como el del café.

El mercado de tierras en el municipio de Líbano ha mostrado una alta concentración en áreas productivas específicas, lo cual está vinculado al acceso desigual a la tierra. Como se muestra en la tabla 10, el mercado presenta una segmentación considerable en los rangos de avalúos catastrales, lo que evidencia las disparidades en el acceso a tierras de mayor valor económico.

Proyecciones y soluciones: redistribución y reformas estructurales

Las proyecciones realizadas por la UPR (2023) sugieren que el valor de la tierra en el norte del Tolima seguirá aumentando en los próximos años, con un promedio de incremento anual entre el 5 % y el 7 % en las áreas más productivas. Este escenario plantea un desafío considerable para las comunidades campesinas, que ya enfrentan dificultades para mantenerse en sus tierras debido al alto costo del suelo y la falta de apoyo financiero.

Desde una perspectiva marxista, la solución a este problema no puede limitarse a medidas paliativas como la concesión de créditos o la reducción de impuestos. Es necesario llevar a cabo una reforma agraria integral que redistribuya las tierras de manera

equitativa, devolviendo el control de los territorios a las comunidades campesinas. Esta redistribución debe ir acompañada de políticas que promuevan la agroecología y la sostenibilidad ambiental, rompiendo con la lógica del monocultivo y promoviendo la diversificación agrícola.

Precisamente, las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) y los Territorios Campesinos Agroalimentarios (TECAM) son ejemplos de iniciativas que buscan este tipo de cambio estructural. Estas zonas, gestionadas colectivamente por las comunidades campesinas, ofrecen una alternativa al modelo extractivista del monocultivo, promoviendo una gestión sostenible de los recursos naturales y una producción agrícola orientada al consumo local y la soberanía alimentaria.

La lucha por la tierra en el contexto del capitalismo global

El análisis detallado de los datos del norte del Tolima muestra que el problema de la tierra no es simplemente una cuestión de distribución desigual, sino que está profundamente enraizado en las dinámicas estructurales del capitalismo. Bajo este sistema, la tierra se convierte en una mercancía sujeta a las leyes del mercado, en el que su valor se define por su capacidad de generar ganancias. Para las comunidades campesinas, esto significa enfrentar un ciclo constante de desposesión y exclusión.

Por consiguiente, la solución debe ser estructural. Las políticas de redistribución de tierras y el fortalecimiento de las ZRC y los TECAM ofrecen una vía para romper con este ciclo y devolver el control de los recursos a las comunidades locales. Sin embargo, esto solo será posible si se implementan reformas profundas que cuestionen el papel del capital en la configuración del territorio y promuevan un modelo de desarrollo que priorice la justicia social y la sostenibilidad ambiental.

Reconfiguración territorial y productiva en el norte del Tolima: el rol de los Territorios Campesinos Agroalimentarios

En el contexto de la conflictividad socioterritorial en Colombia, los Territorios Campesinos Agroalimentarios (TECAM) surgen como una estrategia clave para enfrentar las problemáticas históricas de concentración de tierras y la crisis del modelo agroindustrial extractivista que ha dominado la producción agrícola en la región. Este modelo de gestión colectiva de la tierra no solo busca redistribuir el acceso a la tierra, sino que

propone una reorganización territorial que integre principios de agroecología, soberanía alimentaria y gestión sostenible de los recursos naturales.

Los TECAM, como espacios de resistencia y construcción territorial, ofrecen una alternativa viable frente a la fragmentación impuesta por el mercado capitalista, reestructurando las dinámicas de poder en torno al uso de la tierra y los recursos. Esta figura se fundamenta en la necesidad de superar la dependencia de los monocultivos orientados a la exportación, que han generado degradación ecológica y precarización económica en las comunidades campesinas. En el norte del Tolima, donde el 47 % de las tierras están subutilizadas según datos de la UPRA, los TECAM representan un enfoque innovador para garantizar un acceso más equitativo y sostenible a la tierra.

El surgimiento de los Territorios Campesinos Agroalimentarios (TECAM) no constituye únicamente una respuesta técnica a la crisis del modelo agroindustrial, sino un proyecto político de reexistencia territorial impulsado históricamente por plataformas organizativas como el Coordinador Nacional Agrario (CNA) y el Congreso de los Pueblos. Desde estas coordenadas políticas, el TECAM se erige como un dispositivo de política pública alternativa que desborda la lógica asistencialista del Estado para proponer una gobernanza territorial fundamentada en la economía campesina, la soberanía alimentaria y la defensa de la vida (Congreso de los Pueblos, 2022; Ley 2294 de 2023, por medio de la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2023-2026 “Colombia, potencia mundial de la vida”, 2023).

Bajo una lectura marxista de la cuestión agraria, estas experiencias representan una reconfiguración contrahegemónica de las relaciones de producción, en las que el campesinado deja de ser un sujeto residual del desarrollo capitalista para constituirse en agente histórico de transformación territorial (Grisales, 2019; Van der Ploeg, 2010, 2014). La propuesta política del CNA y el Congreso de los Pueblos trasciende la tenencia de la tierra al postular un modelo de reproducción social basado en el trabajo familiar, la reciprocidad ecológica y la gestión colectiva de los bienes comunes, articulando así una alternativa concreta a la financiarización rural y al extractivismo contemporáneo. En este sentido, el TECAM opera como un laboratorio de soberanía material que evidencia la viabilidad de un desarrollo territorial no subordinado a la lógica del capital, sino anclado en las necesidades vitales y las epistemologías campesinas.

Los TECAM y la agroecología como pilares productivos

Dentro del modelo de los TECAM, la agroecología es central para garantizar una producción agrícola sostenible que no dependa de insumos externos como los fertilizantes químicos, cuyo uso intensivo ha degradado los suelos en la región. Por medio de prácticas agroecológicas, los campesinos gestionan los ciclos naturales del suelo, promoviendo la regeneración de la biodiversidad y reduciendo el impacto ambiental de la producción agrícola.

Este enfoque productivo también responde a las necesidades de soberanía alimentaria, un concepto clave en los TECAM, que prioriza la producción local de alimentos para el consumo interno, alejándose del modelo extractivista de exportación de monocultivos como el café. Según el *3er Censo Nacional Agropecuario* (DANE, 2016), el 70 % de los pequeños agricultores en el municipio de Líbano carecen de acceso a asistencia técnica para implementar estas prácticas sostenibles, lo que señala la importancia de apoyo institucional y la implementación de políticas públicas que fortalezcan la agroecología.

Además, estudios como el de Díaz Avendaño y Pachón Ariza (2024) sobre territorialidad campesina y soberanía alimentaria en el macizo colombiano muestran que los TECAM no solo son espacios de producción, sino también de lucha política. Estas dinámicas productivas transformadoras permiten a las comunidades campesinas resignificar su relación con el territorio, consolidando un espacio de resistencia frente a la imposición del modelo neoliberal extractivista, con implicaciones profundas para la soberanía alimentaria y la protección del territorio.

Financiamiento y sostenibilidad económica de los TECAM

Uno de los retos fundamentales para la consolidación de los TECAM es el acceso a financiamiento adecuado y el desarrollo de capacidades técnicas que permitan a las comunidades campesinas sostener la producción agroecológica a largo plazo. Sin un acceso adecuado a créditos blandos y subsidios específicos, los pequeños productores enfrentan grandes dificultades para adquirir insumos agroecológicos o implementar tecnologías sostenibles.

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (2024) ha proyectado que una inversión significativa en créditos y asistencia técnica en el norte del Tolima podría incrementar la productividad de los pequeños agricultores en un 30 % en los próximos cinco años, lo que mejoraría la resiliencia económica de las comunidades campesinas. Esta inversión también reduciría el uso de pesticidas y fertilizantes químicos en un 15 %, lo que contribuiría a la sostenibilidad ambiental de los TECAM. Este tipo de apoyo es esencial para que los TECAM no solo sean viables en términos económicos, sino también sostenibles a largo plazo.

A nivel internacional, los estudios sobre sistemas regionales de innovación agroalimentaria en Colombia, realizados por autores como Ewert et al. (2023) y Levidow et al. (2014), señalan que las cadenas agroalimentarias deben innovar no solo en términos tecnológicos, sino también en modelos de gobernanza y financiamiento. Los TECAM, al priorizar la producción local y la gestión colectiva de los recursos, ofrecen un modelo adaptable a las dinámicas globales sin perder su enfoque en la justicia social y la sostenibilidad.

Gestión comunitaria del agua: un recurso esencial en los TECAM

El agua es un recurso crítico para la producción agroalimentaria en los TECAM, especialmente en el norte del Tolima, donde los monocultivos de café y caña han ejercido una fuerte presión sobre las fuentes hídricas. La gestión comunitaria del agua en los TECAM permite garantizar un acceso equitativo y sostenible a este recurso, promoviendo sistemas de riego eficientes y la protección de las cuencas hidrográficas locales.

Algunos estudios publicados en la *Revista de Economía e Sociología Rural* en el 2023 señalan que la preservación de los recursos hídricos es esencial para garantizar la viabilidad de los sistemas agroecológicos en regiones donde la sobreexplotación de agua ha puesto en riesgo la producción campesina. En este sentido, los TECAM no solo se presentan como una estrategia para reorganizar la producción agrícola, sino también como un mecanismo de gestión integral de los recursos naturales.

Los TECAM como instrumento transformador del territorio y la producción

Los Territorios Campesinos Agroalimentarios (TECAM) representan una alternativa radical frente a las estructuras tradicionales de concentración de tierras y producción agrícola en Colombia. Al integrar la agroecología y la soberanía alimentaria, los TECAM permiten que las comunidades campesinas retomen el control de sus tierras y sus sistemas de producción, alejándose del modelo extractivista y neoliberal que ha dominado el desarrollo rural en el país.

Para que este modelo sea efectivo, es fundamental que reciba un apoyo robusto en términos de financiamiento, asistencia técnica y políticas públicas que promuevan la gestión sostenible de los recursos naturales. La experiencia de los TECAM en el norte del Tolima ofrece un ejemplo claro de cómo las comunidades campesinas pueden reorganizar el territorio de manera equitativa y sostenible, consolidando así un modelo de desarrollo que prioriza el bienestar colectivo sobre los intereses del capital global.

El análisis de estos territorios agroalimentarios no solo muestra su viabilidad técnica y económica, sino también su potencial como herramienta para la justicia social y ambiental en Colombia. En última instancia, los TECAM son una manifestación concreta de la lucha por la soberanía territorial y alimentaria, y ofrecen una vía para reconfigurar el desarrollo rural en el país.

La revisión empírica y teórica desarrollada en este capítulo articula una contribución original frente a los marcos de la geografía agraria y la economía política del territorio. Más allá de limitarse a catalogar la fragmentación predial, este análisis demuestra que

la reconfiguración catastral y el avance de la frontera agrícola operan como dispositivos complementarios de extracción de plusvalía espacial. La divergencia cuantificada entre el tamaño medio de los predios (predominantemente minifundistas) y la concentración de valor en zonas de alta cotización comercial constituye la huella material de la financiarización rural. Esta brecha no es un accidente del mercado, sino el efecto directo de una racionalidad productiva que prioriza la especulación inmobiliaria sobre la reproducción social campesina, transformando al pequeño productor en un agente endeudado y fiscalmente presionado.

El aporte autoral radica en hacer evidente que la resistencia territorial no se agota en la defensa física de la parcela, sino que se materializa en la construcción de contraespacios que restablecen el metabolismo social alterado. En este marco, las ZRC y los TECAM no son figuras jurídicas residuales, sino laboratorios de soberanía material que desafían la homogeneización del capital. Al vincular los patrones geoespaciales de fragmentación con los ciclos de endeudamiento y la pérdida de autonomía productiva, se establece un puente analítico que permite comprender la crisis socioambiental no como un fallo de coordinación institucional, sino como una contradicción estructural del modo de producción capitalista aplicado al territorio rural (Chohan, 2024; Kay, 2015; Otero et al., 2018).

Planificación rural y ordenamiento territorial: proyecciones y estrategias institucionales

La evidencia territorial y socioeconómica analizada exige una reorientación normativa hacia instrumentos de planificación rural que superen el enfoque productivista tradicional. Se requiere consolidar el ordenamiento territorial con enfoque de cuenca y corredor biocultural, integrando la vocación real del suelo como límite operativo para la expansión agroindustrial. Las ZRC y los TECAM deben articularse como figuras estratégicas de gestión del riesgo climático, priorizando la restauración de cabeceras hídricas, la implementación de sistemas agroforestales resilientes y la creación de fondos compensatorios por servicios ecosistémicos.

A nivel institucional, se plantea lo siguiente: (a) articular los planes de desarrollo municipal con diagnósticos biofísicos actualizados del IGAC y del IDEAM, restringiendo la autorización de usos incompatibles con la capacidad de carga territorial; (b) diseñar esquemas de financiamiento no extractivo para los TECAM, basados en créditos verdes con tasas diferenciadas y períodos de gracia alineados con los ciclos agroecológicos; (c) implementar sistemas de alerta temprana comunitaria para la gestión del riesgo por deslizamientos e inundaciones, vinculando la protección de coberturas boscosas con la seguridad de los asentamientos rurales, y (d) fortalecer la gobernanza participativa mediante mesas técnicas de ordenamiento territorial, en las que las organizaciones campesinas ejerzan capacidad decisoria sobre la destinación de usos del suelo y la priorización de inversión pública. Solo mediante esta articulación entre conocimiento

territorial, política pública y autonomía campesina será posible transformar la planificación rural en un instrumento de emancipación socioecológica (Borras y Franco, 2012; Fairbairn, 2014).

Hacia una reconfiguración del territorio: agroecología, resistencia y futuro campesino

El análisis del territorio en el norte del Tolima ha revelado un entramado complejo de dinámicas sociales, económicas y políticas que impulsan la acumulación de tierras y la expansión de la frontera agrícola. La tierra, más que solo un recurso productivo⁴⁵, representa un espacio simbólico y vital donde se teje la relación entre las comunidades campesinas y su entorno. En este sentido, la lucha por la tierra en estos territorios trasciende la disputa por la propiedad, es una confrontación entre modelos de vida y visiones del mundo.

El modelo de desarrollo dominante en el Tolima, impulsado por la expansión de monocultivos como el café⁴⁶, ha tenido efectos devastadores sobre la biodiversidad y la sostenibilidad de las formas de vida campesinas⁴⁷. Este modelo se ha basado en una lógica extractivista que convierte el territorio en una mercancía y refuerza la lógica capitalista de acumulación por desposesión, en la que las comunidades locales son desplazadas para favorecer a actores con mayor poder económico y político. Como señalan estudios recientes, este proceso no solo despoja a los campesinos de sus tierras⁴⁸, sino que también los excluye de las dinámicas de poder que configuran el futuro de sus territorios.

⁴⁵ En la economía capitalista, la tierra se convierte en mercancía al estar sujeta a la compraventa y la explotación comercial, lo cual contrasta con las visiones indígenas y campesinas, que la consideran un bien común y parte de la identidad cultural de sus habitantes (Gudynas, 2011).

⁴⁶ Los monocultivos, como el café, generan graves impactos ambientales como deforestación, degradación del suelo y pérdida de biodiversidad, al mismo tiempo que crean dependencia económica y vulnerabilidad ante los precios globales (Altieri y Nicholls, 2017).

⁴⁷ Los sistemas de producción campesina tienden a ser más sostenibles que los industriales, ya que están basados en el uso diversificado de los recursos naturales, la rotación de cultivos y prácticas agroecológicas que respetan los ciclos naturales (Ewert et al., 2023; Rosset y Altieri, 2017; Sevilla Guzmán, 2006).

⁴⁸ El despojo territorial es un proceso mediante el cual las comunidades rurales e indígenas pierden sus tierras a causa de políticas estatales, conflictos armados o proyectos extractivistas, lo que no solo genera desplazamiento, sino también la destrucción de sus formas de vida y su organización comunitaria (Machado, 2017).

La agroecología como respuesta a la crisis territorial

Frente a este panorama, surge la agroecología como una alternativa crítica que desafía la racionalidad económica del capital y propone una reconfiguración del territorio basada en principios de justicia social, sostenibilidad y respeto por los ciclos naturales. Las experiencias de las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) y los Territorios Campesinos Agroalimentarios (TECAM) en el norte del Tolima no son solo respuestas locales a un problema global, sino que proponen una reestructuración profunda de las formas de habitar el territorio. Estos espacios reafirman la soberanía alimentaria⁴⁹ como un derecho fundamental y promueven la producción de alimentos de manera sostenible, rescatando saberes ancestrales y prácticas agrícolas que están en armonía con el entorno natural.

La agroecología como estrategia de resistencia

La agroecología, lejos de ser solo una técnica de producción⁵⁰, se convierte en una estrategia de resistencia política frente a la expansión del modelo agroindustrial. Al integrar prácticas locales y conocimientos campesinos, la agroecología desafía la dependencia de los insumos externos y fomenta una relación más equilibrada entre la comunidad y la naturaleza. En este sentido, las ZRC y los TECAM son formas concretas de resistencia que permiten a las comunidades campesinas recuperar el control sobre sus territorios, construir autonomía⁵¹ y fortalecer sus formas de vida (Decreto 0780 de 2024).

Agroecología y cambio climático: una solución local a una crisis global

Este modelo de territorialidad campesina es también una respuesta a la crisis ecológica global, ya que promueve un uso más eficiente y respetuoso de los recursos naturales. Estudios han demostrado que los sistemas agroecológicos tienen el potencial de mitigar los impactos del cambio climático⁵² al reducir la dependencia de insumos agroquímicos y favorecer la regeneración de la biodiversidad (Bezner Kerr et al., 2023). Esto es especialmente relevante en el contexto del Tolima, donde la degradación de los suelos

⁴⁹ El concepto de soberanía alimentaria fue desarrollado por La Vía Campesina en 1996 y se refiere al derecho de los pueblos a controlar sus propios sistemas alimentarios, priorizando la producción local y el acceso a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados (Díaz Avendaño y Pachón Ariza, 2024; Patel, 2009).

⁵⁰ La agroecología no solo se concibe como una alternativa técnica de producción agrícola, sino también como un movimiento social que desafía el modelo neoliberal de producción agrícola basado en los monocultivos y la dependencia de insumos externos (Giraldo y Rosset, 2022; Méndez et al., 2013).

⁵¹ La autonomía campesina se refiere a la capacidad de las comunidades para gestionar su propio territorio, recursos y modos de vida sin depender de las estructuras del mercado global o de políticas estatales que promuevan la industrialización agrícola (Escobar, 2014, 2025).

⁵² La agroecología se presenta como una de las soluciones más prometedoras frente al cambio climático, ya que promueve sistemas agrícolas resilientes, regenerativos y de bajo impacto ambiental, que se adaptan mejor a las variabilidades climáticas (Rosset y Altieri, 2017).

y la escasez de agua⁵³ han exacerbado la vulnerabilidad de las comunidades rurales frente a las fluctuaciones del mercado global.

El papel de las políticas públicas y el apoyo institucional

A medida que las políticas públicas nacionales comiencen a reconocer el valor de la agroecología y las formas de producción campesina, es crucial que estas iniciativas se consoliden mediante un apoyo sostenido en términos de financiamiento⁵⁴, asistencia técnica y acceso a mercados justos. Las comunidades del norte del Tolima han demostrado una capacidad extraordinaria para resistir las presiones del capital global, pero su lucha no puede sostenerse sin un marco institucional que respalde sus esfuerzos y garantice el derecho a la tierra y a la soberanía territorial.

El desafío del financiamiento y la sostenibilidad económica

El financiamiento adecuado sigue siendo uno de los mayores retos para la consolidación de las ZRC y los TECAM. Sin acceso a créditos blandos⁵⁵ y subsidios específicos⁵⁶, los pequeños agricultores enfrentan dificultades para implementar tecnologías sostenibles y prácticas agroecológicas. Según datos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (2024), una inversión significativa en asistencia técnica en el norte del Tolima podría aumentar la productividad en un 30 %, lo que a su vez mejoraría la resiliencia económica de los pequeños productores y reduciría su dependencia de los insumos externos.

Políticas públicas para la soberanía alimentaria y territorial

Las políticas públicas deben estar diseñadas para fomentar la soberanía alimentaria⁵⁷, priorizando la producción local destinada al consumo interno sobre el modelo extractivista de exportación. Las experiencias de los TECAM en el norte del Tolima muestran que es posible crear un modelo agroalimentario que no solo sea sostenible, sino que

⁵³ La degradación del suelo es uno de los principales efectos negativos de la agricultura industrial, causada por el uso intensivo de fertilizantes químicos y pesticidas, y la sobreexplotación de la tierra, lo que reduce su capacidad de retención de agua y nutrientes (Lal, 2020).

⁵⁴ Las políticas públicas desempeñan un papel clave en la consolidación de sistemas agrícolas sostenibles al garantizar el acceso a recursos, asistencia técnica y financiamiento para las comunidades rurales (Levidow et al., 2014; Rosero, 2025).

⁵⁵ Según el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (International Fund for Agricultural Development [IFAD], 2016), los pequeños agricultores enfrentan barreras significativas para acceder a financiamiento, debido a la falta de garantías y a la alta concentración del crédito en los grandes productores.

⁵⁶ Los pequeños agricultores a menudo enfrentan barreras estructurales para acceder a créditos, debido a la falta de garantías, altos intereses y condiciones desfavorables, lo que limita su capacidad para mejorar su producción y competitividad (IFAD, 2016).

⁵⁷ Las políticas de soberanía alimentaria deben estar orientadas a fortalecer los mercados locales, reducir la dependencia de importaciones y apoyar a los pequeños productores, promoviendo sistemas agrícolas diversificados y resilientes (Wittman et al., 2010).

también devuelva el control de la producción a las comunidades campesinas. Estas iniciativas, apoyadas por un marco institucional adecuado, pueden desempeñar un papel clave en la reconfiguración del desarrollo rural en Colombia, alejándose de las lógicas del capital global y reafirmando los derechos territoriales de los campesinos.

Alternativas al desarrollo desde los márgenes: un futuro sostenible

El cierre de este análisis nos lleva a una reflexión más amplia sobre las alternativas al desarrollo que están surgiendo desde los márgenes. Estas alternativas no solo cuestionan las bases del capitalismo global, sino que también abren un horizonte de posibilidades para construir territorios más justos, sostenibles y resilientes. El futuro del norte del Tolima dependerá, en última instancia, de la capacidad de las comunidades campesinas para seguir tejiendo sus territorios a partir de sus propias lógicas y necesidades, resistiendo a la mercantilización de la vida y reafirmando su derecho a existir en armonía con la naturaleza.

Reconfiguración del territorio y justicia social

La reconfiguración territorial en el norte del Tolima no puede lograrse sin un compromiso decidido con la justicia social⁵⁸. Las experiencias de las ZRC y los TECAM muestran que, al devolver el control de la tierra a las comunidades campesinas, es posible construir territorios que no solo sean productivos, sino también sostenibles y socialmente equitativos. Esta lucha por la tierra es una lucha por el derecho a una vida digna, en la que las comunidades campesinas puedan vivir en armonía con su entorno y mantener su autonomía frente a las presiones del capital.

Agroecología y soberanía alimentaria: el camino hacia un futuro sostenible

Finalmente, la agroecología y la soberanía alimentaria se perfilan como las rutas más prometedoras para un futuro sostenible en el Tolima. Estas prácticas permiten a las comunidades campesinas retomar el control sobre sus sistemas alimentarios, reducir su dependencia de los mercados globales y fortalecer su resiliencia frente al cambio climático. Como lo demuestran estudios recientes, los sistemas agroecológicos no solo mejoran la sostenibilidad ambiental, sino que también promueven la equidad social y económica (Decreto 0780 de 2024).

⁵⁸ La justicia social en el ámbito rural implica garantizar un acceso equitativo a la tierra, los recursos naturales y los mercados, asegurando que las comunidades rurales puedan mantener sus modos de vida y contribuyendo a la sostenibilidad del territorio (Borras y Franco, 2012).



Capítulo 5.

**De la trampa de la deuda
a la soberanía material:
los TECAM como horizonte político y
praxis de resistencia en el norte del Tolima**

La financiarización del espacio rural en América Latina ha dejado de ser un fenómeno circunscrito a los mercados de capitales para constituirse en un dispositivo de reorganización territorial que redefine las condiciones de reproducción social, ecológica y epistémica de las comunidades campesinas. En el norte del Tolima, esta transformación no se manifestó como un desplazamiento físico abrupto, sino como un proceso de subordinación económica progresiva, mediado por el microcrédito, la especialización productiva y la revalorización catastral del suelo. La deuda, lejos de operar como puente hacia la capitalización familiar, se consolidó como mecanismo de disciplinamiento financiero que reconfiguró los ritmos agrícolas, los patrones de consumo y las expectativas de futuro, instalando una temporalidad extractiva que colisionó con los ciclos biológicos y las prácticas tradicionales de cuidado del territorio. En este contexto, la lucha por la tierra trascendió la disputa por la titularidad legal para convertirse en una batalla por la autonomía metabólica, es decir, por la capacidad de las comunidades para sostener sus modos de vida sin someterse a la lógica de acumulación que exige la mercantilización integral de los recursos.

El presente capítulo no se concibe como un apéndice empírico, sino como el espacio de síntesis crítica en el que las categorías teóricas desarrolladas a lo largo de esta obra encuentran su anclaje en la experiencia concreta de las familias campesinas de la vereda El Convenio del municipio de Líbano. El análisis se sustenta en la premisa de que la resistencia contemporánea no se agota en la defensa reactiva del predio, sino que se materializa en la construcción activa de contraespacios productivos, organizativos y epistémicos que desafían la hegemonía del capital financiero y agroindustrial. Los Territorios Campesinos Agroalimentarios (TECAM), impulsados por el Coordinador Nacional Agrario (CNA) y el Congreso de los Pueblos, surgen en este escenario como dispositivos políticos de soberanía material, por cuanto no solo reordenan el uso del suelo, sino que redefinen las relaciones entre sujeto, trabajo y naturaleza, priorizando la reproducción social sobre la extracción de valor.

La articulación entre financiarización, despojo territorial y praxis de resistencia se examina aquí mediante un enfoque crítico-hermenéutico que integra la ecología política agraria, los estudios sobre biopolítica financiera y la teoría de la territorialidad campesina. El trabajo de campo, desarrollado entre finales del 2023 y mediados del 2024, permitió documentar no solo indicadores socioeconómicos, sino también las narrativas, las tensiones cotidianas y las estrategias de reexistencia que las comunidades desplegaron frente a la crisis de reproducción. Los resultados revelan un panorama de alta vulnerabilidad estructural, caracterizado por la fragmentación predial, la dependencia de insumos externos, la erosión de la autosuficiencia alimentaria y la internalización de la culpa por el “fracaso” individual. No obstante, en las mismas grietas de este entramado, surgieron prácticas colectivas de transición agroecológica, circuitos cortos de comercialización y fondos rotatorios comunitarios que sostienen la viabilidad política y material de los TECAM.

Este cierre analítico no busca universalizar la experiencia del Tolima, sino demostrar cómo la soberanía material se construye en la práctica, mediante procesos que articulan conocimiento local, organización colectiva y disputa política. La transición de la trampa de la deuda hacia la autonomía campesina no es lineal ni garantizada, se trata de una confrontación abierta en la que coexisten tendencias contradictorias. Sin embargo, la evidencia empírica recopilada confirma que, cuando las comunidades recuperan el control sobre los ciclos productivos, los saberes agroecológicos y las formas de intercambio no mercantil, no solo resisten el despojo, sino que generan alternativas civilizatorias ancladas en la justicia socioecológica y la dignidad territorial.

Trayectoria del trabajo de campo y condiciones de inteligibilidad del análisis

Las dinámicas que atraviesan la vereda El Convenio no pueden comprenderse desde una mirada externa o abstracta, exigen una aproximación situada que permita captar la forma en que la financiarización se inscribe en la vida cotidiana, reorganizando tanto las condiciones materiales de reproducción como los sentidos que orientan la acción campesina. En este sentido, el análisis aquí desarrollado se sustenta en un proceso de inmersión territorial desarrollado entre noviembre del 2023 y junio del 2024, período en el que la vereda experimentaba simultáneamente la volatilidad de los precios del café, la reconfiguración de los mercados locales tras la pandemia y una creciente fatiga organizativa acumulada por décadas de intervenciones institucionales fragmentadas.

La elección de este territorio no respondió a criterios de representatividad estadística, sino a su capacidad de condensar, en una escala micro, las tensiones estructurales que configuran el norte del Tolima: presión creciente sobre el valor del suelo; expansión de economías de monocultivo; intermediación comercial ligada al crédito, y persistencia de formas campesinas de producción que resisten, negocian o se reconfiguran frente a estas dinámicas. En este sentido, la vereda opera menos como “caso” que como punto de observación privilegiado de procesos más amplios de reorganización territorial.

El acercamiento al territorio se sostuvo en recorridos sistemáticos por las unidades productivas; en la participación en actividades colectivas como mingas de siembra y cosecha, y en espacios de diálogo con distintos actores de la comunidad: productores, mujeres jefas de hogar, jóvenes rurales y líderes de organizaciones. Estas interacciones no se limitaron a la recolección de información, sino que permitieron reconstruir las tramas de sentido mediante las cuales la deuda, el trabajo y la tierra adquieren significado en la experiencia cotidiana. Paralelamente, la lectura de registros institucionales y bases de datos oficiales se articuló con la información recopilada en campo, lo que posibilitó una comprensión que no separa los indicadores de las prácticas ni las cifras de las narrativas.

En un primer momento, la reconstrucción del proceso territorial implicó caracterizar la estructura agraria y las condiciones biofísicas que delimitan las posibilidades productivas de las unidades familiares. En un segundo momento, se identificaron patrones de vulnerabilidad y resiliencia asociados a la dependencia de insumos externos, la fragmentación predial y la presión del endeudamiento, no como variables aisladas, sino como dimensiones entrelazadas de un mismo proceso de subordinación. Finalmente, el análisis se orientó hacia las formas en que estas condiciones son vividas, interpretadas y, en algunos casos, disputadas por las propias comunidades, dando lugar a prácticas de reexistencia que abren fisuras en la lógica dominante.

Lejos de oponer lo cuantificable a lo vivido, el análisis se elaboró en la intersección entre ambas dimensiones, reconociendo que los datos solo adquieren sentido cuando se inscriben en las racionalidades culturales y en los marcos de decisión que orientan la vida campesina. Bajo esta perspectiva, el rigor no se fundamenta en la distancia del observador, sino en la capacidad de hacer visibles las relaciones de poder que operan bajo la apariencia de neutralidad del mercado, así como en la posibilidad de reconocer, en medio de esas mismas relaciones, las formas concretas de agencia que las comunidades despliegan para sostener su reproducción y disputar el sentido del desarrollo rural.

La vereda El Convenio: cartografía de un territorio en disputa

La vereda El Convenio se ubica en el municipio de Líbano, en el norte del departamento del Tolima, una región históricamente marcada por la economía cafetera, la colonización antioqueña y los conflictos por la tenencia de la tierra. Geográficamente, el territorio se inscribe en la vertiente occidental de la cordillera Central, con altitudes que oscilan entre 1400 y 1900 metros sobre el nivel del mar, condiciones climáticas favorables para cultivos de piso térmico medio y una topografía quebrada que limita la mecanización y favorece la agricultura familiar de ladera. Durante gran parte del siglo XX, la vereda sostuvo un modelo productivo diversificado, en el que el café convivió con el plátano, el maíz, la yuca, los frutales y los sistemas de pastoreo rotacional, articulando producción comercial, autosuficiencia alimentaria y manejo comunitario de bosques y quebradas. Esta diversidad no fue solo agronómica, sino también ecológica, social y epistémica, sustentada en saberes transmitidos intergeneracionalmente sobre ciclos hídricos, asociación de cultivos, conservación de semillas y gestión colectiva del riesgo.

Sin embargo, a partir de la década del 2000, la inserción de la vereda en los circuitos globales de mercado, mediada por programas de inclusión financiera y microcrédito rural, reconfiguró profundamente sus dinámicas productivas y sociales. El acceso inicial al crédito permitió la renovación de cafetales, la adquisición de insumos agrícolas y la

mejora de infraestructura básica, lo que generó expectativas de modernización y movilidad social ascendente. Con el tiempo, estas expectativas se transformaron en una dependencia estructural. Las entidades financieras y los compradores de café exigieron especialización productiva, calendarios de entrega rígidos y garantías de pago que incentivaron la expansión del monocultivo cafetero y, más recientemente, del aguacate Hass. Esta reorientación no fue neutral, sino que desplazó progresivamente los cultivos de pancoger, redujo la diversidad del agroecosistema y aumentó la exposición a la volatilidad de los precios internacionales. La tierra, que antes funcionaba como soporte de la reproducción familiar y espacio de vida, se convirtió en activo financiero y garantía de deuda, lo que alteró las relaciones entre las familias, el territorio y los ciclos naturales.

Los datos catastrales y las encuestas aplicadas en el período 2023-2024 confirmaron una estructura agraria altamente fragmentada. El 60 % de los predios se clasificaron como minifundios (entre tres y nueve hectáreas) y el 20 %, como microfundios (menores a tres hectáreas); mientras que menos del 5 % superó las veinte hectáreas. Esta atomización, histórica en la región, se vio exacerbada por la subdivisión hereditaria y la presión inmobiliaria rural, lo que dificultó la generación de economías de escala y limitó la capacidad de inversión en tecnología propia. Las familias, atrapadas en extensiones reducidas, respondieron intensificando el uso del suelo para generar ingresos monetarios suficientes que cubrieran tanto el consumo familiar como el servicio de la deuda. Esta estrategia, aunque racional en el corto plazo, generó un ciclo de sobreexplotación que afectó la fertilidad del suelo, aumentó la dependencia de fertilizantes y pesticidas sintéticos, y aceleró la erosión en las laderas. El uso de leña para cocinar, predominante en el 78 % de los hogares, reflejó no solo la baja cobertura de servicios públicos, sino una presión adicional sobre los remanentes boscosos; esta situación recargó sobre las mujeres la doble jornada de cuidado doméstico y recolección de biomasa.

La composición familiar osciló entre tres y siete miembros, con jefes de hogar cuya escolaridad raramente superó el bachillerato. Esta condición no constituyó un déficit individual, sino un reflejo de la histórica precariedad de los servicios educativos rurales y la migración juvenil hacia centros urbanos en busca de alternativas laborales no agrícolas. La fuerza de trabajo fue esencialmente familiar, sin contratación externa, lo que garantizó la cohesión interna, pero limitó la capacidad de descanso, innovación o transición productiva. El 70 % de las familias destinó más del 40 % de sus ingresos netos anuales al servicio de la deuda, umbral que la literatura financiera identifica como trampa de insolvencia. Para cumplir con las cuotas, se adoptaron prácticas agrícolas de corto plazo, se redujo el tiempo dedicado a la preparación de alimentos propios y se internalizó la lógica del mercado como referente único de valor y éxito. La deuda dejó de ser un instrumento ocasional para convertirse en un reloj interno que marcó el ritmo de las cosechas, la selección de las semillas y hasta la distribución del trabajo doméstico.

No obstante, el territorio no permaneció pasivo. En medio de la presión crediticia y la degradación ambiental, aparecieron fisuras en el proceso de disciplinamiento financiero.

Prácticas de cooperación, intercambio no mercantil, recuperación de semillas criollas y organización colectiva para la gestión del agua y el manejo de residuos agrícolas comenzaron a tejerse en reuniones nocturnas, mingas de siembra y diálogos intergeneracionales. Estas experiencias, inicialmente dispersas, encontraron en la figura de los TECAM un marco político y organizativo que las articuló en un proyecto común de soberanía material. De esta manera, la vereda El Convenio no fue solo un escenario de despojo, sino un laboratorio de reexistencia, en el que la lucha contra la deuda se entrelazó con la regeneración ecológica, la recuperación de saberes y la construcción de alternativas productivas colectivas.

Estructura agraria y fragmentación predial: la base material del despojo financiero

La comprensión de las dinámicas de financiarización rural en la vereda El Convenio exige, como punto de partida analítico, la caracterización rigurosa de la estructura de tenencia de la tierra, que constituye el sustrato material sobre el cual se asientan las relaciones crediticias y mercantiles. Esta estructura no representa una variable contextual secundaria, sino el fundamento estructural que determina las posibilidades y las limitaciones de la reproducción campesina frente a las presiones del capital financiero.

La distribución de la propiedad privada en El Convenio revela un patrón de fragmentación extrema que trasciende la descripción estadística para configurarse como un mecanismo de vulnerabilidad sistémica. Como se documenta en la tabla 2, la ausencia total de grandes predios (mayores a doscientas hectáreas) y la participación marginal de propiedades medianas (menos del 5 % entre veintiuna y doscientas hectáreas) confirman la hipótesis de una estructura agraria predominantemente minifundista. El 80 % de las unidades productivas se concentra en la categoría de minifundio (predios entre tres y nueve hectáreas, que representan aproximadamente el 60 %) y microfundio (predios menores a tres hectáreas, que representan aproximadamente el 20 %), mientras que solo el 15 % restante logra superar el umbral de las diez hectáreas sin alcanzar tampoco economías de escala significativas.

Esta atomización predial no aparece por azar ni responde únicamente a condiciones naturales del territorio, sino que es el resultado histórico de procesos de colonización, subdivisión hereditaria, reformas agrarias inconclusas y presiones especulativas recientes que han fragmentado el territorio sin modificar las relaciones fundamentales de poder. La metodología de clasificación predial adaptada de Toledo et al. (2002), contrastada con el catastro municipal de Líbano y puesta en diálogo con la perspectiva histórico-ambiental de Argueta y Toledo (2023), permite abordar esta configuración más allá de la extensión física de los predios, atendiendo también a sus efectos socioecológicos. En ese sentido, la tabla 13 muestra que la tenencia de la tierra en la vereda El Convenio se concentra principalmente en rangos de minifundio y microfundio, lo que contribuye

a comprender cómo la fragmentación predial restringe la reproducción material de la vida campesina y aumenta la presión estructural sobre el territorio.

Tabla 13. Distribución de la tenencia de la tierra según rango de propiedad en la vereda El Convenio

Categoría	Extensión (ha)	Frecuencia relativa en la muestra
Grande	Mayor a 200 ha	0 %
Mediana	De 21 a 200 ha	< 5 %
Pequeña	De 10 a 20 ha	~15 %
Minifundio	De 3 a 9 ha	~60 %
Microfundio	Menor a 3 ha	~20 %

Nota: los datos provienen de encuestas aplicadas durante el trabajo de campo en la vereda El Convenio, entre noviembre del 2023 y junio del 2024. La categoría de minifundio concentra la mayoría de las unidades productivas familiares, lo que refleja una estructura agraria altamente fragmentada que limita economías de escala, incrementa la vulnerabilidad frente a *shocks* de mercado y facilita la subordinación financiera al impedir la acumulación de excedentes productivos.

Fuente: elaboración propia a partir de Toledo et al. (2002).

Análisis crítico de la fragmentación como mecanismo de subordinación

La concentración del 60 % de los predios en la categoría de minifundio (entre tres y nueve hectáreas) representa el eje central de la agricultura familiar en El Convenio, pero también su principal punto de vulnerabilidad estructural. Estas extensiones, aunque suficientes teóricamente para sostener una economía campesina diversificada bajo condiciones óptimas, operan en la práctica bajo múltiples restricciones que comprometen su viabilidad a largo plazo.

En primer lugar, la fragmentación impide la generación de economías de escala que permitan la mecanización apropiada, la inversión en infraestructura productiva compartida o la negociación colectiva de precios. Cada unidad productiva funciona como un circuito aislado de producción y reproducción, sin la capacidad de articular sinergias territoriales que podrían mitigar los efectos de la volatilidad de los mercados.

En segundo lugar, la presión demográfica y la subdivisión hereditaria han convertido a los microfundios (predios menores a tres hectáreas, que representan el 20 % de la muestra) en espacios de subsistencia precaria, donde la reproducción familiar exige estrategias pluriactivas que incluyen migración temporal, trabajo asalariado externo o dependencia creciente del microcrédito. Esta categoría representa el eslabón más

débil de la cadena de reproducción campesina, en el que la frontera entre agricultura familiar y proletarianización rural se desdibuja progresivamente.

En tercer lugar, la ausencia de predios medianos y grandes con orientación productiva socialmente responsable elimina la posibilidad de articulación interescalar, que podría generar dinámicas de desarrollo territorial endógeno. El vacío de esta categoría no representa una democratización de la tierra, sino una atomización que facilita el control financiero externo: al no existir actores locales con capacidad de acumulación e inversión significativa, el territorio queda expuesto a la penetración de capitales externos que operan mediante mecanismos de crédito y comercialización más que mediante apropiación directa de la tierra.

En cuarto lugar, la estructura fragmentada interactúa perversamente con la financiarización rural. Al evaluar el riesgo crediticio de unidades productivas atomizadas, las entidades financieras imponen tasas de interés más altas, garantías más estrictas y plazos más cortos, lo que refleja el mayor riesgo percibido en economías de escala reducida. Esto genera un círculo vicioso en el que la fragmentación aumenta el costo del crédito y el crédito costoso profundiza la vulnerabilidad que impide la consolidación predial.

En último lugar, desde una perspectiva socioecológica, la fragmentación extrema compromete la gestión colectiva de bienes comunes. Las quebradas, los bosques riparios, los corredores biológicos y las fuentes hídricas requieren una gestión territorial integrada que trasciende los límites prediales individuales. La atomización de la propiedad dificulta la coordinación necesaria para prácticas de conservación, restauración de cuencas y manejo sostenible de recursos, lo que genera externalidades negativas que afectan desproporcionadamente a los predios más pequeños y vulnerables.

La hipótesis que surge de este análisis es que la fragmentación predial en El Convenio no opera como un residuo del pasado premoderno, sino como una condición estructural funcional al capitalismo financiero contemporáneo. Al impedir la acumulación local, la inversión productiva autónoma y la organización territorial efectiva, la atomización de la propiedad facilita la subordinación de las economías campesinas a circuitos externos de valorización financiera. En este contexto, la tierra deja de ser un medio de producción para convertirse en una garantía colateral que habilita el acceso al crédito, pero que simultáneamente expone a las familias al riesgo de pérdida patrimonial mediante mecanismos de ejecución hipotecaria o venta forzada.

Esta comprensión dialéctica de la fragmentación —como condición histórica de resistencia campesina, pero también como vulnerabilidad estructural frente al capital financiero— es fundamental para comprender por qué los TECAM surgen no solo como propuesta productiva, sino como estrategia de reconfiguración territorial que busca superar la atomización mediante formas de organización colectiva que no requieren necesariamente la concentración de la propiedad, sino la articulación política y productiva de las unidades fragmentadas.

Operacionalización analítica: índices socioecológicos como traducción de la experiencia campesina

La propuesta de Toledo et al. (2002) resulta pertinente para este capítulo porque permite abordar las unidades rurales desde la tensión histórica entre campesinidad y agroindustrialidad. Su aporte radica en mostrar que una forma productiva no se comprende únicamente por el tamaño del predio o por el ingreso que genera, sino por la manera como organiza su relación con la tierra, la energía, el trabajo familiar, la diversidad, la autosuficiencia, los conocimientos locales y el mercado.

En El Convenio, esta matriz permite traducir la experiencia campesina en una lectura empírica más precisa. Por tanto, se construyeron cuatro índices socioecológicos: el Índice de Autosuficiencia Alimentaria, el Índice de Endeudamiento, el Índice de Sostenibilidad Ambiental y el Índice de Diversificación Productiva. Cada uno recoge una dimensión concreta de la vida rural: la capacidad de producir alimentos para el hogar, el peso de la deuda sobre la reproducción campesina, el estado ecológico de las prácticas productivas y el grado de diversidad económica del predio. En conjunto, estos índices permiten observar cómo la financiarización rural debilita la autonomía material del territorio y empuja a las familias campesinas hacia formas cada vez más dependientes de reproducción económica.

Para evitar que la complejidad de lo observado se diluyera en el relato, se operacionalizaron dichos índices socioecológicos derivados de la metodología de campesinidad-agroindustrialidad de Toledo et al. (2002), adaptados al contexto andino colombiano y validados mediante contrastación con fuentes oficiales y narrativas locales. Estos indicadores no se concibieron como métricas abstractas, sino como lentes analíticos que permitieron sistematizar patrones recurrentes en las prácticas productivas, los patrones de consumo y las estrategias de adaptación frente a la financiarización rural. Su cálculo arrojó un panorama que confirmó, con precisión empírica, lo que los líderes campesinos ya definían como “cansancio histórico”: una erosión progresiva de la autonomía productiva, alimentaria y epistémica, mediada por la subordinación a los ciclos financieros.

El Índice de Autosuficiencia Alimentaria (IAA) se situó en un promedio de 0,49, lo que indica que las familias produjeron menos de la mitad de los alimentos que consumieron. Este déficit no fue accidental, sino el resultado directo de la reorientación productiva hacia cultivos comerciales (café y aguacate), incentivada por el acceso al crédito y las exigencias de los intermediarios. La especialización en monocultivos para la exportación desplazó los sistemas diversificados de pancoger, lo que expuso a las familias a la inseguridad alimentaria y a la volatilidad de los mercados internacionales. La depen-

dencia de alimentos importados o comprados en centros urbanos cercanos incrementó la salida de divisas del territorio, debilitó la economía local y reforzó la necesidad de generar ingresos monetarios constantes, lo que alimentó el ciclo de endeudamiento. Esta dinámica confirmó lo que plantea Van der Ploeg (2010) sobre cómo los campesinos contemporáneos luchan por mantener su autonomía frente a los imperios alimentarios que buscan subordinar la producción local a las cadenas globales de valor.

El Índice de Endeudamiento (IE) superó el umbral crítico en siete de cada diez hogares, con una correlación directa entre el acceso a microcréditos y la disminución de la capacidad de ahorro familiar. La presión por pagar no solo reconfiguró el calendario agrícola, sino también la subjetividad. La obligación de cumplir con pagos periódicos introdujo una temporalidad específica que subordinó los ciclos naturales a los calendarios financieros, lo que generó una desincronización que se tradujo en la intensificación del trabajo, la adopción de prácticas productivas de corto plazo y la reducción de la diversidad agrícola. La tierra dejó de ser concebida como espacio de vida para convertirse en un medio de generación de ingresos orientado al servicio de la deuda. Como documenta Morales Zapata (2021) en contextos similares, esta subordinación financiera transformó la subjetividad campesina al internalizar la lógica del mercado y la culpa por el “fracaso” individual, ocultando las estructuras sistémicas de explotación que operan tras la aparente neutralidad del crédito.

El Índice de Sostenibilidad Ambiental (ISA) arrojó un promedio de 0,35, lo que refleja un deterioro significativo en las prácticas productivas. El uso intensivo de agroquímicos, incentivado por la necesidad de maximizar rendimientos a corto plazo para pagar las deudas, generó problemas de erosión del suelo, contaminación de fuentes hídricas y pérdida de biodiversidad. Esta degradación ecológica no fue un efecto colateral, sino una consecuencia inherente al modelo de agricultura industrializada promovida por la financiarización rural. Como argumenta Martínez Alier (2021), el ecologismo de los pobres surge precisamente como respuesta a esta injusticia ambiental, en la que las comunidades rurales cargan con los costos ecológicos de un modelo de desarrollo que beneficia a actores externos. En El Convenio, la pérdida de cobertura boscosa y la alteración de los ciclos hídricos afectaron directamente la resiliencia climática del territorio, aumentando la vulnerabilidad frente a eventos extremos como sequías e inundaciones.

El Índice de Diversificación Productiva (IDP) se mantuvo en 0,45, lo que evidencia la simplificación del agroecosistema como contrapartida de la subordinación financiera. Al reducir variedades, se aumentó la exposición a la volatilidad de precios y a plagas, creando un círculo vicioso que solo se rompía con más insumos externos. La fragmentación predial, lejos de ser un dato estático, operó como un amplificador de vulnerabilidad. Sin economías de escala, sin acceso a maquinaria compartida y con la fuerza de trabajo familiar al límite, la única vía visible para generar caja fue la intensificación química y la especialización comercial. El conocimiento ancestral sobre rotaciones,

asociación de cultivos y manejo de suelos persistió hasta que fue desplazado por los manuales de asistencia técnica que llegaron con el crédito.

Tabla 14. Especificación técnica de índices socioecológicos y ecuaciones de cálculo

Índice	Variable componente	Ecuación/fórmula de cálculo	Justificación teórica y fuente
Índice de Autosuficiencia Alimentaria (IAA)	Producción para autoconsumo (<i>Pac</i>) / Necesidad total familiar (<i>Ntf</i>)	$IAA = Pac/Ntf$, donde <i>Ntf</i> se estima con base en la escala de equivalente adulto propuesta por la FAO y la OMS	Mide la capacidad de la Unidad de Planeamiento Rural (UPR) para cubrir la demanda básica sin depender del mercado. Un valor <0,5 indica alta vulnerabilidad alimentaria (Altieri y Nicholls, 2017; Toledo et al., 2002).
Índice de Endeudamiento (IE)	Deuda total (<i>Dt</i>) / Ingreso anual neto (<i>Ian</i>)	$IE = (Dt/Ian) \times 100$, donde <i>Ian</i> = Ingresos - (<i>Cf</i> + <i>Gb</i>), <i>Cf</i> : Costos fijos y <i>Gb</i> : Gastos básicos	Evalúa la presión financiera. Un IE >40 % indica “trampa de deuda” y riesgo de insolvencia, lo que refleja la subordinación al capital financiero (Demirgüç-Kunt et al., 2020; Lazzarato, 2013).
Índice de Sostenibilidad Ambiental (ISA)	Uso de agroquímicos (<i>Aq</i>) / Prácticas conservacionistas (<i>Pc</i>)	$ISA = (Pc \times w1) - (Aq \times w2)$, pesos (<i>w</i>) asignados por impacto relativo	Integra el costo ecológico. Los valores bajos reflejan dependencia de insumos externos y deterioro de la base natural, típico de la agricultura industrializada (Toledo et al., 2002).
Índice de Diversificación Productiva (IDP)	Número de cultivos (<i>Nc</i>) / Actividades no agrícolas (<i>Ana</i>)	$IDP = (Nc + Ana)/Nmax$, normalizado entre 0 y 1	Mide la resiliencia económica. Una mayor diversificación reduce la exposición a <i>shocks</i> de precios de <i>commodities</i> (Toledo et al., 2002; Van der Ploeg, 2010).

información obtenida mediante encuestas aplicadas en la vereda El Convenio, en el período 2023-2024. Los pesos (*w*) en el ISA se asignaron mediante consenso técnico y validación comunitaria, priorizando el impacto en la fertilidad del suelo y la calidad hídrica.

Fuente: elaboración propia a partir de Toledo et al. (2019).

La integración de estos índices con las narrativas campesinas permitió construir una radiografía multidimensional de la crisis de reproducción social. La deuda operó como una tecnología de gobierno que produjo sujetos cronometrados, vigilantes de sus propias cosechas y obligados a acelerar lo que la tierra no podía dar sin degradarse.

Sin embargo, esta producción de subjetividad no fue total ni definitiva. Las fisuras en el proceso de disciplinamiento financiero se manifestaron en prácticas de cooperación, intercambio no mercantil y revalorización de saberes tradicionales, lo cual constituyó el punto de partida para el surgimiento de formas de resistencia que no se limitaron a la oposición, sino que construyeron alternativas concretas. En este sentido, los TE-CAM no surgieron como una propuesta externa, sino como expresión política de una reexistencia material que ya se tejía en la cotidianidad de la vereda.

Resultados socioecológicos sistematizados: la métrica del despojo y las fisuras de la autonomía

La cuantificación de los parámetros socioecológicos en la vereda El Convenio no operó como un ejercicio de medición neutra, sino como un dispositivo de traducción analítica que permitió visibilizar las interdependencias estructurales entre la financiarización rural, la degradación metabólica y la erosión de la autonomía campesina. Los índices calculados entre noviembre del 2023 y junio del 2024 no se presentaron como datos aislados, sino como nodos de una red de vulnerabilidad. La sistematización de estos resultados reveló que la crisis de reproducción en el norte del Tolima no fue un fenómeno coyuntural, sino una reconfiguración profunda de los modos de habitar, producir y significar el territorio.

Tabla 15. Resultados promedio de los parámetros evaluados en las unidades productivas rurales de El Convenio

Parámetro	Resultado	Interpretación crítica
Energía (E)	0,22	Baja eficiencia energética, alta dependencia de fuentes no renovables (leña)
Escala (ESC)	0,00	Capacidad nula de economía de escala, producción atomizada
Autosuficiencia (AUT)	0,49	Déficit alimentario estructural, dependencia >50 % del mercado externo
Fuerza detrabajo (FT)	1,00	Saturación de la mano de obra familiar, sin margen de expansión laboral
Diversidad (DIV)	0,45	Baja diversificación, predominio de monocultivos comerciales (café)
Productividad (PT)	0,40	Rendimientos bajos en relación con el esfuerzo laboral e insumos

Parámetro	Resultado	Interpretación crítica
Productividad energética (PE)	0,13	Ineficiencia extrema en la transformación de energía en valor económico
Conocimiento (CON)	0,50	Saberes tradicionales presentes pero desplazados por tecnicismos de mercado
Índice de campesinidad	0,40	Identidad campesina resistente pero erosionada por la lógica mercantil

Nota: datos obtenidos mediante encuestas aplicadas en la vereda El Convenio, en el período 2023-2024. Los valores se normalizaron entre 0 y 1 mediante escalas comparativas adaptadas a la metodología de Toledo et al. (2002).

Fuente: elaboración propia a partir de Toledo et al. (2002).

El parámetro de Energía ($E=0,22$) evidenció una dependencia estructural de la leña como combustible principal, reflejando no solo la ausencia de infraestructura pública, sino una externalización del costo reproductivo hacia los cuerpos y tiempos de las mujeres, quienes asumieron la recolección, el secado y el manejo de la biomasa. Esta carga se interseccionó con la saturación de la Fuerza de trabajo ($FT=1,00$), en la que la totalidad de la capacidad laboral familiar se destinó al mantenimiento del flujo de caja necesario para el servicio de la deuda. Es preciso señalar que no existió reserva productiva, margen de descanso ni espacio temporal para la experimentación agroecológica; de modo que la reproducción social se subordinó a la reproducción financiera.

La capacidad nula del parámetro de Escala ($ESC=0,00$) y el parámetro de Productividad energética ($PE=0,13$) confirmaron la inviabilidad metabólica del modelo vigente. La atomización predial, lejos de garantizar autonomía, operó como un mecanismo de encierro productivo que impidió la generación de sinergias colectivas, la mecanización apropiada y la inversión en infraestructura compartida. Cada unidad productiva funcionó como un circuito cerrado de extracción y pago, donde la energía invertida no se tradujo en valor retenido, sino en transferencia hacia eslabones externos de la cadena (entidades financieras, comercializadoras, distribuidores de insumos).

Los parámetros de Autosuficiencia ($AUT=0,49$) y de Diversidad ($DIV=0,45$) articulaban el núcleo del despojo metabólico. La reorientación productiva hacia café y aguacate Hass, exigida como garantía crediticia y condición de acceso a mercados, desplazó los sistemas de pancoger y fragmentó los agroecosistemas tradicionales. Las familias dejaron de ser productoras netas de cultivos de subsistencia para convertirse en compradoras netas de alimentos, utilizando los ingresos monetarios para adquirir arroz, aceite, leguminosas y proteínas procesadas en centros urbanos cercanos. Esta transformación no fue solo económica, sino también ecológica y epistémica. El suelo perdió su función de base reproductiva para convertirse en un activo financiero, mientras que los saberes locales fueron marginados.

El parámetro de Conocimiento (CON=0,50) capturó esta tensión dialéctica: los saberes agroecológicos y las prácticas de manejo comunitario del agua persistieron, pero operaron en la periferia de las decisiones productivas principales, relegados a huertos familiares o parcelas residuales. El Índice de campesinidad (0,40) sintetizó la crisis ontológica derivada de este entramado. Los habitantes se reconocían como campesinos, pero sus ritmos, decisiones y expectativas se alineaban con las exigencias del mercado y los calendarios financieros. En este punto, la resistencia dejó de ser exclusivamente material para volverse identitaria: recuperar la diversidad, la autosuficiencia y el tiempo agrícola no implicó solo un cambio técnico, sino una reafirmación existencial frente a la homogeneización impuesta por la financiarización.

No obstante, la métrica del despojo no fue total. En las mismas fincas donde los indicadores señalaban vulnerabilidad estructural, surgieron prácticas de cooperación, trueque de semillas, gestión colectiva de nacimientos de agua y diálogos intergeneracionales sobre soberanía alimentaria. Si bien estas fisuras no se tradujeron inmediatamente en índices elevados, constituyeron el sustrato material y simbólico desde el cual se gestó la articulación política de los TECAM. De modo que la cuantificación no cerró el análisis, sino que lo abrió hacia la dimensión política de la reproducción social.

Los TECAM como contrarracionalidad territorial y articulación multiescalar

Frente a la erosión metabólica y la subordinación financiera documentadas en la vereda El Convenio, el surgimiento de los Territorios Campesinos Agroalimentarios (TECAM) no respondió a un diseño institucional descendente, sino a un proceso de reexistencia política que se tejía en la cotidianidad de las mingas, las asambleas comunitarias y los recorridos por las fincas en transición. Los TECAM se configuraron como una contrarracionalidad territorial: un espacio donde la producción, la organización y la epistemología campesina se articularon para disputar el sentido del desarrollo rural y reconfigurar las relaciones entre sujeto, trabajo y naturaleza. A diferencia de los modelos de ordenamiento promovidos desde el Estado o el mercado, los TECAM no se limitaron a zonificar o regular el uso del suelo, sino que transformaron la lógica misma que sostenía la extracción y la dependencia.

Históricamente, las Zonas de Reserva Campesina (ZRC), establecidas bajo la Ley 160 de 1994, cumplieron un papel fundamental en la defensa del territorio frente al latifundio, la violencia armada y la especulación inmobiliaria. Sin embargo, durante el trabajo de campo en el período 2023-2024, los líderes comunitarios y las organizaciones de base señalaron una limitación funcional creciente: las ZRC priorizaron la tenencia, la planificación participativa y la conservación ambiental, pero no integraron de manera sistemática la dimensión productiva, financiera y comercial necesaria para enfrentar

la financiarización rural contemporánea. Los TECAM, impulsados por el Coordinador Nacional Agrario (CNA) y el Congreso de los Pueblos, surgieron como respuesta a esta brecha. Entonces, introdujeron una integralidad política que vinculó la defensa del territorio con la soberanía alimentaria, la agroecología como práctica epistémica y la economía solidaria como alternativa al microcrédito extractivo.

La diferencia no fue meramente programática, sino ontológica. Mientras las ZRC operaron como figuras de protección y ordenamiento, los TECAM se constituyeron como proyectos de reexistencia (Congreso de los Pueblos, 2022), es decir, como espacios donde la vida campesina se reconfiguraba desde la práctica colectiva, el diálogo de saberes y la autogestión metabólica. En El Convenio, las familias vinculadas a procesos incipientes de TECAM ya mostraban indicadores divergentes: un Índice de Autosuficiencia Alimentaria superior a 0,65, un Índice de Diversificación Productiva por encima de 0,70 y una reducción visible en el uso de agroquímicos. Estas diferencias no se explicaron por ventajas comparativas naturales, sino por la articulación de redes de intercambio no mercantil, la recuperación de semillas criollas, la organización de fondos rotatorios y la participación en ferias agroecológicas locales.

La potencia política de los TECAM residía, además, en su capacidad de articulación multiescalar. El territorio no se comprendió como un recinto aislado, sino como un nodo en una red de disputas globales por los sistemas agroalimentarios, la gestión de bienes comunes y la justicia climática. Las experiencias locales se conectaron con agendas nacionales mediante el CNA y el Congreso de los Pueblos, y con movimientos transnacionales de soberanía alimentaria que cuestionaban la financiarización, el acaparamiento de tierras y la homogeneización biocultural. Esta articulación no fue abstracta, sino que se materializó en intercambios de experiencias, la participación en encuentros regionales de agroecología, la denuncia colectiva de las asimetrías crediticias y la construcción de discursos públicos que desplazaron al campesino de la categoría de beneficiario por pobreza hacia la de gestor de soberanía material.

La dimensión de género y la generacional resultaron centrales en esta reconfiguración. Durante las sesiones de grupo y los recorridos por las fincas en el 2024, las mujeres jefas de hogar asumieron roles protagónicos en la gestión de bancos de semillas, la organización de mercados locales y la administración de fondos comunitarios. Por su parte, los jóvenes, anteriormente tentados por la migración urbana o la precarización laboral en centros comerciales, encontraron en la agroecología, la transformación artesanal de alimentos y la comunicación comunitaria un proyecto de vida viable y políticamente significativo. Esta recomposición del tejido social no fue un efecto secundario, sino el motor de la contrahegemonía territorial.

De esta manera, los TECAM no se presentaron como una alternativa perfecta ni como un modelo universalizable, sino como un horizonte político en construcción. Su fuerza residía en la capacidad de traducir la crisis metabólica en praxis colectiva, de transformar la deuda en organización y de convertir la fragmentación predial en comple-

mentariedad productiva. En el norte del Tolima, esta traducción ya estaba en marcha, y los indicadores sistematizados no hicieron más que validar empíricamente lo que la comunidad ya practicaba y nombraba.

Matriz de políticas públicas y proyecciones analíticas: hacia una soberanía material institucionalizada

Los hallazgos empíricos y la articulación política documentada en la vereda El Convenio exigieron una reorientación estructural de las políticas públicas rurales en Colombia. El modelo vigente, centrado en el subsidio a la demanda de insumos, la promoción del microcrédito individual y la transferencia tecnológica vertical demostró no solo insuficiencia, sino efectos contraproducentes como profundización del endeudamiento, erosión de la biodiversidad, dependencia comercial y fragmentación organizativa. Por tanto, la transición hacia la soberanía material requirió un cambio de paradigma que reconociera la agencia campesina, validara los saberes agroecológicos y redirigiera los recursos públicos hacia la regeneración socioecológica y la autonomía productiva.

En la tabla 16, se sintetizan las tensiones entre el enfoque institucional actual y las propuestas que surgen desde los TECAM. Esta matriz se construyó a partir de talleres participativos realizados entre marzo y mayo del 2024 con líderes comunitarios, técnicos locales y representantes del CNA; además, no se concibió como un documento de planificación externa, sino como una traducción analítica de demandas que ya circulaban en el territorio.

Tabla 16. Matriz de reconfiguración de políticas públicas para los TECAM

Eje estratégico	Enfoque actual (crítica)	Propuesta desde los TECAM (soberanía material)
Financiamiento	Microcrédito individual con altas tasas, exigencia del monocultivo como garantía	Fondos rotatorios comunitarios, crédito blando indexado a ciclos agroecológicos, subsidio a la transición, no a la producción química
Asistencia técnica	Transferencia tecnológica vertical (paquetes químicos), enfoque productivista	Diálogo de saberes; acompañamiento en agroecología, manejo de suelos y conservación de agua; enfoque ecosistémico
Comercialización	Dependencia de intermediarios y precios internacionales volátiles	Circuitos cortos de comercialización, compras públicas locales (PAE), ferias agroecológicas, valor agregado comunitario

Eje estratégico	Enfoque actual (crítica)	Propuesta desde los TECAM (soberanía material)
Ordenamiento territorial	Zonificación basada en una vocación extractiva, permisividad con la expansión de la frontera agrícola	Zonificación agroecológica participativa, protección de nacimientos de agua, corredores biológicos campesinos
Gobernanza	Decisiones centralizadas en entidades estatales, participación simbólica	Mesas técnicas vinculantes con organizaciones campesinas (CNA, Congreso de los Pueblos), gestión comunitaria del riesgo

Nota: información obtenida mediante talleres participativos realizados con la comunidad de El Convenio.

Fuente: elaboración propia a partir de Noriega (2024), Congreso de los Pueblos (2022) y Duarte et al. (2024).

La viabilidad de los TECAM no dependió únicamente de la voluntad organizativa de las comunidades, sino de una articulación institucional que dejara de tratar la agricultura familiar como un residuo del desarrollo para reconocerla como un proyecto civilizatorio. En este sentido, las proyecciones analíticas derivadas del caso del norte del Tolima apuntaron hacia cinco transformaciones estructurales:

1. *Reconocimiento jurídico y presupuestal de los TECAM como figuras centrales de la planificación rural:* Esto implicó superar la lógica de la Ley 160 de 1994 y avanzar hacia una normativa específica que integrara las dimensiones productiva, ecológica y política de estos territorios, tal como lo plantearon Duarte et al. (2024) y la Agencia Nacional de Tierras (2025). El presupuesto no se destinó a subsidios temporales, sino a fondos estructurales para la transición agroecológica, la infraestructura comunitaria y la formación técnica horizontal.
2. *Consolidación de la transición agroecológica como política de Estado:* Los programas de asistencia técnica reemplazaron el modelo de transferencia vertical por enfoques basados en el diálogo de saberes, el acompañamiento en manejo regenerativo de suelos, la conservación de microcuencas y la recuperación de semillas nativas. Esta reorientación no fue técnica, sino epistémica. Reconoció que el conocimiento campesino no era un déficit por suplir, sino un patrimonio a escalar colectivamente (FAO, 2022).
3. *Diseño de instrumentos financieros no extractivos:* El microcrédito tradicional se sustituyó por fondos rotatorios comunitarios, créditos blandos con tasas indexadas a la capacidad de pago real y períodos de gracia acordes a los ciclos biológicos, y esquemas de pago por servicios ambientales que reconocieran el aporte de los campesinos a la regulación hídrica, la captura de carbono y la conservación de la biodiversidad (Borras y Franco, 2012; Lazzarato, 2013). La deuda dejó de ser un dispositivo de disciplina para convertirse en un mecanismo de coinversión comunitaria.

4. *Construcción de mercados institucionales y circuitos cortos de comercialización*: El Estado lideró compras públicas para el Programa de Alimentación Escolar (PAE), ferias locales y sistemas de distribución comunitaria, garantizando precios justos, estables y desvinculados de la volatilidad de los *commodities*. Esta estrategia redujo la intermediación, retuvo el valor económico en el territorio y fortaleció la economía solidaria como eje de reproducción social (Congreso de los Pueblos, 2022).
5. *Gobernanza participativa y ordenamiento territorial vinculante*: Las decisiones sobre el uso del suelo, la gestión del riesgo climático y la protección de ecosistemas estratégicos se descentralizaron hacia mesas técnicas en las que las organizaciones campesinas tuvieron voz y voto. La planificación territorial se alineó con la vocación agroecológica, la restauración de cuencas y la creación de corredores biológicos campesinos, integrando la mitigación y la adaptación climática como componentes estructurales de la política rural (IDEAM, 2023).

La implementación incipiente de estas propuestas en El Convenio ya ha dado resultados empíricos. Las familias que lograron acceder a mercados locales, reducir el uso de insumos externos y participar en fondos rotatorios reportaron un aumento sostenido en sus índices de autosuficiencia, una disminución progresiva en la carga de deuda y una recuperación visible de la fertilidad del suelo y la biodiversidad asociada. Estos resultados no validaron un modelo idealizado, sino que confirmaron que la soberanía material se construyó en la práctica mediante procesos colectivos que articularon conocimiento, organización y disputa política.

El horizonte derivado de este análisis no fue una utopía, sino una alternativa concreta. Los TECAM no representaron una huida del mercado, sino una reconfiguración de sus lógicas; no significaron aislamiento, sino autonomía relacional; no implicaron romanticismo rural, sino praxis histórica. En el norte del Tolima, y particularmente en la vereda El Convenio, la transición de la trampa de la deuda hacia la soberanía material ya estaba en marcha, y su proyección institucional dependió de la voluntad política de reconocer que otro campo no solo es posible, sino necesario.

Síntesis crítica y horizonte civilizatorio: totalidad, mediaciones y reexistencia

La integración de los elementos analizados a lo largo de este capítulo —la financiarización rural, la fragmentación predial, la erosión metabólica, la producción de subjetividad endeudada y el surgimiento de los TECAM— permite avanzar hacia una síntesis crítica en la que dichos fenómenos se comprenden no como eventos aislados, sino como

momentos dialécticos de una misma totalidad histórica. Esta totalidad no constituye una abstracción teórica, sino una configuración concreta en la que interactúan múltiples mediaciones: económicas (acceso al crédito, precios de *commodities*), políticas (marcos normativos, gobernanza territorial), ecológicas (ciclos hídricos, fertilidad del suelo) y culturales (saberes campesinos, identidad colectiva). Reconocer esta multiterminación no diluye el análisis; por el contrario, lo potencia, permitiendo captar la complejidad del reordenamiento territorial en contextos latinoamericanos sin caer en reduccionismos economicistas ni romanticismos rurales.

El enfoque adoptado en este cierre analítico se distancia explícitamente de cualquier lectura unilateral. La financiarización no operó en El Convenio como una fuerza externa que solamente impactó a las comunidades, sino que se asentó sobre las **relaciones** de poder preexistentes, se articuló con prácticas locales de adaptación y encontró resistencias que, a su vez, reconfiguraron sus efectos. De manera análoga, los TECAM no surgieron como una respuesta mecánica al despojo, sino como un proyecto político en construcción, tejido en la cotidianidad de las mingas, las asambleas y los diálogos intergeneracionales. Esta comprensión dialéctica exige articular tradiciones teóricas diversas —la ecología política agraria, los estudios sobre biopolítica financiera, la teoría de la territorialidad campesina— en función de un objeto común: la disputa por la reproducción social en territorios rurales subalternizados.

Soberanía material como praxis histórica

La noción de soberanía material, desarrollada a lo largo de esta obra, adquiere en este punto de síntesis un significado preciso y operativo. No se limita al control formal de los recursos ni a la titularidad jurídica de la tierra, sino que implica la capacidad efectiva de las comunidades para definir sus propios modos de vida, sus prácticas productivas y sus horizontes de futuro, sin subordinación estructural a las lógicas de acumulación del capital. Esta soberanía no se decreta, sino que se construye en la práctica mediante procesos colectivos que articulan conocimiento situado, organización política y acción transformadora.

En la vereda El Convenio, la soberanía material se manifestó en gestos concretos: la recuperación de semillas criollas guardadas en recipientes de barro, la organización de fondos rotatorios administrados por asambleas comunitarias, la decisión colectiva de no sembrar lo que envenena la tierra ni vender lo que no beneficia a la comunidad. Estas prácticas no fueron marginales, sino que constituyeron el sustrato desde el cual se gestó la articulación política de los TECAM. La soberanía, así entendida, no implicó aislamiento ni autarquía, sino que significó autonomía relacional: la capacidad de interactuar con mercados, instituciones y tecnologías desde posiciones de fuerza colectiva y criterios propios de valor.

Los TECAM como anticipación de mundos posibles

En este análisis, los Territorios Campesinos Agroalimentarios (TECAM) no representaron una propuesta de política pública más, sino que funcionaron como anticipaciones concretas de formas alternativas de organización social. En ellos se prefiguró un modelo de desarrollo rural en el que la producción no se subordinó a la extracción de valor, el conocimiento campesino no fue marginado como déficit y la relación con la naturaleza no se redujo a la explotación de recursos. Los TECAM operaron como laboratorios de soberanía material, espacios donde se restableció la relación dialéctica entre sujeto, trabajo y naturaleza, y donde la lucha contra la deuda se entrelazó con la regeneración ecológica y la reafirmación identitaria.

Esta dimensión prefigurativa no fue utópica, sino histórica. Las experiencias documentadas en El Convenio mostraron que otra ruralidad era posible no en un futuro lejano, sino en el presente de la praxis colectiva. Las familias que lograron transitar hacia modelos agroecológicos, circuitos cortos de comercialización y gobernanza participativa reportaron no solo mejoras en sus indicadores socioeconómicos, sino una recuperación del sentido de agencia, pertenencia y dignidad. En este marco, la resistencia dejó de ser únicamente reactiva para volverse creadora: no se limitó a oponerse al despojo, sino que construyó alternativas viables desde abajo.

Límites, tensiones y desafíos pendientes

Reconocer el potencial transformador de los TECAM no implicó ignorar sus límites estructurales. Durante el trabajo de campo realizado en el período 2023-2024, los líderes comunitarios señalaron con claridad los obstáculos que enfrentaban: la falta de reconocimiento jurídico pleno, la competencia desleal con el agronegocio subsidiado, la persistencia de lógicas asistencialistas en las instituciones públicas y la fatiga organizativa derivada de décadas de luchas sin victorias contundentes. Estos desafíos no fueron coyunturales, sino que reflejaron asimetrías de poder profundamente arraigadas en el modelo de desarrollo rural colombiano.

Además, la propia articulación interna de los TECAM presentó tensiones. La diversidad de intereses entre familias, la distribución desigual de cargas y beneficios, y los conflictos generacionales o de género requirieron procesos continuos de diálogo, negociación y aprendizaje colectivo. La soberanía material no fue un estado alcanzado, sino un horizonte en disputa, construido día a día mediante prácticas de cuidado mutuo, rendición de cuentas y reinversión política. Reconocer estas tensiones no debilitó el análisis, sino que lo hizo más riguroso, lo que evitó idealizaciones que hubieran oscurecido la complejidad real de los procesos de transformación social.

La lucha por la tierra es la lucha por la vida

En última instancia, el análisis desarrollado en este capítulo permitió sostener que las resistencias campesinas en el norte del Tolima no fueron expresiones marginales, sino anticipaciones de formas alternativas de organización social. En ellas se encontró no solo la defensa del territorio, sino la posibilidad de imaginar y construir otros mundos posibles. La lucha por la tierra, constatada una vez más, se tradujo en una lucha por la vida: por la capacidad de reproducir la existencia sin someterse a la lógica de acumulación que exige la mercantilización integral de los recursos. La experiencia de la vereda El Convenio iluminó este camino. Mostró que la resistencia fue también creación y que la soberanía alimentaria fue la base de toda soberanía verdadera.

Este libro concluye no con una clausura definitiva, sino con una invitación a la disputa. La soberanía material no se garantizó por decreto, sino que se construyó en la práctica mediante procesos colectivos que articularon conocimiento, organización y acción política. Los TECAM no fueron un modelo exportable, sino un horizonte político concreto, un territorio donde la agricultura familiar, la justicia ecológica y la autonomía organizativa dejaron de ser promesas para convertirse en praxis de resistencia y creación. En esa praxis, y solo en ella, se encontró la posibilidad de un futuro en el que el territorio fuera un espacio de convivencia sostenible, dignidad campesina y justicia social.

Conclusiones

Hacia un futuro de soberanía y justicia territorial

El recorrido analítico de esta obra —desde los fundamentos teóricos de la justicia epistémica y la resistencia ontológica, pasando por la caracterización biofísica y socioeconómica del norte del Tolima, hasta el estudio de caso de la vereda El Convenio— permitió sacar conclusiones que cierran el ciclo argumentativo y proyectan horizontes de acción. Estas conclusiones no se presentan como verdades definitivas, sino como síntesis provisionales abiertas a la disputa política y la validación comunitaria.

Acerca de la financiarización como mecanismo de despojo contemporáneo, la deuda y el microcrédito operaron en el norte del Tolima no como herramientas de emancipación, sino como dispositivos sofisticados de acumulación por desposesión. Subordinaron la autonomía campesina a las lógicas del capital global, erosionaron las bases materiales y subjetivas de la agricultura familiar, y reconfiguraron los ritmos agrícolas, los patrones de consumo y las expectativas de futuro. Esta financiarización no fue un fenómeno abstracto, sino que se midió en índices y se vivió en el cansancio, la pérdida de semillas, la transformación del calendario agrícola y la internalización de la culpa por el “fracaso” individual.

Con respecto a la insostenibilidad estructural del modelo agroindustrial, la especialización en monocultivos, incentivada por el mercado y el crédito, generó degradación ecológica, pérdida de biodiversidad y vulnerabilidad económica, lo que demostró la inviabilidad a largo plazo del modelo extractivista en la región andina. El Índice de Sostenibilidad Ambiental (ISA=0,35) y el Índice de Diversificación Productiva (IDP=0,45) no fueron datos técnicos, sino traducciones numéricas de quebradas turbias, suelos compactados y agrosistemas simplificados. La crisis de reproducción no fue solo económica, sino ecológica y epistémica; de modo que comprometió las condiciones mismas de existencia en el territorio.

En cuanto a los TECAM como alternativa viable y necesaria, estos surgieron como la propuesta más integral y prometedora para la transformación del campo colombiano. Al integrar la defensa del territorio, la agroecología, la soberanía alimentaria y la economía solidaria, los TECAM ofrecieron un camino hacia un desarrollo rural justo, sostenible y autónomo. Las familias vinculadas a procesos incipientes de TECAM mostraron indicadores divergentes: IAA > 0,65, IDP > 0,70 y reducción visible en el uso de agroquímicos. Estas diferencias no se explicaron por ventajas naturales, sino por la articulación de redes de intercambio no mercantil, la recuperación de saberes locales y la organización colectiva para la gestión de bienes comunes.

En relación con la urgencia de una reforma institucional profunda, para que los TECAM florecieran, fue indispensable una reorientación estructural de las políticas públicas rurales. El modelo vigente, centrado en el subsidio a la demanda de insumos y el fomento del microcrédito individual, demostró no solo insuficiencia, sino efectos contraproducentes. La transición hacia la soberanía material requirió reconocer la agencia campesina, validar los saberes agroecológicos y redirigir los recursos públicos hacia la regeneración socioecológica y la autonomía productiva. Las recomendaciones estratégicas sintetizadas en la matriz de reconfiguración de políticas públicas para los TECAM (tabla 16) no fueron propuestas externas, sino que tradujeron demandas que ya circulaban en el territorio.

Soberanía material y disputa por las formas de vida: una síntesis ontológica, epistemológica y política

El recorrido desarrollado en esta obra no puede leerse como una simple acumulación de capítulos ni como una secuencia lineal de análisis sobre la financiarización rural. Lo que aquí se ha puesto en juego es, más bien, una indagación progresiva sobre las formas en que el territorio, la vida y el trabajo se reconfiguran bajo condiciones históricas específicas, en las que el capital financiero no solo interviene la producción, sino que penetra las condiciones mismas de existencia del campesinado.

Desde esta perspectiva, la deuda deja de ser un hecho exterior a la vida campesina sujeto a los procesos de modernización de la vida rural. Su fuerza histórica reside en que reorganiza tiempos, prioridades, expectativas y vínculos comunitarios. En este sentido, el crédito promete liquidez inmediata, pero instala una forma de obediencia cotidiana; esto es, obliga a sembrar pensando en el pago, a vender antes de decidir, a reducir la diversidad productiva y a convertir el futuro familiar en garantía del ciclo financiero. Allí, la financiarización adquiere una densidad ontológica porque altera la manera en que las familias campesinas habitan el territorio y proyectan su permanencia en él. En términos lukácsianos, la relación social aparece bajo la forma de una cosa: cuota, obligación, tasa, vencimiento. Esa cosificación encubre el trabajo vivo, los saberes locales y la trama comunitaria que hacen posible la reproducción rural (Lukács, 1969; Quintero Castaño y Garcés Pulido, 2023).

Desde los primeros planteamientos teóricos hasta el anclaje empírico en la vereda El Convenio, el texto ha transitado por distintas escalas de análisis que, lejos de fragmentarse, se han ido articulando en una comprensión más amplia de la cuestión agraria contemporánea. En ese tránsito, categorías como territorio, subjetividad, deuda, reproducción social y soberanía han dejado de operar como conceptos aislados para

revelar su carácter relacional, es decir, su pertenencia a una totalidad en movimiento, atravesada por tensiones, contradicciones y disputas.

Esa totalidad no se presenta como una abstracción vacía, sino que se materializa en caminos veredales, parcelas fragmentadas, deudas acumuladas, cuerpos cansados, quebradas deterioradas, reuniones comunitarias y decisiones productivas tomadas bajo presión dentro de una subjetividad metabolizada por la deuda (Quintero Castaño y Garcés Pulido, 2023). Por tanto, el territorio debe pensarse como una mediación histórica donde se cruzan técnica, norma, mercado, memoria y vida cotidiana. Milton Santos (2000) contribuye a comprender esta articulación al concebir el espacio como una totalidad concreta compuesta por sistemas de objetos y sistemas de acciones. Desde esa clave, el norte del Tolima aparece como un territorio producido por relaciones desiguales entre infraestructura, crédito, propiedad, instituciones y prácticas campesinas. De modo que la soberanía material no remite a una consigna general, sino a la capacidad situada de intervenir en esas mediaciones para recuperar margen de decisión sobre la vida común.

Por consiguiente, no se trata de cerrar el análisis en el sentido convencional del término. No hay aquí una clausura definitiva ni una síntesis que pretenda agotar el fenómeno estudiado. Por el contrario, estas conclusiones se proponen como un momento de condensación reflexiva en el que los hilos desarrollados a lo largo del libro se rearticulan para hacer visible aquello que, en el despliegue mismo del texto, se ha ido configurando: la financiarización como forma histórica de reorganización de la vida rural, pero también la persistencia de prácticas que, en condiciones adversas, disputan ese orden y abren posibilidades de recomposición.

En este sentido, el cierre que aquí se plantea no se limita a resumir resultados ni a reiterar argumentos ya expuestos. Más bien, busca explicitar las implicaciones ontológicas, epistemológicas y políticas que se desprenden del análisis realizado. Esto implica asumir que lo que está en juego no es únicamente la transformación de las economías rurales, sino la forma misma en que se organiza la vida en los territorios, las condiciones bajo las cuales se reproduce y los sentidos que orientan dicha reproducción.

El conocimiento producido en este libro también participa de esa disputa. Si el dato rural se separa de las voces campesinas, corre el riesgo de convertirse en una nueva forma de abstracción administrativa; si la experiencia se presenta sin mediaciones estructurales, puede quedar reducida a un testimonio aislado. La tarea metodológica consistió en sostener ambas dimensiones: escuchar la experiencia situada y, al mismo tiempo, reconstruir las condiciones históricas que la producen. En este punto, la crítica habermasiana a la separación entre conocimiento e interés permite recordar que toda investigación social está atravesada por orientaciones prácticas, técnicas o emancipatorias; en este caso, el interés que orienta la investigación es la comprensión crítica de las condiciones que impiden o posibilitan la autonomía campesina (Habermas, 2023).

Entonces, las siguientes páginas deben leerse como una síntesis en tensión, no como un punto final, sino como un momento en el que el análisis se repliega sobre sí mismo para hacer visibles sus propias condiciones, alcances y límites. Es desde esa posición que se propone una lectura de la soberanía material no como consigna ni como categoría abstracta, sino como un proceso concreto, situado y contradictorio, en el que se juega, de manera abierta, la disputa por el territorio y por la vida.

Financiarización como forma histórica de reorganización de la vida rural

Lo desarrollado a lo largo de esta obra permite sostener que la financiarización del espacio rural en la región andina no puede reducirse a un fenómeno económico circunscrito al crédito o a los mercados financieros. Se trata, más bien, de una forma histórica de reorganización de la vida social que interviene simultáneamente el territorio, el trabajo y la subjetividad. Sin embargo, este proceso no se despliega de manera homogénea ni lineal, sino que avanza entre fricciones, negociaciones y adaptaciones que evidencian tanto su fuerza estructurante como sus límites.

En este marco, la deuda deja de operar como un instrumento externo para convertirse en una mediación que penetra la vida cotidiana. No solo organiza la producción, sino que reorganiza el tiempo: impone calendarios, redefine prioridades y desplaza progresivamente los ritmos ecológicos que han orientado históricamente la vida campesina. Como advierte David Harvey (2014), estos procesos no solo capturan valor, sino que reconfiguran las condiciones mismas de la reproducción social. Pero esa captura nunca es total. Allí donde se impone, también genera fisuras.

El territorio como totalidad socioecológica en disputa

A lo largo del libro se ha insistido en que el territorio no es un contenedor neutro ni simplemente un soporte de actividades productivas, sino una totalidad socioecológica en la que se entrelazan prácticas, saberes, relaciones de poder y formas de vida (Escobar, 2014; Lefebvre, 1991). Por tanto, comprenderlo exige ir más allá de su dimensión física.

La financiarización no despoja únicamente mediante la pérdida directa de la tierra. También lo hace transformando las condiciones bajo las cuales esa tierra puede ser habitada. La fragmentación predial, la presión del monocultivo, la dependencia de insumos externos y la lógica del crédito no son fenómenos aislados, sino expresiones de una misma reorganización territorial. No obstante, el territorio no desaparece bajo esa presión, sino que se tensiona, se reconfigura y, en ciertos momentos, se reapropia.

Deuda, subjetividad y temporalidad: la internalización de la racionalidad financiera

Uno de los hallazgos más significativos del análisis radica en la forma en que la deuda se internaliza en la racionalidad campesina. Más que permanecer como una obligación externa, se vuelve criterio, medida y horizonte. Las decisiones productivas, las expectativas familiares y los imaginarios de éxito comienzan a organizarse en función del cumplimiento financiero. Como sugiere Bourdieu (2007), estos procesos no operan únicamente en el plano estructural, sino que se inscriben en las disposiciones, los hábitos y las formas de percibir lo posible.

En la experiencia campesina, esa interiorización adquiere una textura particular. La deuda no llega solamente como contrato, cuota o tasa de interés, sino que entra en la casa, en la conversación familiar, en la decisión sobre qué sembrar, en la espera de la cosecha, en la venta anticipada, en la renuncia a ciertos consumos y en la sensación persistente de estar respondiendo ante alguien más. Quintero Castaño y Garcés Pulido (2023) permiten precisar este punto al mostrar que el crédito, en contextos rurales colombianos, participa en la producción de una subjetividad campesina subalternizada y atravesada por la responsabilidad individual, la culpa, la promesa de solvencia y la subordinación a lógicas de microfinanciarización. Desde esta perspectiva, el campesino endeudado aparece como un sujeto obligado a reorganizar su tiempo, su conducta y su proyecto de vida alrededor de un pago determinado por la racionalidad agroindustrial.

Esta transformación afecta de manera directa la temporalidad rural en todos los modos de vida. El tiempo campesino —antes más ligado a los ciclos de la tierra, la lluvia, la semilla, el cuidado animal y la reproducción familiar— empieza a quedar atravesado por vencimientos, intereses, renovaciones de crédito y presión institucional. La espera deja de pertenecer plenamente al ritmo de la cosecha y comienza a depender del calendario financiero. Allí se produce una fractura profunda: el futuro deja de imaginarse como continuidad de la vida familiar en el territorio y empieza a vivirse como una obligación anticipada. La deuda captura parte del porvenir y lo convierte en compromiso de pago.

Sin embargo, incluso en ese escenario, persisten formas de valoración que no se reducen al cálculo financiero. La ayuda entre vecinos, el cultivo para el autoconsumo, la conservación de semillas, la memoria del trabajo familiar y la defensa de la tierra como lugar de vida mantienen vigente una racionalidad distinta. Esa persistencia no elimina la subordinación, pero muestra que la subjetividad campesina no queda completamente absorbida por la deuda. En medio de la presión financiera, las comunidades siguen produciendo sentidos, afectos y prácticas que desbordan la medida del crédito. Allí se sostiene una parte decisiva de la resistencia: en la capacidad de conservar criterios de vida que el mercado no logra traducir del todo a deuda, rentabilidad o solvencia.

Surgimiento de prácticas de reexistencia y racionalidades alternativas

Las experiencias analizadas en la vereda El Convenio permiten observar que la financiarización no logra clausurar el campo de posibilidades. En medio de la presión estructural, surgen prácticas que no solo resisten, sino que reconfiguran activamente el territorio.

La agroecología, la recuperación de semillas, los circuitos cortos de comercialización y las formas colectivas de trabajo no pueden ser leídas como respuestas marginales o transitorias. Más bien, constituyen expresiones de racionalidades alternativas que disputan el sentido de la producción y de la vida (Altieri y Toledo, 2011). No se trata de idealizar estas prácticas, que son frágiles, contradictorias e inestables, pero que existen. Y en su existencia abren posibilidades que desbordan la lógica dominante.

Soberanía material: categoría analítica y horizonte político

La noción de soberanía material, tal como se ha trabajado en este libro, no remite a una condición ya conquistada ni a un punto final del proceso campesino. En cambio, nombra una capacidad siempre disputada; esto es, puede ampliarse, erosionarse, recuperarse parcialmente o quedar capturada por relaciones externas de mercado, deuda, propiedad y poder institucional. Hablar de soberanía material implica preguntarse quién define las condiciones reales de reproducción de la vida campesina, con relación a qué se produce, con qué recursos, bajo qué tiempos, para quién, bajo qué criterios y con cuánto margen de decisión frente a las exigencias del capital.

Desde esta perspectiva, los Territorios Campesinos Agroalimentarios (TECAM) adquieren una densidad política mayor y, por tanto, representan una visión que sobrepasa la figura organizativa añadida al territorio o de instrumento administrativo de planificación rural concebida por los discursos de la trama institucional. Los TECAM funcionan como mediaciones históricas por medio de las cuales las comunidades buscan recomponer vínculos fracturados con la tierra, el agua, las semillas, el trabajo familiar, los saberes locales y los circuitos alimentarios. Su potencia radica en abrir una posibilidad concreta de reorganización territorial allí donde la financiarización, la deuda y la presión agroindustrial han reducido la vida campesina a capacidad de pago, productividad inmediata y adaptación forzada.

Una lectura marxista permite ampliar esta discusión más allá de las perspectivas ya abordadas en el texto. El problema de fondo no está solamente en la pérdida de tierra

o en la precariedad del ingreso, aunque ambos sean decisivos. La contradicción central aparece cuando las condiciones que sostienen la vida —suelo, agua, semillas, trabajo, tiempo familiar y cooperación comunitaria— quedan subordinadas a formas abstractas de valorización. La tierra deja de ser el medio de reproducción social y pasa a ser tratada como activo, garantía, mercancía o superficie disponible para la rentabilidad. En esa operación, el capital no se apropia únicamente de bienes materiales, sino que reorganiza los tiempos, las prioridades y las posibilidades mismas de permanencia campesina.

A partir de Marx (2008), esta tensión puede leerse como una forma ampliada de subsumción de la vida rural bajo la lógica del valor. La visión lukácsiana (Lukacs, 1969) permite comprender cómo las relaciones vivas entre personas, naturaleza y comunidad aparecen bajo formas cosificadas: avalúo, deuda, cuota, tasa, garantía, productividad, riesgo. Lo que en la experiencia campesina es memoria, trabajo concreto, cuidado, reciprocidad y permanencia, en el lenguaje del mercado aparece reducido a magnitudes administrables. Allí, la soberanía material adquiere su alcance más fuerte: disputar la forma social bajo la cual el territorio es pensado, medido y gobernado.

Por tanto, los TECAM no deben entenderse como una respuesta meramente defensiva o como un artificio carente de sentido. Su dimensión política consiste en abrir una mediación alternativa frente a la racionalidad del capital, de naturaleza rentista y especulativa, para pensar el territorio desde la reproducción de la vida y no desde la rentabilidad inmediata. En estos se cruzan la organización comunitaria, la agroecología, la soberanía alimentaria, la defensa de los bienes comunes y la reconstrucción de vínculos productivos. La soberanía material se juega precisamente en esa capacidad de recuperar el control sobre las mediaciones concretas de la existencia rural: tierra suficiente, agua protegida, semillas disponibles, diversificación productiva, trabajo comunitario, circuitos cortos y tiempo social no absorbido por la urgencia permanente del pago.

Implicaciones epistemológicas: hacia una crítica de la neutralidad en el análisis rural

El recorrido realizado cuestiona la idea de un conocimiento neutral y externo a la realidad que describe. La separación entre dato y experiencia, entre estructura y subjetividad, se revela insuficiente para comprender procesos que operan precisamente en su articulación.

El conocimiento que aquí se construye se sitúa en esa intersección. No observa desde fuera, sino que se construye en relación con las prácticas, las narrativas y las tensiones del territorio. Bajo esta perspectiva, el rigor no se mide por la distancia, sino por la capacidad de hacer visibles las mediaciones que estructuran la realidad (Lukács, 1969).

Apertura política: más allá del desarrollo rural hegemónico

Las políticas de desarrollo rural basadas en la integración al mercado, la expansión del crédito y la modernización productiva han sido presentadas durante décadas como caminos casi inevitables. Bajo ese lenguaje, el campesinado recibe el llamado a adaptarse y, por tanto, a producir más, endeudarse mejor, especializarse, tecnificarse y competir. Sin embargo, la evidencia analizada en este libro muestra los límites de esa promesa. Allí donde se anunciaba inclusión, muchas veces aparece la dependencia; donde se ofrecía autonomía, surge la subordinación financiera, y donde se prometía modernización, se profundiza la fragilidad de la vida campesina.

Desde una lectura gramsciana, este modelo no actúa únicamente mediante políticas, programas o instrumentos económicos, sino que también opera como una forma de hegemonía (Gramsci, 2011). Esto significa que produce una idea de desarrollo que se vuelve sentido común y define qué prácticas son consideradas atrasadas o modernas, qué sujetos aparecen como productivos y qué formas de vida quedan relegadas al margen. Por eso, la disputa campesina no se reduce a resistir una política rural específica, sino que implica cuestionar la dirección moral, cultural y económica que ha presentado la subordinación al mercado como el destino natural del campo. En ese terreno, las experiencias campesinas no ofrecen recetas universales ni soluciones cerradas. Su fuerza está en otra parte, en la posibilidad de mostrar que la producción, la tierra, el alimento y la vida comunitaria pueden organizarse bajo criterios distintos a la rentabilidad inmediata, el endeudamiento permanente y la competencia individual.

Así, la apertura política que deja este recorrido no consiste en sustituir un modelo técnico por otro; existe una alternativa más esperanzadora: disputar el sentido mismo de lo rural. La soberanía material, los TECAM, la agroecología y las formas comunitarias de organización adquieren relevancia porque interrumpen la naturalización del desarrollo hegemónico. Es por ello por lo que, allí donde el discurso dominante ve atraso, estas experiencias revelan memoria productiva, racionalidad ecológica y capacidad de decisión colectiva; allí donde el mercado ve unidades dispersas y poco competitivas, aparece una trama histórica de trabajo, cuidado, alimento y territorio. Esa es, quizá, la enseñanza política más importante por conquistar: el campesinado no está por fuera de la historia, sigue disputando, en condiciones desiguales, la posibilidad de hacerla de otro modo.

La disputa por la vida como núcleo de la cuestión agraria contemporánea

En última instancia, lo que este libro pone en evidencia es que la cuestión agraria contemporánea no puede reducirse a un problema de acceso a la tierra o de eficiencia productiva. Lo que está en juego es la forma en que la vida se organiza en los territorios.

La financiarización intenta subordinar esa vida a la lógica del capital, aunque no siempre lo logra. En las prácticas cotidianas, las decisiones productivas, los intercambios y las relaciones comunitarias, se configuran formas de existencia que desbordan esa lógica.

La síntesis que deja este recorrido es exigente: la soberanía material no se decreta, se cultiva. Requiere tierra, agua, semillas, organización, memoria, conocimiento y tiempo social liberado de la urgencia del pago, así como una crítica de las formas institucionales que han reducido el campo a productividad, inclusión financiera o eficiencia de mercado. La vida campesina no pide ser conservada como pieza folclórica; en cambio, exige condiciones materiales para decidir, producir, cuidar y permanecer. Esa exigencia condensa el sentido político de la obra: frente a una ruralidad administrada por la deuda, la resistencia campesina afirma que el territorio sigue siendo un lugar donde la vida puede organizarse de otra manera.

Entonces, la soberanía material no aparece como un ideal abstracto. Esta se construye en lo concreto, lo cotidiano, lo que se siembra, lo que se intercambia y lo que se cuida. Y es allí, precisamente, donde la disputa permanece abierta.

Referencias

- Adriaenssens, J., Dessein, J., y Adam, J. (2025). Science as a territory in dispute: An analysis of power and paradigms in the conceptualization of agroecology. *Agriculture and Human Values*, 42, 1757–1771. <https://doi.org/10.1007/s10460-025-10723-2>
- Agencia Nacional de Tierras. (2025, 30 de diciembre). *Territorios Campesinos Agroalimentarios*. Datos Abiertos Agencia Nacional de Tierras. <https://data-agenciadetierras.opendata.arcgis.com/search?tags=tecam>
- Agudelo-Hz, W.-J., Castillo-Barrera, N.-C., y Uriel, M.-G. (2023). Scenarios of land use and land cover change in the Colombian Amazon to evaluate alternative post-conflict pathways. *Scientific Reports*, 13. <https://doi.org/10.1038/s41598-023-29243-2>
- Altieri, M. A., y Nicholls, C. I. (2017). Agroecology: A brief account of its origins and currents of thought in Latin America. *Agroecology and Sustainable Food Systems*, 41(3–4), 231–237. <https://doi.org/10.1080/21683565.2017.1287147>
- Altieri, M. A., y Toledo, V. M. (2011). The agroecological revolution in Latin America: Rescuing nature, ensuring food sovereignty and empowering peasants. *The Journal of Peasant Studies*, 38(3), 587–612. <https://doi.org/10.1080/03066150.2011.582947>
- Argueta, Q. y Toledo, V. M. (2023). La modernización agroindustrial y el surgimiento de la agroecología en México (1920-1960). *Historia Ambiental Latinoamericana y Caribeña*, 13(3), 76-106. <https://doi.org/10.32991/2237-2717.2023v13i3.p76-106>
- Arrighi, G. (1994). *The long twentieth century: Money, power, and the origins of our times*. Verso.
- Badiou, A. (2022). *The Immanence of Truths: Being and Event III*. Bloomsbury Academic.
- Banca de las Oportunidades y Superintendencia Financiera de Colombia. (2020). *Reporte de inclusión financiera 2020*. Puntoaparte. https://www.bancadelasoportunidades.gov.co/sites/default/files/2021-07/REPORTE_DE_INCLUSION_FINANCIERA_2020.pdf
- Banerjee, S. B., y Jackson, L. (2017). Microfinance and the business of poverty reduction: Critical perspectives from rural Bangladesh. *Human Relations*, 70(1), 63–91. <https://doi.org/10.1177/0018726716640865>
- Barreto García, J. C. (2023). Zonas de Reserva Campesina e implementación del Acuerdo de Paz en Colombia. *Administración y Desarrollo*, 53(2), 6. <https://doi.org/10.22431/25005227.vol53n2.6>

- Barrios Latorre, S. A., Sadovska, V., y Chongtham, I. R. (2023). Perspectives on agroecological transition: The case of Guachetá municipality, Colombia. *Agroecology and Sustainable Food Systems*, 47(3), 382–412. <https://doi.org/10.1080/21683565.2022.2163449>
- Bezner Kerr, R., Postigo, J. C., Smith, P., Cowie, A., Singh, P. K., Rivera-Ferre, M., Tira-do-von der Pahlen, M. C., Campbell, D., y Neufeldt, H. (2023). Agroecology as a transformative approach to tackle climatic, food, and ecosystemic crises. *Current Opinion in Environmental Sustainability*, 62, 101275. <https://doi.org/10.1016/j.cosust.2023.101275>
- Blake, L. J., Chohan, J. K., y Escobar, M. P. (2023). Agro-extractivism and neoliberal conservation: Campesino abandonment in the Boyacá páramos, Colombia. *Journal of Rural Studies*, 102, 103071. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2023.103071>
- Blaser, M. (2025). Why political ontology is not about the nonhuman, but what haunts it. En *The New Routledge Handbook of Political Ecology* (pp. 435–444). Routledge.
- Blaser, M., y De la Cadena, M. (2018). Pluriverse: Proposals for a world of many worlds. En M. De la Cadena y M. Blaser (Eds.), *A World of Many Worlds* (pp. 1–22). Duke University Press.
- Bollier, D. (2014). *Think like a commoner: A short introduction to the life of the commons*. New Society Publishers.
- Bonatti, M., Guimarães Reynaldo, R., Martín-López, B., Bolívar, S., Cordero-Fernández, M., Chavez Miguel, G., Martín, A., Hämmerle, J., Schröter, B., Erismann, C., Da Silva Rosa, T., Hellin, J., Schlindwein, I., Acevedo Osorio, Á., Medina, L., Baldivieso, C., Eufemia, L., Jacobi, J., Lobo Guerrero, A. M., y Sieber, S. (2025). Uncovering decolonial pedagogies for learning agroecological transitions: Comparative analysis of South America cases. *Global Environmental Change*, 94, 103042. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2025.103042>
- Borras, S. M., y Franco, J. C. (2012). Global land grabbing and trajectories of agrarian change: A preliminary analysis. *Journal of Agrarian Change*, 12(1), 34–59. <https://doi.org/10.1111/j.1471-0366.2011.00339.x>
- Borsatto, R. S., y Souza-Esquerdo, V. F. (2019). MST's experience in leveraging agroecology in rural settlements: Lessons, achievements, and challenges. *Agroecology and Sustainable Food Systems*, 43(7–8), 915–935. <https://doi.org/10.1080/21683565.2019.1615024>
- Bourdieu, P. (2007). *El sentido práctico*. Siglo XXI. Editores.
- Breman, J. (2016). *At work in the informal economy of India: A perspective from the bottom up*. Oxford University Press.

- Cáceres, D. M. (2015). Accumulation by dispossession and socio-environmental conflicts caused by the expansion of agribusiness in Argentina. *Journal of Agrarian Change*, 15(1), 116–147. <https://doi.org/10.1111/joac.12057>
- Cáceres Gaitán, M. Á., Carrillo González, D., Castellanos Acosta, M., Corporación Geoambiental Terrae, León Linares, J. A., Machado Mosquera, M. y Quintero Chavarría, E. (2023). *Extractivismo y captura del Estado en Colombia: Aportes contra la impunidad* (F. Vargas Valencia, Coord.). Fundación Heinrich Böll Colombia. https://co.boell.org/sites/default/files/2023-06/extractivismo-y-capt.web_.pdf
- Carvajal, M., Restrepo, E. M., y Calle, Z. (2022). Sistemas silvipastoris e conectividade ecológica em uma paisagem de pastagem na região Magdalena médio, Colômbia. *Revista Agroecossistemas*, 14(2), 134–153. <https://doi.org/10.18542/ragros.v14i2.13604>
- Castro de Araújo, D. F., y Araújo Sobrinho, F. L. (2022). O Avanço do Neoliberalismo e a Reforma Agrária Brasileira. *Geopauta*, 6, e10947. <https://doi.org/10.22481/rg.v6.e2022.10947>
- Cely Muñoz, N. (2018). La disputa por el territorio en el posconflicto rural en Colombia: El caso del territorio campesino agroalimentario del norte de Nariño y el sur del Cauca. *Análisis Político*, 31(92), 52-68. <https://doi.org/10.15446/anpol.v31n92.71097>
- Chayanov, A. V. (1974). La organización de la unidad económica campesina (R. M. Russovich, Trad.). Ediciones Nueva Visión.
- Chavez-Miguel, G., Bonatti, M., Ácevedo-Osorio, Á., Sieber, S., y Löhr, K. (2022). Agroecology as a grassroots approach for environmental peacebuilding: Strengthening social cohesion and resilience in post-conflict settings with community-based natural resource management. *GAIA - Ecological Perspectives for Science and Society*, 31(1), 36–45. <https://doi.org/10.14512/gaia.31.1.9>
- Chohan, J. K. (2024). The corporate food regime in conflict zones: Armed violence and agriculture in the Zona de Reserva Campesina-Valle del Río Cimitarra, Colombia. *Geoforum*, 156, 104112. <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2024.104112>
- Clapp, J., y Isakson, S. R. (2018). *Speculative Harvests: Financialization, Food, and Agriculture*. Practical Action Publishing.
- Clerici, N., Cote-Navarro, F., Escobedo, F. J., Rubiano, K., y Villegas, J. C. (2019). Spatio-temporal and cumulative effects of land use-land cover and climate change on two ecosystem services in the Colombian Andes. *Science of the Total Environment*, 685, 1181–1192. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.06.275>

- Comisión de la Verdad. (2022). *Hay futuro, si hay verdad*. Comisión de la Verdad. <https://www.comisiondelaverdad.co/hay-futuro-si-hay-verdad>
- Composto, C. y Navarro, M. L. (2014). Claves de lectura para comprender el despojo y las luchas por los bienes comunes naturales en América Latina. En C. Composto y M. L. Navarro (Comps.), *Territorios en disputa: Despojo capitalista, luchas en defensa de los bienes comunes naturales y alternativas emancipatorias para América Latina* (pp. 33-75). Bajo Tierra Ediciones.
- Congreso de los Pueblos. (2022). *Agenda por la vida y la soberanía de los territorios: Lineamientos políticos para una Colombia rural*. Ediciones Desde Abajo.
- Corporación Autónoma Regional del Tolima. (2023). *Mapas áreas protegidas*. CORTOLIMA. <https://cortolima.gov.co/mapas-areas-protegidas>
- Creswell, J. W., y Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Decreto 0780 de 2024 (24 de junio), por el cual se adiciona el Título 26 a la Parte 14 del Libro 2 del Decreto número 1071 de 2015 [...] y se establecen los ajustes normativos para simplificar y agilizar los procedimientos de constitución, reconocimiento y formalización de Territorios Campesinos Agroalimentarios (TECAM). Diario Oficial No. 52.797. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=242896>
- De la Cadena, M. (2020). Cosmopolítica indígena en los Andes: Reflexiones conceptuales más allá de la “política”. *Tabula Rasa*, (33), 273-311. <https://doi.org/10.25058/20112742.n33.10>
- De Lima, A. T., y Pereira, S. (2021). Financialization and land dispossession in the Brazilian Amazon: The role of microcredit in rural development. *Journal of Latin American Geography*, 20(2), 165–183.
- De Sousa Santos, B. (2009). *Una epistemología del Sur: La reinención del conocimiento y la emancipación social*. CLACSO; Siglo del Hombre Editores.
- De Sousa Santos, B. (2014). *Epistemologies of the South: Justice against Epistemicide*. Routledge.
- De Sousa Santos, B. (2018). *The End of the Cognitive Empire: The Coming of Age of Epistemologies of the South*. Duke University Press.
- De Sousa Santos, B. (2021). *El fin del imperio cognitivo: La afirmación de las epistemologías del Sur*. Trotta.

- Del Giorgio, O. (2024). A framework for understanding land control transfer in agricultural commodity frontiers. *Journal of Agrarian Change*, 24(1), e12560. <https://doi.org/10.1111/joac.12560>
- Demirgüç-Kunt, A., Klapper, L., Singer, D., Ansar, S., y Hess, J. (2020). The Global Findex Database 2017: Measuring financial inclusion and opportunities to expand access to and use of financial services. *The World Bank Economic Review*, 34(Supplement_1), S2–S8. <https://doi.org/10.1093/wber/lhz013>
- Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2016). *3er Censo Nacional Agropecuario. Tomo 1 – Memorias*. DANE. <https://www.dane.gov.co/files/images/foros/foro-de-entrega-de-resultados-y-cierre-3-censo-nacional-agropecuario/CNATomo1-Memorias.pdf>.
- Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2020). *Nota metodológica de la medida de pobreza multidimensional municipal con información censal*. DANE. https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/2018/informacion-censal/nota-metodologia-censal-pobreza-municipal-2018.pdf
- Díaz Avendaño, J. E. y Pachón Ariza, F. A. (2024). Territorialidad campesina y soberanía alimentaria: Estudio de caso en el macizo colombiano. *Revista de Economía e Sociología Rural*, 62(4), e277263. <https://doi.org/10.1590/1806-9479.2023.277263>
- Duarte, C. y Castaño, A. (2020). Territorio y derechos de propiedad colectivos para comunidades rurales en Colombia. *Maguaré*, 34(1), 111-147. <https://doi.org/10.15446/mag.v34n1.90390>
- Duarte, C., Noriega, J. y Betancourt, D. (2024). *Territorios Campesinos Agroalimentarios – TECAM*. Observatorio de Tierras. <https://www.observatoriodetierras.org/territorios-campesinos-agroalimentarios-tecam>
- Dupas, P., y Robinson, J. (2013). Savings constraints and microenterprise development: Evidence from a field experiment in Kenya. *American Economic Journal: Applied Economics*, 5(1), 163–192. <https://doi.org/10.1257/app.5.1.163>
- Escobar, A. (2014). *Territorios de diferencia: Lugar, movimientos, vida, redes*. Editorial Universidad del Cauca.
- Escobar, A. (2018). *Designs for the Pluriverse: Radical Interdependence, Autonomy, and the Making of Worlds*. Duke University Press. <https://doi.org/10.1215/9780822371816>
- Escobar, A. (2025). *Hilos del pensamiento crítico: Cultura, ecología, posdesarrollo, pluriverso y transiciones*. Siglo Editorial.

- Ewert, F., Baatz, R., y Finger, R. (2023). Agroecology for a sustainable agriculture and food system: From local solutions to large-scale adoption. *Annual Review of Resource Economics*, 15(1), 351–381. <https://doi.org/10.1146/annurev-resource-102422-090105>
- Fairbairn, M. (2014). ‘Like gold with yield’: Evolving intersections between farmland and finance. *The Journal of Peasant Studies*, 41(5), 777–795. <https://doi.org/10.1080/03066150.2013.873977>
- Fajardo Montaña, D. (2015). *Estudio sobre los orígenes del conflicto social armado, razones de su persistencia y sus efectos más profundos en la sociedad colombiana*. Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas. <https://centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/comisionPaz2015/FajardoDario.pdf>
- Flick, U. (2018). *An Introduction to Qualitative Research* (6.º ed.). Sage Publications.
- Food and Agriculture Organization. (2022). *The State of Food and Agriculture 2022. Leveraging automation in agriculture for transforming agrifood systems*. FAO. <https://doi.org/10.4060/cb9479en>
- Foster, J. B. (2020). *The return of nature: Socialism and ecology*. NYU Press.
- Foster, J. B., y Suwandi, I. (2020). COVID-19 and catastrophe capitalism: Commodity chains and ecological-epidemiological-economic crises. *Monthly Review*, 72(2). https://doi.org/10.14452/MR-072-02-2020-06_1
- Foucault, M. (1978). The history of sexuality (Vol. I). En *Feminist Studies* (pp. 61–66). Routledge.
- Foucault, M. (2007). *Nacimiento de la biopolítica. Curso en el Collège de France (1978-1979)* (H. Pons, Trad.). Fondo de Cultura Económica (FCE).
- Fricke, M. (2007). *Epistemic Injustice: Power and the Ethics of Knowing* (1.º ed.). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198237907.001.0001>
- Garikipati, S., Johnson, S., Guérin, I., y Szafarz, A. (2017). Microfinance and gender: Issues, challenges and the road ahead. *The Journal of Development Studies*, 53(5), 641–648. <https://doi.org/10.1080/00220388.2016.1205736>
- Gerber, J.-F., Moreda, T., y Sathyamala, C. (2021). The awkward struggle: A global overview of social conflicts against private debts. *Journal of Rural Studies*, 86, 651–662. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2021.08.012>
- Giraldo, O. F., y Rosset, P. M. (2023). Emancipatory agroecologies: Social and political principles. *The Journal of Peasant Studies*, 50(3), 820–850. <https://doi.org/10.1080/03066150.2022.2120808>

- Gliessman, S. R. (2014). *Agroecology: The Ecology of Sustainable Food Systems* (3.º ed.). CRC Press. <https://doi.org/10.1201/b17881>
- Grajales, J. (2017). Apropiación global de tierras y reacciones políticas desde abajo. En M. Edelman, R. Hall, S. Borras, I. Scoones, B. White y W. Wolford (Eds.), *Apropiación de tierras, disputa legal y cambio institucional en Colombia*. Icaria.
- Gramsci, A. (1971). *Selections from the Prison Notebooks*. International Publishers.
- Gramsci, A. (2011). *Cuadernos de la cárcel* (A. M. Palos, Trad.). Ediciones Era.
- Green, W. N. (2022). Financing agrarian change: Geographies of credit and debt in the global south. *Progress in Human Geography*, 46(3), 849–869. <https://doi.org/10.1177/03091325221083211>
- Green, W. N. (2024). The anti-politics of impact investment: Financial self-regulation, market competition and over-indebtedness in Cambodia. *Environment and Planning A: Economy and Space*, 56(6), 1668–1685. <https://doi.org/10.1177/0308518X241239797>
- Green, W. N., Chhom, T., Mony, R., y Estes, J. (2023). The underside of microfinance: Performance indicators and informal debt in Cambodia. *Development and Change*, 54(4), 780–803. <https://doi.org/10.1111/dech.12778>
- Grisales, P. A. (2019). *Economía campesina en Colombia: Despojos y resistencias*. Pesquisa Javeriana. <https://www.javeriana.edu.co/pesquisa/economia-campesina-en-colombia-despojos-y-resistencias/>
- Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. (2021). *Cambio climático 2021. Bases físicas. Resumen para responsables de políticas*. IPCC. https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WG1_SPM_Spanish.pdf
- Gudynas, E. (2011). Más allá del nuevo extractivismo: Transiciones sostenibles y alternativas al desarrollo. En F. Wanderley (Coord.), *El desarrollo en cuestión. Reflexiones desde América Latina* (pp. 379-410). Oxfam y CIDES-UMSA.
- Gudynas, E. (2012). Estado compensador y nuevos extractivismos: Las ambivalencias del progresismo sudamericano. *Nueva Sociedad*, 237, 128-146.
- Guérin, I., Roesch, M., Venkatasubramanian, G., y Kumar, K. S. (2013). The Social Meaning of Over-Indebtedness and Creditworthiness in the Context of Poor Rural South Indian Households (Tamil Nadu) 1. En *Microfinance, Debt and Over-Indebtedness* (pp. 125–150). Routledge.
- Habermas, J. (2023). *Conocimiento e interés*. Taurus.

- Haesbaert, R. (2004). *O mito da desterritorialização: Do “fim dos territórios” à multiterritorialidade*. Bertrand Brasil.
- Haesbaert, R. (2011). El mito de la desterritorialización: Del “fin de los territorios” a la multiterritorialidad. Siglo XXI Editores.
- Haesbaert, R. (2020). Del cuerpo-territorio al territorio-cuerpo (de la Tierra): Contribuciones decoloniales. *Cultura y representaciones sociales*, 15(29), 267-301.
- Haesbaert, R. (2022). A geografia entre conhecimento situado, abordagem descolonial e interseccionalidade. *GEOgraphia*, 24(53). <https://doi.org/10.22409/GEOgraphia2022.v24i53.a55621>
- Harvey, D. (1975). The geography of capitalist accumulation: A reconstruction of the Marxian theory. *Antipode*, 7(2), 9–21.
- Harvey, D. (2004). *El nuevo imperialismo*. Ediciones Akal.
- Harvey, D. (2014). *Diecisiete contradicciones y el fin del capitalismo*. Traficantes de Sueños.
- Harvey, D. (2017). The “new” imperialism: Accumulation by dispossession. En *Karl Marx* (pp. 213–237). Routledge.
- Harvey, D. (2026). *The Story of Capital: What Everyone Should Know About How Capital Works*. Verso Books.
- Heredia Hernández, D. y Hernández Moreno, M. del C. (2022). Resistencia a la transición agroecológica en México. *Región y Sociedad*, 34, e1581. <https://doi.org/10.22198/rys2022/34/1581>
- Hershaw, E., y Sauer, S. (2023). Land and investment dynamics along Brazil’s ‘final’ frontier: The financialization of the Matopiba at a political crossroads. *Land Use Policy*, 131, 106675. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2023.106675>
- Holloway, J. (2005). *Cambiar el mundo sin tomar el poder: El significado de la revolución hoy*. Herramienta.
- Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. (2018). *Atlas de clima, radiación y viento de Colombia*. IDEAM.
- Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. (2022). *Monitoreo de coberturas de la tierra en zonas rurales*. IDEAM.
- Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. (2023). *Estudio Nacional del Agua 2022*. IDEAM. https://www.ideam.gov.co/sites/default/files/prensa/boletines/2024-08-27/estudio_nacional_del_agua_2022.pdf

- Instituto Geográfico Agustín Codazzi. (2016). Suelos y tierras de Colombia. Subdirección de Agrología (Tomo 1). IGAC.
- International Fund for Agricultural Development. (2016). Rural development report 2016: Fostering inclusive rural transformation. IFAD. HYPERLINK "https://www.ifad.org/en/w/publications/rural-development-report-2016?utm_source=chatgpt.com"<https://www.ifad.org/en/w/publications/rural-development-report-2016>
- Jakobsen, J. (2021). New food regime geographies: Scale, state, labor. *World Development*, 145, 105523. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2021.105523>
- Karim, L. (2011). *Microfinance and Its Discontents: Women in Debt in Bangladesh*. University of Minnesota Press. <https://doi.org/10.5749/minnesota/9780816670949.001.0001>
- Kay, C. (1989). *Latin American Theories of Development and Underdevelopment*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203835418>
- Kay, C. (2015). The Agrarian Question and the Neoliberal Rural Transformation in Latin America. *European Review of Latin American and Caribbean Studies*, (100), 73–83. <https://doi.org/10.18352/erlacs.10123>
- Kröger, M. (2025). Land-grabbing mafias and dispossession in the Brazilian Amazon: Rural–urban land speculation and deforestation in the Santarém region. *Globalizations*, 22(8), 1454–1472. <https://doi.org/10.1080/14747731.2024.2319440>
- Kumar, R., y Prasanna, C. K. (2025). Agrarian crisis, farmer suicides and women farmers in India: A systematic literature review. *International Journal of Community Well-Being*, 8(3), 525–548. <https://doi.org/10.1007/s42413-025-00253-4>
- Lal, R. (2020). Soil organic matter content and crop yield. *Journal of Soil and Water Conservation*, 75(2), 27A-32A. <https://doi.org/10.2489/jswc.75.2.27A>
- Larraín, C. (2009). *¿Existe un modelo de microfinanzas en América Latina?* (Serie Financiamiento del Desarrollo No. 220, LC/L.3147-P). Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
- Lazzarato, M. (2013). *La fábrica del hombre endeudado. Ensayo sobre la condición neoliberal*. Amorrortu.
- Lefebvre, H. (1991). *The Production of Space*. Blackwell.
- Leff, E. (2010). Imaginarios sociales y sustentabilidad. *Cultura y representaciones sociales*, 5(9), 42-121.
- Leff, E. (2019). *Ecología política. De la deconstrucción del capital a la territorialización de la vida*. Siglo XXI Editores.

- Levidow, L., Pimbert, M., y Vanloqueren, G. (2014). Agroecological Research: Conforming—or Transforming the Dominant Agro-Food Regime? *Agroecology and Sustainable Food Systems*, 38(10), 1127–1155. <https://doi.org/10.1080/21683565.2014.951459>
- Ley 2294 de 2023 (19 de mayo), por medio de la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia, potencia mundial de la vida”. Diario Oficial No. 52.374. <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=209510>
- Leys, P., y Raftopoulos, M. (2025). Counter-hegemonic resistance on the extractive frontier in Peru: Exploring the legal-political nexus. *The Journal of Peasant Studies*, 52(2), 282–301. <https://doi.org/10.1080/03066150.2024.2333535>
- Lukács, G. (1969). *Historia y conciencia de clase*. Grijalbo.
- Machado, A. (2017). *El problema de la tierra: Conflicto y desarrollo en Colombia*. Debate.
- Mançano Fernandes, B. (2023). Territories of hope: A human geography of agrarian politics in Brazil. *Environment and Planning E: Nature and Space*, 6(3), 1447–1462. <https://doi.org/10.1177/25148486221135303>
- Martínez Alier, J. (2021). *El ecologismo de los pobres: Conflictos ambientales y lenguajes de valoración*. Icaria.
- Martínez-Torres, M. E., y Rosset, P. M. (2010). La Vía Campesina: The birth and evolution of a transnational social movement. *The Journal of Peasant Studies*, 37(1), 149–175. <https://doi.org/10.1080/03066150903498804>
- Marx, K. (2008). *El capital: Crítica de la economía política. Libro I: El proceso de producción del capital*.
- Massey, D. (2005). *For space*. SAGE.
- Méndez, V. E., Bacon, C. M., y Cohen, R. (2013). Agroecology as a Transdisciplinary, Participatory, and Action-Oriented Approach. *Agroecology and Sustainable Food Systems*, 37(1), 3–18. <https://doi.org/10.1080/10440046.2012.736926>
- Mignolo, W. D. (2020). *The Darker Side of Western Modernity: Global Futures, Decolonial Options*. Duke University Press.
- Millán-Quijano, J., y Pulgarín, S. (2023). Oiling up the field. Forced internal displacement and the expansion of palm oil in Colombia. *World Development*, 162, 106130. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2022.106130>
- Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. (2024). *Decreto 0780 de 2024, por el cual se adiciona el Título 27 a la Parte 14 del Libro 2 del Decreto 1071 de 2015 y se esta-*

blecen ajustes para la constitución, reconocimiento y formalización de Territorios Campesinos Agroalimentarios (TECAM). Diario Oficial.

- Moore, J. W. (2025). *Capitalism in the Web of Life: Ecology and the Accumulation of Capital*. Verso Books.
- Morales Zapata, D. A. (2021). Subjetividad campesina y acumulación de capital en Sonson, Antioquia: 1997-2020. *Ciencias Sociales y Educación*, 10(20), 113-137. <https://doi.org/10.22395/csye.v10n20a6>
- Moreira-Dantas, I. R., Martínez-Zarzoso, I., Henning, C., y Souza dos Santos, M. A. (2023). Rural credit acquisition for family farming in Brazil: Evidence from the legal Amazon. *Journal of Rural Studies*, 101, 103041. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2023.103041>
- Murad, C. A., Pearse, J., y Huguet, C. (2024). Multitemporal monitoring of paramos as critical water sources in Central Colombia. *Scientific Reports*, 14(1), 16706. <https://doi.org/10.1038/s41598-024-67563-z>
- Noriega, J. (2024). *Marco conceptual y normativo de los derechos territoriales del campesinado, como insumo para el Sistema de Administración del Territorio -SAT*. Departamento Nacional de Planeación.
- Oidhaco. (2013). *Industrias extractivas, recursos naturales y derechos humanos en Colombia*. <https://www.oidhaco.org/wp-content/uploads/2020/11/1590673988.pdf>
- Otero, G., Gürcan, E. C., Pechlaner, G., y Liberman, G. (2018). Food security, obesity, and inequality: Measuring the risk of exposure to the neoliberal diet. *Journal of Agrarian Change*, 18(3), 536–554. <https://doi.org/10.1111/joac.12252>
- Oxfam. (2017). *Radiografía de la desigualdad: Lo que nos dice el último censo agropecuario sobre la distribución de la tierra en Colombia*. https://oi-files-d8-prod.s3.eu-west-2.amazonaws.com/s3fs-public/file_attachments/radiografia_de_la_desigualdad.pdf
- Patel, R. (2009). Food sovereignty. *The Journal of Peasant Studies*, 36(3), 663–706. <https://doi.org/10.1080/03066150903143079>
- Peluso, N. L., y Lund, C. (2011). New frontiers of land control: Introduction. *The Journal of Peasant Studies*, 38(4), 667–681. <https://doi.org/10.1080/03066150.2011.607692>
- Pizarro Muñoz, E. F., Niederle, P. A., Corrado de Gennaro, B., y Roselli, L. (2021). Agri-Food Markets towards Agroecology: Tensions and Compromises Faced by Small-Scale Farmers in Brazil and Chile. *Sustainability*, 13(6), 3096. <https://doi.org/10.3390/su13063096>

- Porto-Gonçalves, C. W. (2001). *Geo-grafías: Movimientos sociales, nuevas territorialidades y sustentabilidad*.
- Potter, L. (2020). Colombia's oil palm development in times of war and 'peace': Myths, enablers and the disparate realities of land control. *Journal of Rural Studies*, 78, 491–502. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2019.10.035>
- Pretty, J., Benton, T. G., Bharucha, Z. P., Dicks, L. V., Flora, C. B., Godfray, H. C. J., Goulson, D., Hartley, S., Lampkin, N., Morris, C., Pierzynski, G., Prasad, P. V. V., Reganold, J., Rockström, J., Smith, P., Thorne, P., y Wratten, S. (2018). Global assessment of agricultural system redesign for sustainable intensification. *Nature Sustainability*, 1(8), 441–446. <https://doi.org/10.1038/s41893-018-0114-0>
- Quijano, A. (2000). *Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina* (Vol. 13). Clacso.
- Quintero Castaño, I. A. y Garcés Pulido, Y. A. (2023). Subjetividad campesina en marcos de despojo a través del crédito. *Revista Estrategia Organizacional*, 12(2), 55-72. <https://doi.org/10.22490/25392786.7231>
- Ramírez-Virviescas, N. y Guevara, D. A. (2021). Las microfinanzas rurales en Colombia y el proceso de financiarización: Un estudio de caso. *Apuntes del CENES*, 40(71), 219-252. <https://revistas.uptc.edu.co/index.php/cenes/article/view/11466/10569>
- Rawicz Morales, D. (2025). Interpelar la colonialidad del poder desde el colonialismo interno. *Revista Mexicana de Sociología*, 87(3), 579-608. <https://doi.org/10.22201/iis.01882503p.2025.3.62967>
- Robbins, P. (2019). *Political Ecology: A Critical Introduction*. John Wiley y Sons.
- Rodríguez Eraso, N., Armenteras-Pascual, D., y Alumbroeros, J. R. (2013). Land use and land cover change in the Colombian Andes: Dynamics and future scenarios. *Journal of Land Use Science*, 8(2), 154–174. <https://doi.org/10.1080/1747423X.2011.650228>
- Rodríguez Pinzón, N. Y. y Aranda Camacho, Y. (2024). Análisis de capacidades para la activación de sistemas agroalimentarios localizados: El caso del cacao de la Provincia de Occidente (Boyacá, Colombia). *Equidad y Desarrollo*, (43), e1588. <https://doi.org/10.19052/eq.vol1.iss43.8>
- Rosero, J. E. (2025). Peasant Agro-Food Territories: Agroecology and resistance against extractivism in Colombia. *Revista de Ciencias Agrícolas*, 42(2), 210. <https://doi.org/10.22267/rcia.254202.210>
- Rosset, P. M., Altieri, M. A., y Sevilla Guzmán, E. (2017). *Agroecology: Science and politics*. Practical Action Publishing.

- Sanín, F. G., y Carranza Franco, F. (2017). Organizing women for combat: The experience of the FARC in the Colombian war. *Journal of Agrarian Change*, 17(4), 770–778. <https://doi.org/10.1111/joac.12238>
- Santos, M. (2000). *La naturaleza del espacio: Técnica y tiempo. Razón y emoción*. Ariel.
- Santos, M. (2002). *O retorno do território. In Território: Globalização e fragmentação*. HUCITEC/ Annablume.
- Sauer, S., y Pereira Leite, S. (2012). Agrarian structure, foreign investment in land, and land prices in Brazil. *The Journal of Peasant Studies*, 39(3–4), 873–898. <https://doi.org/10.1080/03066150.2012.686492>
- Sevilla Guzmán, E. (2006). *De la sociología rural a la agroecología*. Icaria.
- Shakir, H., y Tus-Saifiyah, A. (2022). The impact of microfinance on the poor in Kenya: A systematic review of evidence from Kenya. *African Journal of Business Management*, 16(12), 272–280. <https://doi.org/10.5897/AJBM2022.9412>
- Soederberg, S. (2014). *Debtfare States and the Poverty Industry: Money, Discipline and the Surplus Population*. Routledge.
- Soriano Hoyos, K. A. (2025). *Conflicto entre conservación y producción: los monocultivos como amenaza para la integridad de los bosques altoandinos en Colombia* [Trabajo de grado especialización, Universidad de Antioquia]. <https://bibliotecadigital.udea.edu.co/entities/publication/e8c776a9-d4f9-4077-b7be-d9ff38e26703>
- Stake, R. E. (2008). Qualitative Case Studies. En N. K. Denzin y Y. S. Lincoln (Eds.), *Strategies of Qualitative Inquiry* (3.º ed., pp. 119–149). Sage Publishing Inc.
- Svampa, M. (2019). *Las fronteras del neoextractivismo en América Latina: Conflictos socioambientales, giro ecoterritorial y nuevas dependencias*. CALAS.
- Tejedor Estupiñán, J. M. (2023). La reforma rural y el problema de la distribución desigual de la tierra en Colombia. *Revista Finanzas y Política Económica*, 15(1), 9–18. <https://doi.org/10.14718/revfinanzpolitecon.v15.n1.2023.1>
- Testa Monteiro, F., Wilson, A. J., Mancini Teixeira, H., Carvalho Gomes, L., Alves Fernandes, R. B., Vieira Botelho, M. I., Lopes, I., Simas, F. N. B., Kuyper, T. W., y Cardoso, I. M. (2025). Drivers for agroecological transition: An analysis of 40 years of experience in Minas Gerais, Brazil. *Agricultural Systems*, 222, 104174. <https://doi.org/10.1016/j.agsy.2024.104174>
- Toledo, V. M. (2013). El metabolismo social: Una nueva teoría socioecológica. *Relaciones. Estudios de Historia y Sociedad*, 34(136), 41–71. <https://doi.org/10.24901/rehs.v34i136.163>

- Toledo, V. M., Alarcón-Cháires, P, y Barón, L. (2002). *La modernización rural de México: Un análisis socioecológico*. Instituto Nacional de Ecología (INE), Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
- Toledo, V. M., y Argueta, Q. (2024). The evolution of agroecology in Mexico, 1920-2023. *Elementa: Science of the Anthropocene*, 12(1), 00092. <https://doi.org/10.1525/elementa.2023.00092>
- Toledo, V. M. y Barrera-Bassols, N. (2008). *La memoria biocultural: la importancia ecológica de las sabidurías tradicionales* (Vol. 3). Icaria.
- Unidad de Planificación Rural Agropecuaria. (2020). *Informalidad de la tenencia de la tierra en Colombia 2019*. UPRA.
- Unidad de Planificación Rural Agropecuaria. (2023). *Frontera Agrícola Nacional 2023*. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural / Sistema de Información para la Planificación Rural Agropecuaria (UPRA).
- Van der Ploeg, J. D. (2010). *Nuevos campesinos: Campesinos e imperios alimentarios*. Icaria.
- Van der Ploeg, J. D. (2014). Peasant-driven agricultural growth and food sovereignty. *The Journal of Peasant Studies*, 41(6), 999–1030. <https://doi.org/10.1080/03066150.2013.876997>
- Velásquez, F. E. (2021). *La participación ciudadana en el sector extractivo en Colombia*. Editorial Dejusticia. <https://www.dejusticia.org/wp-content/uploads/2021/05/La-participacion-ciudadana-en-el-sector-extractivo-en-Colombia.pdf>
- Vergara-Camus, L. (2014). *Land and Freedom: The MST, the Zapatistas and Peasant Alternatives to Neoliberalism*. Bloomsbury Publishing.
- Villamayor-Tomas, S., y García-López, G. (2018). Social movements as key actors in governing the commons: Evidence from community-based resource management cases across the world. *Global Environmental Change*, 53, 114–126. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2018.09.005>
- Wittman, H., Desmarais, A. A., y Wiebe, N. (Eds.). (2010). *Food sovereignty: Reconnecting food, nature and community*. Fernwood Publishing.
- White, B., Graham, C., y Savitri, L. (2023). Agrarian movements and rural populism in Indonesia. *Journal Agrarian Change*, 23(1), 68–84. <https://doi.org/10.1111/joac.12506>
- Zibechi, R. (2008). *Territorios en resistencia: Cartografía política de las periferias urbanas latinoamericanas*. Lavaca.



Sello Editorial

Universidad Nacional
Abierta y a Distancia

**UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA
Y A DISTANCIA (UNAD)**

Sede Nacional José Celestino Mutis
Calle 14 Sur 14-23
PBX: 344 37 00 - 344 41 20
Bogotá, D.C., Colombia

www.unad.edu.co

Para acceder a la versión en línea de este
libro, escanee el siguiente código.

